

PN-ACY-663

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
 PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

2. Contract/Grant Number

AEP-I-04-00-00013-00

3. Publication Date

2003

4. Document Title/Translated Title

Código Procesal Penal de La República Dominicana (Criminal Procedural Code of the Dominican Republic)

5. Author (s)

1. FINJUS

6. Contributing Organization (s)

Management Sciences for Development

7. Pagination

8. Report Number

9. Sponsoring A.I.D. Office

USAID DOMINICAN REPUBLIC
 AEP-I-04-00-00013-00

10. Abstract (optional - 250 word limit)

11. Subject Keywords (optional)

1.	4.
2.	5.
3.	6.

12. Supplementary Notes

Strategic Objective 3 (USAID/SO3)

13. Submitting Official

Chanda Chin

14. Telephone Number

202-537-7410

15. Today's Date

DO NOT write below this line

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD [] INV [] DUPLICATE []

PN-ACy-663

LEY 76-02

**CODIGO
PROCESAL
PENAL**

DE LA REPUBLICA DOMINICANA



Fundación Institucionalidad y Justicia. Inc

**CODIGO PROCESAL PENAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**



Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.
2003



Este libro ha sido reproducido por el
Proyecto Modernización de la Justicia,
auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID),
Santo Domingo, Rep. Dom.

DIAGRAMACIÓN

Frank Ubiera Peralta
Miguelina Frith T.

IMPRESIÓN

EDITORA BÚHO C. x A.
Santo Domingo, República Dominicana
2003

PRESENTACION

La **Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)** se complace en presentar a la sociedad dominicana en general, y a la comunidad jurídica en particular, la publicación del texto del nuevo **Código Procesal Penal de la República Dominicana**, instrumento normativo que habrá de constituirse en el punto de partida de la más significativa transformación que se haya operado jamás en nuestro sistema de justicia penal.

El cuerpo legal que publicamos ha sido el fruto de un esfuerzo decidido y constante de diferentes sectores de la sociedad dominicana comprometidos con el fortalecimiento del Estado de Derecho. El compromiso asumido por **FINJUS**, que ha coordinado desde principios del año 1999 las labores del **Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal**, se ve así plasmado en un **Código Procesal Penal** que tiende a hacer realidad las normas constitucionales que organizan un proceso penal con todas las garantías del debido proceso.

Una completa y detallada **Exposición de Motivos**, preparada por los juristas Félix Damián Olivares Grullón y Ramón Emilio Núñez Núñez, quienes integraron el equipo técnico de redacción de la nueva legislación, nos introduce en la comprensión de la orientación y contenido de la transformación normativa, organi-

zacional y cultural en la que nos coloca el Código Procesal Penal que presentamos al país.

El Código Procesal Penal de la República Dominicana procura asegurar un adecuado balance entre la efectiva vigencia de las garantías y la eficiencia en la persecución penal que demanda una población cada vez más atrapada en una crisis de seguridad que merece mayor atención. Su aplicación e implementación es una tarea que convoca desde ya a todos los sectores. La creación de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, mediante Decreto Presidencial No. 420-02, de fecha 6 de junio de 2002, constituye un primer paso importante que permitirá coordinar los esfuerzos institucionales necesarios para una adecuada implementación del nuevo sistema.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) reafirma su compromiso con esta causa que no es otra que la de humanizar la ejecución penal y acercar la justicia a la ciudadanía, al tiempo que se provee seguridad ante el fenómeno criminal y la violencia social y se tutelan efectivamente los derechos humanos.

Carlos Ramón Salcedo Camacho

Director Ejecutivo FINJUS

INDICE

INDICE	3
---------------------	----------

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción	23
1. Breve esbozo histórico de la Legislación Procesal Penal en la República Dominicana	24
1.1. Constitución y Proceso Penal	24
1.2. Adopción y vicisitudes del Código de Instrucción Criminal	26
2. Orientación y Contenido del Código Procesal Penal	32
2.1. Postulados de la Reforma Procesal Penal	33
2.2. Estructura del Código Procesal Penal	41
3. Parte general	45
3.1. Disposiciones generales	45
3.1.1. Los principios fundamentales que informan el nuevo Proceso Penal	45
3.1.2. Régimen de la acción	49
3.1.3. La justicia penal y los sujetos procesales	53
3.1.4. Actividad procesal	58
3.1.5. Medios de prueba	58
3.1.6. Medidas de coerción	59
3.1.7. Costas e indemnizaciones	60
4. Parte especial	62
4.1. El procedimiento común	62
4.1.1. Procedimiento preparatorio	62
4.1.2. El juicio	65
4.2. Procedimientos especiales	66
4.2.1. Procedimiento por contravenciones	66
4.2.2. Procedimiento para infracciones de acción privada	66
4.2.3. Procedimiento penal abreviado	67
4.2.4. Procedimiento para asuntos complejos	67
4.2.5. Procedimiento a inimputables	68

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

4.2.6. Competencia especial.	68
4.2.7. El Hábeas Corpus	69
5. Recursos y medios de impugnación de las resoluciones judiciales	69
6. Ejecución.	71
7. Necesidad de normas y esfuerzos complementarios	72

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Considerandos	77
--------------------------------	-----------

PARTE GENERAL

Libro I. Disposiciones generales	79
Título I. Principios fundamentales	79
Art. 1. Primacía de la Constitución y los tratados.	79
Art. 2. Solución del conflicto.	79
Art. 3. Juicio previo.	79
Art. 4. Juez natural.	79
Art. 5. Imparcialidad e independencia.	80
Art. 6. Participación de la ciudadanía.	80
Art. 7. Legalidad del proceso.	80
Art. 8. Plazo razonable.	80
Art. 9. Única persecución.	80
Art. 10. Dignidad de la persona.	80
Art. 11. Igualdad ante la ley.	80
Art. 12. Igualdad entre las partes.	80
Art. 13. No autoincriminación.	81
Art. 14. Presunción de inocencia.	81
Art. 15. Estatuto de libertad.	81
Art. 16. Límite razonable de la prisión preventiva.	81
Art. 17. Personalidad de la persecución.	81
Art. 18. Derecho de defensa.	81
Art. 19. Formulación precisa de cargos.	82
Art. 20. Derecho a indemnización.	82
Art. 21. Derecho a recurrir.	82
Art. 22. Separación de funciones.	82
Art. 23. Obligación de decidir.	82

Art. 24. Motivación de las decisiones.	82
Art. 25. Interpretación.	82
Art. 26. Legalidad de la prueba.	83
Art. 27. Derechos de la víctima.	83
Art. 28. Ejecución de la pena.	83
Título II. Acciones que nacen de los hechos punibles	83
Capítulo 1. La acción penal	83
Sección 1. Ejercicio de la acción penal	83
Art. 29. Ejercicio de la acción penal.	83
Art. 30. Obligatoriedad de la acción pública.	83
Art. 31. Acción pública a instancia privada.	84
Art. 32. Acción privada.	84
Art. 33. Conversión.	85
Sección 2. Criterios de oportunidad	85
Art. 34. Oportunidad de la acción pública.	85
Art. 35. Objeción.	86
Art. 36. Efectos.	86
Sección 3. Conciliación	86
Art. 37. Procedencia.	86
Art. 38. Mediación.	87
Art. 39. Efectos.	87
Sección 4. Suspensión condicional del procedimiento	87
Art. 40. Suspensión condicional del procedimiento.	87
Art. 41. Reglas.	88
Art. 42. Revocación.	88
Art. 43. Suspensión del plazo de prueba.	89
Sección 5. Extinción de la acción penal	89
Art. 44. Causas de extinción.	89
Art. 45. Prescripción.	89
Art. 46. Cómputo de la prescripción.	90
Art. 47. Interrupción.	90
Art. 48. Suspensión.	90
Art. 49. Genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad	91

Capítulo 2. Ejercicio y régimen de la acción civil	91
Art. 50. Ejercicio.	91
Art. 51. Intereses colectivos o difusos.	91
Art. 52. Delegación.	91
Art. 53. Carácter accesorio.	92
Capítulo 3. Excepciones.	92
Art. 54. Motivos.	92
Art. 55. Efectos.	92
Libro II. La jurisdicción penal y los sujetos procesales	93
Título I. La jurisdicción penal.	93
Capítulo 1. Jurisdicción y competencia.	93
Art. 56. Jurisdicción.	93
Art. 57. Exclusividad y universalidad.	93
Art. 58. Irrenunciabilidad e indelegabilidad.	93
Art. 59. Competencia.	94
Art. 60. Competencia territorial.	94
Art. 61. Competencias subsidiarias.	94
Art. 62. Competencia universal.	94
Art. 63. Competencia durante la investigación.	95
Art. 64. Fusión y separación de juicios.	95
Art. 65. Excepciones.	95
Art. 66. Incompetencia.	95
Art. 67. Conflicto de competencia.	95
Art. 68. Efectos.	96
Capítulo 2. Tribunales competentes	96
Art. 69. Órganos.	96
Art. 70. Suprema Corte de Justicia.	96
Art. 71. Cortes de Apelación.	96
Art. 72. Jueces de primera instancia.	97
Art. 73. Jueces de la instrucción.	97
Art. 74. Jueces de ejecución penal.	97
Art. 75. Jueces de Paz.	97
Art. 76. Jurisdicción de atención permanente.	98
Art. 77. Despacho judicial.	98
Capítulo 3. Motivos de inhibición y recusación	98

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 78. Motivos.....	98
Art. 79. Trámite de la inhibición.....	99
Art. 80. Forma de la recusación.....	99
Art. 81. Plazo de la recusación.....	100
Art. 82. Trámite de la recusación.....	100
Título II. Víctima y querrelante.....	100
Capítulo 1. La víctima.....	100
Art. 83. La víctima.....	100
Art. 84. Derechos de la víctima.....	100
Capítulo 2. Querrelante.....	101
Art. 85. Calidad.....	101
Art. 86. Actuación y representación.....	101
Art. 87. Responsabilidad.....	101
Título III. Ministerio Público y órganos auxiliares.....	102
Capítulo 1. Ministerio Público.....	102
Art. 88. Funciones.....	102
Art. 89. Unidad y jerarquía.....	102
Art. 90. Inhibición y recusación.....	102
Capítulo 2. Los órganos de investigación y auxiliares.....	102
Art. 91. Función.....	102
Art. 92. Obligaciones.....	103
Art. 93. Dirección de la investigación.....	103
Art. 94. Otros funcionarios.....	103
Título IV. El imputado.....	104
Capítulo 1. Normas generales.....	104
Art. 95. Derecho.....	104
Art. 96. Identificación.....	105
Art. 97. Domicilio.....	105
Art. 98. Incapacidad.....	105
Art. 99. Examen corporal.....	105
Art. 100. Rebeldía.....	105
Art. 101. Efectos de la rebeldía.....	106
Capítulo 2. Declaración del imputado.....	106

Art. 102. Libertad de declarar.	106
Art. 103. Oportunidad o autoridad competente.	106
Art. 104. Defensor.	107
Art. 105. Desarrollo.	107
Art. 106. Forma del interrogatorio.	107
Art. 107. Métodos prohibidos.	108
Art. 108. Acta.	108
Art. 109. Declaraciones separadas.	108
Art. 110. Exclusión.	108
Título V. La defensa técnica	109
Art. 111. Elección.	109
Art. 112. Capacidad.	109
Art. 113. Designación.	109
Art. 114. Número de defensores.	109
Art. 115. Sustitución.	109
Art. 116. Renuncia y abandono.	110
Art. 117. Sanciones.	110
Título VI. Partes civiles.	110
Capítulo 1. El actor civil.	110
Art. 118. Constitución en parte.	110
Art. 119. Requisitos.	110
Art. 120. Ejercicio.	111
Art. 121. Oportunidad.	111
Art. 122. Procedimiento.	111
Art. 123. Facultades.	111
Art. 124. Desistimiento.	112
Art. 125. Efectos del desistimiento.	112
Capítulo 2. El tercero civilmente demandado.	112
Art. 126. Tercero civilmente demandado.	112
Art. 127. Intervención.	112
Art. 128. Incomparecencia.	113
Art. 129. Oposición.	113
Art. 130. Exclusión.	113
Art. 131. Facultades.	113

Título VII. Auxiliares de las partes	113
Art. 132. Asistentes.	113
Art. 133. Consultores técnicos.	113
Título VIII. Obligaciones de las partes	114
Art. 134. Lealtad procesal.	114
Art. 135. Régimen disciplinario.	114
Libro III. Actividad procesal	115
Título único. Actos procesales	115
Capítulo 1. Actos y resoluciones	115
Art. 136. Idioma.	115
Art. 137. Tiempo.	115
Art. 138. Registro.	115
Art. 139. Actas y resoluciones.	115
Art. 140. Grabaciones.	115
Art. 141. Poder coercitivo.	116
Art. 142. Notificaciones.	116
Capítulo 2. Plazos	116
Art. 143. Principios generales.	116
Art. 144. Renuncia o abreviación.	117
Art. 145. Plazos fijados judicialmente.	117
Art. 146. Plazos para decidir.	117
Art. 147. Prórroga del plazo.	117
Capítulo 3. Control de la duración del proceso	117
Art. 148. Duración máxima.	117
Art. 149. Efectos.	118
Art. 150. Plazo para concluir la investigación.	118
Art. 151. Perentoriedad.	118
Art. 152. Queja por retardo de justicia.	118
Art. 153. Demora.	119
Art. 154. Demora de la Suprema Corte de Justicia.	119
Capítulo 4. Cooperación judicial internacional	119
Art. 155. Cooperación.	119

Art. 156. Gastos extraordinarios.	119
Art. 157. Negación de la cooperación.	119
Art. 158. Presencia.	120
Art. 159. Investigaciones conjuntas.	120
Art. 160. Extradición.	120
Art. 161. Extradición activa.	120
Art. 162. Extradición pasiva.	120
Art. 163. Medidas de coerción.	120
Art. 164. Procedimiento.	121
Art. 165. Abogado.	121
Libro IV. Medios de prueba.	121
Título I. Normas generales	121
Art. 166. Legalidad de la prueba.	121
Art. 167. Exclusión probatoria.	121
Art. 168. Renovación, rectificación o cumplimiento.	122
Art. 169. Convalidación.	122
Art. 170. Libertad probatoria.	122
Art. 171. Admisibilidad.	122
Art. 172. Valoración.	122
Título II. Comprobación inmediata y medios auxiliares	123
Art. 173. Inspección del lugar del hecho.	123
Art. 174. Levantamiento e identificación de cadáveres.	123
Art. 175. Registros.	123
Art. 176. Registro de personas.	123
Art. 177. Registros colectivos.	124
Art. 178. Facultades coercitivas.	124
Art. 179. Horario.	124
Art. 180. Registro de moradas y lugares privados.	124
Art. 181. Excepciones.	125
Art. 182. Contenido de la orden.	125
Art. 183. Procedimiento y formalidades.	125
Art. 184. Registro de locales públicos.	125
Art. 185. Operaciones técnicas.	126
Art. 186. Entrega de cosas y documentos. Secuestros.	126
Art. 187. Objetos no sometidos a secuestro.	126
Art. 188. Orden de secuestro.	126

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 189. Procedimiento.	126
Art. 190. Devolución.	127
Art. 191. Secuestro de correspondencia.	127
Art. 192. Interceptación de telecomunicaciones.	127
Art. 193. Clausura de locales y aseguramiento de cosas muebles.	128
Título III. Testimonios	128
Art. 194. Obligación de testificar.	128
Art. 195. Excepción a la obligación de comparecer.	128
Art. 196. Facultad de abstención.	129
Art. 197. Deber de abstención.	129
Art. 198. Comparecencia.	129
Art. 199. Conducencia.	129
Art. 200. Residentes en el extranjero.	129
Art. 201. Forma de la declaración.	130
Art. 202. Testimonios especiales.	130
Art. 203. Testigo reticente.	130
Título IV. Peritos	130
Art. 204. Peritaje.	130
Art. 205. Calidad habilitante.	131
Art. 206. Incapacidad.	131
Art. 207. Nombramiento de peritos.	131
Art. 208. Facultad de las partes.	131
Art. 209. Inhibición y recusación.	131
Art. 210. Citación y aceptación del cargo.	131
Art. 211. Ejecución del peritaje.	132
Art. 212. Dictamen pericial.	132
Art. 213. Nuevo dictamen.	132
Art. 214. Auxilio judicial.	132
Art. 215. Intérpretes.	133
Art. 216. Pericia cultural.	133
Art. 217. Autopsia.	133
Título V. Otros medios de prueba.	133
Art. 218. Reconocimiento de personas.	133
Art. 219. Pluralidad de reconocimientos.	134
Art. 220. Reconocimientos.	134

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 221. Careo.	134
Libro V. Medidas de coerción	134
Título I. Normas generales	134
Art. 222. Principio general.	134
Título II. Medidas de coerción personales	135
Capítulo 1. Arresto y conducencia	135
Art. 223. Citación.	135
Art. 224. Arresto.	135
Art. 225. Orden de arresto.	136
Capítulo 2. Otras medidas	136
Art. 226. Medidas.	136
Art. 227. Procedencia.	137
Art. 228. Imposición.	137
Art. 229. Peligro de fuga.	137
Art. 230. Prueba.	138
Art. 231. Resolución.	138
Art. 232. Acta.	138
Art. 233. Internamiento.	138
Art. 234. Prisión preventiva.	138
Art. 235. Garantía.	139
Art. 236. Ejecución de la garantía.	139
Art. 237. Cancelación de la garantía.	139
Capítulo 3. Revisión de las medidas de coerción	140
Art. 238. Revisión.	140
Art. 239. Revisión obligatoria de la prisión preventiva.	140
Art. 240. Revisión a pedido del imputado.	140
Art. 241. Cese de la prisión preventiva.	140
Art. 242. Prórroga del plazo de la prisión preventiva.	141
Título III. Medidas de coerción reales	141
Art. 243. Embargo y otras medidas conservatorias.	141
Art. 244. Aplicación supletoria.	141
Art. 245. Recurso.	141

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Libro VI. Costas e indemnizaciones	142
Título I. De las costas	142
Art. 246. Imposición	142
Art. 247. Exención	142
Art. 248. Contenido	142
Art. 249. Condena	142
Art. 250. Absolución	142
Art. 251. Archivo	142
Art. 252. Denuncia falsa	142
Art. 253. Acción privada	143
Art. 254. Liquidación y ejecución	143
Título II. De la indemnización al imputado	143
Art. 255. Revisión	143
Art. 256. Determinación	143
Art. 257. Medidas de coerción	143
Art. 258. Obligación	144

PARTE ESPECIAL

Libro I. Procedimiento común	145
Título I. Procedimiento preparatorio	145
Capítulo 1. Normas generales	145
Art. 259. Objeto	145
Art. 260. Alcance de la investigación	145
Art. 261. Registro de la investigación	145
Capítulo 2. Actos iniciales	146
Sección 1. Denuncia	146
Art. 262. Facultad de denunciar	146
Art. 263. Forma y contenido	146
Art. 264. Obligación de denunciar	146
Art. 265. Imputación pública	146
Art. 266. Participación	147
Sección 2. Querrela	147
Art. 267. Querrela	147
Art. 268. Forma y contenido	147
Art. 269. Admisibilidad	147

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 270. Oportunidad.	148
Art. 271. Desistimiento.	148
Art. 272. Imposibilidad de nueva persecución.	148
Sección 3. Intervención de la policía judicial	148
Art. 273. Conocimiento directo.	148
Art. 274. Diligencias preliminares.	148
Art. 275. Medida precautoria.	149
Art. 276. Arresto.	149
Art. 277. Informe sobre las diligencias preliminares.	150
Art. 278. Remisión de objetos secuestrados.	150
Sección 4. Investigación preliminar	150
Art. 279. Inicio.	150
Art. 280. Ejercicio de la acción penal.	151
Art. 281. Archivo.	151
Art. 282. Intervención del querellante y de la víctima.	151
Art. 283. Examen del juez.	151
Art. 284. Medida de coerción.	152
Capítulo 3. Desarrollo de la investigación	152
Art. 285. Diligencias.	152
Art. 286. Proposición de diligencias.	152
Art. 287. Anticipo de prueba.	153
Art. 288. Urgencia.	153
Art. 289. Preservación de los elementos de prueba.	153
Art. 290. Carácter de las actuaciones.	153
Art. 291. Reserva.	154
Art. 292. Resolución de peticiones.	154
Capítulo 4. Conclusión del procedimiento preparatorio.	154
Art. 293. Actos conclusivos.	154
Art. 294. Acusación.	155
Art. 295. Acusación alternativa o subsidiaria.	155
Art. 296. Notificación de la acusación.	155
Art. 297. Pretensiones del actor civil.	155
Título II. Audiencia preliminar	156

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 298. Convocatoria.....	156
Art. 299. Defensa.....	156
Art. 300. Desarrollo de la audiencia.....	156
Art. 301. Resolución.....	157
Art. 302. Presupuesto para apertura a juicio.....	157
Art. 303. Auto de apertura a juicio.....	157
Art. 304. Auto de no ha lugar.....	158
Título III. El juicio.....	158
Capítulo 1. Preparación del debate.....	158
Art. 305. Fijación de audiencia y solución de los incidentes.....	158
Capítulo 2. Principios generales del juicio.....	159
Art. 306. Libertad del imputado y restricciones a su movilidad.....	159
Art. 307. Inmediación.....	159
Art. 308. Publicidad.....	160
Art. 309. Participación de los medios de comunicación.....	160
Art. 310. Restricciones de acceso.....	160
Art. 311. Oralidad.....	161
Art. 312. Excepciones a la oralidad.....	161
Art. 313. Dirección del debate.....	161
Art. 314. Deberes de los asistentes.....	162
Art. 315. Continuidad y suspensión.....	162
Art. 316. Decisión sobre la suspensión.....	163
Art. 317. Interrupción.....	163
Capítulo 3. De la sustanciación del juicio.....	163
Sección 1. De la vista de la causa.....	163
Art. 318. Apertura.....	163
Art. 319. Declaración del imputado.....	164
Art. 320. Facultades del imputado.....	164
Art. 321. Variación de la calificación.....	164
Art. 322. Ampliación de la acusación.....	164
Art. 323. Recepción y exhibición de pruebas.....	165
Art. 324. Perito.....	165
Art. 325. Testigo.....	165
Art. 326. Interrogatorio.....	166
Art. 327. Declaraciones de menores.....	166

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 328. Incomparecencia.	166
Art. 329. Otros medios de prueba.	167
Art. 330. Nuevas pruebas.	167
Art. 331. Discusión final y cierre del debate.	167
Sección 2. De la deliberación y la sentencia.	167
Art. 332. Deliberación.	167
Art. 333. Normas para la deliberación y la votación.	167
Art. 334. Requisitos de la sentencia.	168
Art. 335. Redacción y pronunciamiento.	168
Art. 336. Correlación entre acusación y sentencia.	168
Art. 337. Absolución.	169
Art. 338. Condenatoria.	169
Art. 339. Criterios para la determinación de la pena.	169
Art. 340. Perdón judicial.	170
Art. 341. Suspensión condicional de la pena.	170
Art. 342. Condiciones especiales de cumplimiento de la pena.	171
Art. 343. Cumplimiento de la pena en el extranjero.	171
Art. 344. Corresponsabilidad social.	171
Art. 345. Condena civil.	171
Sección 3. Del registro o acta de audiencia	172
Art. 346. Formas del acta de audiencia.	172
Art. 347. Valor de los registros	172
Sección 4. División del juicio	173
Art. 348. División del juicio.	173
Art. 349. Juicio sobre la pena.	173
Art. 350. Desarrollo del debate.	173
Art. 351. Informes obligatorios.	173
Art. 352. Reglas del informe.	173
Art. 353. Deliberación y decisión.	174
Libro II. Procedimientos especiales.	174
Título I. Procedimiento por contravenciones	174
Art. 354. Requerimiento.	174
Art. 355. Citación a juicio.	175
Art. 356. Juicio.	175

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 357. Defensa	175
Art. 358. Medidas de coerción	175
Título II. Procedimiento para infracciones de acción privada	176
Art. 359. Acusación	176
Art. 360. Auxilio judicial previo	176
Art. 361. Conciliación	176
Art. 362. Abandono de acusación	176
Título III. Procedimiento penal abreviado	177
Capítulo 1. Acuerdo pleno	177
Art. 363. Admisibilidad	177
Art. 364. Procedimiento	177
Art. 365. Inadmisibilidad	177
Capítulo 2. Acuerdo parcial	178
Art. 366. Admisibilidad	178
Art. 367. Procedimiento	178
Art. 368. Decisión	178
Título IV. Procedimiento para asuntos complejos	178
Art. 369. Procedencia	178
Art. 370. Plazos	178
Art. 371. Producción de prueba masiva	179
Art. 372. Investigadores bajo reserva	179
Art. 373. Acusador adjunto	180
Título V. Procedimiento para inimputables	180
Art. 374. Procedencia	180
Art. 375. Reglas especiales	180
Art. 376. Rechazo	181
Título VI. Competencia especial	181
Art. 377. Privilegio de jurisdicción	181
Art. 378. Investigación	181
Art. 379. Juez de la instrucción	181
Art. 380. Recursos	181
Título VII. El hábeas corpus	182

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 381. Procedencia.....	182
Art. 382. Solicitud.....	182
Art. 383. Mandamiento.....	182
Art. 384. Ejecutoriedad.....	182
Art. 385. Desacato.....	183
Art. 386. Audiencia y decisión.....	183
Art. 387. Ejecutoriedad.....	183
Art. 388. Ocultamiento o secuestro.....	183
Art. 389. Amenaza de traslado al extranjero.....	183
Art. 390. Solidaridad.....	184
Art. 391. Exención.....	184
Art. 392. Supletoriedad del procedimiento ordinario.....	184
Libro III. De los recursos.....	184
Título I. Disposiciones generales.....	184
Art. 393. Derecho de recurrir.....	184
Art. 394. Recurso del imputado.....	184
Art. 395. Recurso del ministerio público.....	185
Art. 396. Recurso de la víctima y la parte civil.....	185
Art. 397. Recurso del tercero civilmente responsable.....	185
Art. 398. Desistimiento.....	185
Art. 399. Condición de presentación.....	185
Art. 400. Competencia.....	185
Art. 401. Suspensión.....	185
Art. 402. Extensión.....	186
Art. 403. Prohibición.....	186
Art. 404. Perjuicio.....	186
Art. 405. Rectificación.....	186
Art. 406. Normas supletorias.....	186
Título II. De la oposición.....	186
Art. 407. Procedencia.....	186
Art. 408. Oposición en audiencia.....	187
Art. 409. Oposición fuera de audiencia.....	187
Título III. De la apelación.....	187
Art. 410. Decisiones recurribles.....	187
Art. 411. Presentación.....	187

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Art. 412. Comunicación a las partes y remisión.....	187
Art. 413. Procedimiento.....	188
Art. 414. Procedimiento especial.....	188
Art. 415. Decisión.....	188
Título IV. Apelación de la sentencia.....	188
Art. 416. Decisiones recurribles.....	188
Art. 417. Motivos.....	188
Art. 418. Presentación.....	189
Art. 419. Comunicación a las partes y remisión.....	189
Art. 420. Procedimiento.....	189
Art. 421. Audiencia.....	190
Art. 422. Decisión.....	190
Art. 423. Doble exposición.....	190
Art. 424. Libertad del imputado.....	190
Título V. De la casación.....	190
Art. 425. Decisiones recurribles.....	190
Art. 426. Motivos.....	191
Art. 427. Procedimiento y decisión.....	191
Título VI. De la revisión.....	191
Art. 428. Casos.....	191
Art. 429. Titularidad.....	192
Art. 430. Presentación.....	192
Art. 431. Competencia.....	192
Art. 432. Procedimiento.....	192
Art. 433. Suspensión.....	192
Art. 434. Decisión.....	193
Art. 435. Rechazo y nueva presentación.....	193
Libro IV. Ejecución.....	193
Título I. Ejecución penal.....	193
Capítulo I. Normas Generales.....	193
Art. 436. Derechos.....	193
Art. 437. Control.....	194
Art. 438. Ejecutoriedad.....	194
Art. 439. Prescripción de las penas.....	194

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Capítulo 2. Procedimiento	195
Art. 440. Cómputo definitivo.	195
Art. 441. Unificación de penas o condenas.	195
Art. 442. Incidentes.	195
Art. 443. Condiciones especiales de ejecución.	195
Art. 444. Libertad condicional.	196
Art. 445. Revocación de la libertad condicional.	196
Art. 446. Multa.	196
Art. 447. Medidas de seguridad.	197
Título II. Ejecución civil	197
Art. 448. Procedimiento.	197
Art. 449. Disposiciones finales	197
Decreto No. 420-02, que crea la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ)	199

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCION

El Código Procesal Penal (Ley 76-02), promulgado en fecha 19 de julio de 2002, resulta de la unificación de las propuestas presentadas por la Comisión de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Criminal designada mediante Decreto número 104-97 de fecha 27 de febrero de 1997 y la presentada por el Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal. Ambas propuestas adoptaban los principios y normas del modelo acusatorio, conforme al cual se separan las funciones respectivas de jueces y fiscales, de modo que se garantiza la promesa constitucional del juicio oral, público y contradictorio, ante jueces imparciales y con arreglo del derecho de defensa.

Esta coincidencia, dejaba subsistir, sin embargo, algunas diferencias en tanto en la versión oficial se mantenían reglas que contribuían a la alta formalización del proceso y la irrazonable práctica del juicio en ausencia o contumacia, lo que modernamente se resuelve con la emisión de una orden de captura. Mientras que de otro lado, la versión elaborada en el seno del Foro de Apoyo aspiraba a la introducción de mecanismos de participación ciudadana en la impartición de justicia mediante la reintroducción del juicio por jurados. Hechas las supresiones y ajustes correspondientes, el Congreso Nacional tuvo la oportunidad de ponderar un proyecto de Código Procesal Penal que aprovechaba las experiencias de todo un movimiento transformador en el orbe europeo y americano, del cual nosotros no podíamos constituir una curiosa excepción.

El nuevo Código Procesal Penal, así unificado, favorece la simplificación de los procedimientos, la solución anticipada de los casos de mínima lesividad o bagatela, en los cuales se pueden armonizar los intereses en conflicto de un modo sencillo, reservando para el juicio aquellos casos más graves. En cuanto al sistema de recursos, se atiende a su racionalización, como una forma de evitar que se empleen como mecanismos para dilatar los procesos o evadir el cumplimiento efectivo de las sentencias y resoluciones de los tribunales.

En síntesis, el Código Procesal Penal aspira a brindar a los jueces, fiscales, abogados, víctimas, imputados y policías la oportunidad de ver realizadas sus respectivas funciones no a partir de los defectos o carencias del sistema, sino a través de sus virtudes.

1. BREVE ESBOZO HISTORICO DE LA LEGISLACION PROCESAL PENAL EN LA REPOBLICA DOMINICANA

1.1. Constitución y Proceso Penal

La impartición de justicia pronta y cumplida aparece como una de las funciones básicas en toda formación social, en la medida que “decir el derecho” o adjudicar la norma es un corolario necesario para la vida en sociedad. Esta función, que históricamente ha estado más o menos concentrada o distribuida entre los órganos estatales y la comunidad de vecinos, no puede llevarse a efecto de cualquier manera, sino que debe materializarse en la forma jurídicamente regulada. Es esta obligación jurídica lo que sirve de fundamento constitucional al derecho procesal penal, al tiempo de suponer que los órganos de administración de justicia están obligados en todo ámbito y de modo permanente a proveer tutela jurisdiccional efectiva a todas las personas.

El divorcio entre el debido proceso pautado por la Constitución de la República Dominicana, conforme al cual toda persona tiene el derecho a un juicio oral, público y contradictorio, ante juez imparcial, con garantía del ejercicio del derecho de defensa, por un lado, y; el carácter burocrático, formalista, clandestino y ausente de garantías de los procedimientos organizados por el Código de Instrucción Criminal, es un hecho que salta a la vista.

Esta noción constitucional sobre el debido proceso, que en nuestro caso resulta ampliada por los tratados y convenciones internacionales suscritos, aprobados y ratificados por el país, imponen una recontextualización del proceso penal a la luz de esas normas y principios. El tránsito de regímenes autoritarios a formas democráticas conduce a una revisión constante del aparato coercitivo estatal. No podemos hablar de debido proceso ni de salvaguarda de los derechos humanos, si el Poder Judicial no sólo se muestra incapaz de limitar los abusos de otras ramas de los poderes públicos, sino que concurre en su desempeño cotidiano en la vulneración de los derechos fundamentales de los asociados al negarles una justicia pronta y cumplida.

En Iberoamérica la transición desde regímenes autoritarios hacia sistemas democráticos ha conducido a un reposicionamiento del Poder Judicial como una instancia paritaria de gobierno. Este incipiente fenómeno de afianzamiento de nuestras instituciones republicanas debe ser profundizado. Sin embargo, la ex-

perencia demuestra que los poderes judiciales democráticos no pueden operar eficientemente con las herramientas e instituciones de las épocas coloniales, por lo que su radical transformación ha devenido en un imperativo insoslayable. La reforma procesal penal ha sido uno de los instrumentos más efectivos para avanzar en la consolidación y legitimación de los cambios operados al interior del Poder Judicial.

El Código Procesal Penal intenta recoger las normas y principios contenidos en la Constitución y en los tratados y convenciones internacionales en materia de garantías judiciales, en consecuencia, se redimensionan la participación de la víctima y el imputado, como actores primarios del conflicto penal. Al mismo tiempo, se asumen los instrumentos que agilizan la cooperación judicial a nivel internacional, y se brindan herramientas al ministerio público y a los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que puedan cumplir eficientemente con su misión. En razón de que los crecientes conflictos obligan a nuestras sociedades a procurar soluciones inspiradas en los principios de ultima ratio, mínima intervención, lesividad y proporcionalidad de las repuestas punitivas formales, favorecemos la incorporación de mecanismos que permiten concentrar los recursos humanos y materiales en la persecución de los hechos punibles más graves.

El elemento central del Código Procesal Penal consiste en la superación de los modelos inquisitivos y su sustitución por sistemas de corte acusatorio, adversarial y garantistas, de acuerdo a las proclamas constitucionales de nuestros países.

De lo que se trata es de abandonar las estructuras e instituciones de las sociedades autoritarias sustentadas en el privilegio e impunidad estructural, la falta de transparencia y el traspaso del poder punitivo de los tribunales a las agencias ejecutivas. La reforma procesal penal se nos plantea como un objetivo político ineludible a los fines de recuperar espacios para el Estado de Derecho y dejar atrás las formas tradicionales de poder penal selectivo, violento, arbitrario y excluyente. Es tiempo de "constitucionalizar", por así decirlo, el proceso penal.

En el articulado de normas procesales se incorporan los mecanismos que permiten transformar las garantías, de modo que dejen de ser postulados abstractos o teóricos para convertirse en realidades de obligado acatamiento. El disciplinamiento del nuevo proceso penal está inspirado en el respeto irrestricto de la dig-

nidad de la persona humana y, a su vez, por el marcado interés de corregir las disfunciones del sistema inquisitivo. Hemos tratado de deducir la garantía procesal que cada norma constitucional encierra, en especial la que se refiere al debido proceso y al juicio previo. En síntesis, podríamos afirmar en esta parte, que el Código Procesal Penal instrumenta y desarrolla los principios constitucionales básicos, de los que se deriva un sistema coherente de normas, principios, derechos y valores que rige al proceso penal.

1.2. Adopción y vicisitudes del Código de Instrucción Criminal

Las precariedades materiales e institucionales que rodearon el nacimiento de la República Dominicana explican que el Constituyente reunido en la Villa de San Cristóbal decidiera mantener vigentes, hasta tanto fueren abrogadas por otras nuevas, las leyes y la organización judicial existentes a la sazón.¹

La legislación procesal penal adoptada fue la versión haitiana del Código de Instrucción Criminal napoleónico de 1808 y sus sucesivas modificaciones de 1816 y 1832. Mediante decreto congressional No. 58, promulgado el día 4 de julio de 1845, adoptamos los códigos franceses de la Restauración de 1832 en su idioma original. Este hecho político, como era de esperarse, planteó toda una serie de dificultades que fueron denunciadas de manera consistente a lo largo de la primera y segunda República.

El llamado modelo mixto clásico inaugurado por el Código de Instrucción Criminal francés de 1808, resulta de una solución de compromiso entre el antiguo régimen y el liberalismo político. Así, por oposición al modelo anglosajón de corte netamente acusatorio, en Europa continental se aceptaron los principios básicos de la inquisición -*persecución penal pública, averiguación de la verdad como meta del procedimiento, secreto, no contradictoriedad y alta formalización*- aplicados a la primera fase del procedimiento, llamada instrucción

1) La Constitución de la República Dominicana votada en la Villa de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844 estableció, mediante un transitorio, lo siguiente: "Artículo 209. Todas las leyes actuales, no contrarias a la presente Constitución, continuarán en vigor hasta que sean abrogadas por otras nuevas. Asimismo los jueces, tribunales, oficios públicos y demás oficinas continuarán interinamente hasta la nueva organización, observando siempre la división de poderes."

preparatoria y los principios acusatorios -oralidad, publicidad, contradictoriedad y continuidad- se introducen para la segunda etapa del proceso o juicio.

La experiencia histórica demuestra que los rasgos inquisitivos de la llamada instrucción preparatoria, petrificados en el legajo de actas, procesos verbales y formularios que denominamos "el expediente", condicionan a la otra etapa procesal, el juicio, que deviene así en una mera representación teatral de la labor realizada previamente por la policía y el juez de instrucción.

La legislación procesal penal que heredamos hace poco más de 150 años pone el procedimiento preparatorio a cargo de la figura del juez de instrucción. Este funcionario estatal concentra una multiplicidad de tareas que dificultan su cumplimiento eficiente y resultan de discutible compatibilidad. En efecto, el juez de instrucción realiza actividades de mero trámite (requiere autorizaciones, recibe querrelas, cita, extiende comisiones rogatorias), investigativas (interroga, realiza allanamientos y registros, secuestra objetos y documentos), restrictivas de libertad (ordena conducencias, impone multas, ordena la prisión preventiva o provisional, dispone su suspensión, concede libertad bajo fianza) y jurisdiccionales (decide a partir de sus propias actuaciones si envía, declina o desestima la apertura de juicio). Resulta obvio que la carga de trabajo impuesta al juez de instrucción, así como la confusión de funciones, limitan su eficiencia como investigador y comprometen su imparcialidad como jugador. Expresado en las palabras de Maier y Binder difícilmente "una misma persona se transforme en un investigador eficiente y, al mismo tiempo, en un guardián celoso de la seguridad individual; el buen inquisidor mata al buen juez o, por el contrario, el buen juez destierra al inquisidor".

La conclusión en tiempo oportuno de la instrucción preparatoria representa por sí sola un esfuerzo inmenso para los actuales jueces, quienes son cruelmente sometidos a la angustia de vivir permanentemente en infracción a los plazos legales. Esta situación reduce su poder y les aparta de su función natural de vigilar la legalidad de las actuaciones del fiscal y examinar imparcialmente la existencia de los presupuestos necesarios para autorizar o no que una persona sea juzgada en un juicio público.

El interés por superar las aludidas dificultades condujeron, desde nuestra independencia, a múltiples y fallidas iniciativas orientadas a traducir y a localizar la "expresada legislación, acomodándola a las necesidades, usos y conveniencias

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

del país, al carácter y genio nacional, en armonía con nuestros principios e instituciones".² Ya que además de la barrera que significaba para jueces y abogados, así como para los ciudadanos, el tener que administrar justicia con leyes redactadas en un idioma extraño, el excesivo trámite y ritualismo de los procedimientos inquisitivos no se correspondían con el modelo de garantías prometido por la Constitución de la República.

Don Tomás Bobadilla, ministro de justicia e instrucción pública, a quien siempre se le atribuyó ser un "afrancesado", en las memorias presentadas al Congreso Nacional el 26 de febrero de 1846, sugirió que después de traducidos los códigos, una comisión de legisladores se reuniera para discutirlos y "añadir y quitar lo que convenga, y sobretodo para simplificar las formas de los juicios y alejar todo aquello que sea embarazoso y que no conduzca sino a alimentar los embrollos y hacer interminables los juicios y rodeándolos de formalidades difíciles y embarazosas para los mismos jueces, y que a nada conducen para proteger la ley y evitar la arbitrariedad".³

El presidente Pedro Santana, fiel a su vocación autoritaria, dictó el 16 de septiembre de 1846 un decreto en virtud del cual las causas seguidas contra los acusados de robo en materia criminal pudieran ser ventiladas por los tribunales de Justicia Mayor sin la asistencia de Jurados. De suerte que ante las dificultades de los procedimientos y los trámites del código de instrucción criminal se optó por eliminar una de las pocas instituciones republicanas como lo era el jurado. Obviamente que esta medida favoreció la instrumentalización de la justicia para fines de conveniencia política de los sectores conservadores.

De su lado, el ministro de justicia e instrucción pública, Don Félix M. Delmonte, en sus memorias al Congreso Nacional en el año de 1856 se quejaba amargamente de como "nuestra administración de justicia seguía una codificación que era necesario aclimatar a nuestro medio", al tiempo de señalar que "alrededor de esa codificación se habían ido elaborando leyes transitorias y efímeras para resolver situaciones accidentales que más tarde se convertían en frustratorias e incongruentes frente a otros casos". De modo, que según el criterio del

2) Ver decreto del Senado Consultor No. 389 de fecha 22 de mayo de 1855.

3) Citado por el Dr. Julio Genaro Campillo Pérez en Trabajos Conmemorativos de la Adopción de los Códigos Franceses como Leyes Nacionales. ONAP, Santo Domingo, 1985.

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ilustre jurista e historiador, no bastaban las reformas parciales ni coyunturales, sino que era necesaria una reforma integral.

Coincide en esta aspiración el destacado jurista, legislador y ulterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Don Felipe Dávila Fernández De Castro, cuando subrayaba el 24 de enero de 1859 la anómala situación del país al momento de la independencia, al extremo que le obligó, según sus propias palabras, a "tomar prestada la legislación de un pueblo remoto, de costumbres diferentes, de hábitos desemejantes, de idioma extraño, que habita un clima distinto y organizado con instituciones completamente distintas".⁴ La referencia a que tratándose Francia de una monarquía imperial, en contraste a un pueblo pequeño organizado bajo la forma republicana de gobierno, nos señala el hecho de que el modelo procesal penal mixto o inquisitivo reformado fijado por el código de instrucción criminal napoleónico responde a un esquema de organización política autoritario, centralizado y altamente burocrático y que por tanto no contribuía a realizar la programación constitucional.

En su exposición, el legislador Fernández De Castro, después de abogar por "la necesidad de proporcionar a la República una legislación propia, adecuada a sus costumbres y a su organización política", tuvo a bien afirmar en relación a la redacción del código de procedimiento criminal que "los franceses... hábiles en el trámite, la complicaron cuanto quisieron".

Sin embargo, los obstáculos que para la impartición de una justicia pronta y cumplida planteaba la legislación adjetiva no cesaron durante la primera República, sino que rebasada la anexión a España, los restauradores confrontaron vicisitudes similares durante el segundo período de nuestra historia republicana. Baste como prueba de esta afirmación lo que, en circunstancia parecida a la presente, señalara ese trascendente hombre público, Pedro Francisco Bonó, a quien siendo ministro de Justicia, le correspondió presentar un informe al presidente del Congreso Nacional en sesión del 30 de septiembre de 1867 que discurría en las siguientes razones:

"me han remitido los estados de los encarcelados en sus respectivas jurisdicción, y por ello se ve, que hay 173 presos, de los cuales 18 ya juzgados, los procesos de 68 calificados, y 87 en la instrucción sumaria. Aunque incompletos, estos datos enseñan que hay

4) Ibid.

encarcelados desde diciembre del año pasado bajo la prevención de una ratería y sus causas no han salido de la instrucción; que además de los 173 presos, hay más de 80 procesos que no se han incluido en los 173, por pertenecer a prevenidos prófugos; en fin, dan una idea de la situación real del crimen y de la Justicia en la República. (...) Los estados referidos me ponen en actitud de probar que la Justicia está paralizada completamente en las Provincias y hasta en la Capital. Verdad es que a los inauditos esfuerzos de los Tribunales, se debe haber logrado ver pasar algunas causas; pero la mayor parte permanecen estancadas, y hay provincias que ni una sola ha visto calificada por la cámara, a pesar de tener en la cárcel 28 individuos bajo prevenciones más o menos graves. Repito, no es culpa de los Tribunales, al contrario; los Magistrados merecen todo elogio cuando con tantas dificultades han logrado juzgar algunas causas; pero si estos esfuerzos los conceptúo dignos de todo encomio, son también totalmente deficientes para conseguir todo el objeto. Muchos prevenidos hay por raterías, que no verán en años pasar sus causas por la no asistencia de testigos, a los cuales, ni es racional exigirles un viaje por lo común largo, penoso y no remunerado, ni la remuneración que el erario se impusiera la justificaria la importancia del negocio. Así, -continúa el ilustre pensador- lo que por el hecho no es más que un delito penado con corrección, se convierte por las dificultades para pronunciar sentencia, en crimen severamente castigado; espectáculo triste, pero consecuencia forzosa de una ley que no llena su objeto, porque en manera alguna está acomodada al país. El Ejecutivo así lo comprende y cada día se fortalece más en el propósito de conceder a los Alcaldes de Comunes el conocimiento de las causas por robo y raterías, por heridas leves y en lo civil en las causas de menor cuantía, según está arreglado por el nuevo proyecto de Ley, con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos, tanto como lo permitan nuestra civilización, nuestro territorio y nuestros recursos”.

Los múltiples intentos por dotarnos de una legislación procesal y una organización judicial propias desembocaron en el decreto congresional del 4 de julio de 1882, el cual declaró de alto interés nacional “la traducción, localización y adecuación” de los códigos franceses. El Código de Procedimiento Criminal fue promulgado el 27 de junio de 1884.

La pretendida traducción, localización y adecuación de los Códigos franceses, entre ellos el Code d'Instruction Criminelle, no alcanza a ocultar la constatación histórica de las serias dificultades que ha confrontado nuestro sistema de justicia penal para aplicar efectivamente sus normas, reglas y principios. En todo caso, es preciso advertir que el sistema procesal penal seguido es el llamado *mixto clásico o inquisitivo reformado* que combina dos fases: la instrucción preparatoria a cargo de un juez regido por los principios del modelo inquisitivo, el cual es escrito, secreto y no contradictorio, y la instrucción definitiva con un juicio pretendidamente oral, público y contradictorio.

En consonancia con las afirmaciones del profesor Froilán Tavares debemos convenir en el aserto de que *"no hemos elaborado o transformado inteligentemente ninguna institución extranjera para adaptarla a nuestro temperamento nacional, aparentemente a causa de la debilidad de nuestro pensamiento jurídico, del tutelaje de las doctrinas y del sistema jurídico francés implicados en la adopción de los Códigos franceses en 1845"*.

Las modificaciones que el legislador local ha introducido al ordenamiento procesal penal dominicano no son para nada original, sino que en la zaga de la legislación francesa, procedemos cada cierto tiempo a introducir remiendos al citado Código de Procedimiento Criminal, lo cual, obviamente no ha solucionado de raíz las dificultades sistémicas de la justicia penal.

El Magistrado Julio Genaro Campillo Pérez afirmó que, a pesar de su traducción y localización, *"sigue siendo esta legislación, algo extraña al medio, especialmente su parte procesal, sumamente complicada, que hace más costosa la instrucción judicial y más difícil la adquisición de jueces idóneos y competentes"*.

Estadísticas relativas al desempeño de la justicia penal en el Distrito Nacional, a pesar de las transformaciones organizacionales entre sus operadores, dan cuenta de que alrededor de un 45% de los casos que ingresan a la jurisdicción de instrucción se atascan allí o no son solucionados, sino que sólo esperan la época de la prescripción. De hecho el 77% de las sentencias emitidas por las cámaras penales del Distrito Nacional está constituido por pronunciamiento de prescripciones. Un cálculo sobre los casos acumulados en los despachos judiciales revela que alrededor de 200 mil casos han prescrito o están en vías de hacerlo en los últimos 15 años, esto es entre 1985 al 1999. Si a estos datos que destacan la ineficiencia del sistema de justicia penal para proveer fallo en

tiempo oportuno, sumamos el hecho de que en promedio, entre un 77% a un 87%, de los internos en nuestras cárceles son presos sin condena o preventivos, nos indican que el sistema no es sólo ineficiente, sino que además es poco garantista.

Como se habrá podido observar, existen múltiples razones para impulsar la reforma procesal penal en la República Dominicana. Obviamente, la reforma de la justicia penal no puede ser visualizada como un simple cambio de procedimientos, sino que forma parte de una transformación más amplia que nos remite a una modificación **normativa, organizacional y cultural** de importantes repercusiones para la consolidación del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho.

A modo de hipótesis, cabe sugerir, como necesidades que obligan a la transformación del proceso penal, las siguientes:

- Tutelar efectivamente los derechos humanos.
- Aproximar la justicia a los ciudadanos.
- Proveer seguridad ante el fenómeno criminal y la violencia social.
- Humanizar y dignificar la ejecución penal.

Queda ahora por examinar, la orientación y contenido del nuevo Código Procesal Penal, lo cual haremos en la segunda parte de este documento.

2. ORIENTACION Y CONTENIDO DEL CODIGO PROCESAL PENAL

El Código aprobado por las cámaras legislativas integra los aportes de un nutrido grupo de juristas, jueces, fiscales, defensores, policías, militares, sociólogos, sicólogos, legisladores, economistas, ingenieros, administradores de empresas, contadores, comunicadores sociales, activistas de derechos humanos y profesionales de otras ciencias, que constituyeron el Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal, como espacio de acompañamiento desde la sociedad civil a las tareas que por Decreto 104-97, del 27 de febrero de 1997, el entonces ciudadano Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, asignó a una comisión de distinguidos juristas y académicos integrada por el doctor César Pina Toribio, el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, la Magistrada Miriam Germán Brito y el licenciado Guillermo Moreno García.

La coordinación del Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal, ha sido asumida desde su gestación por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que procuró la asesoría internacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con sede principal en Buenos Aires, de reconocida trayectoria por su destacada participación en los procesos de transformación del proceso penal que se han acometido en gran parte de los países de América Latina. Podemos afirmar que las ideas expresadas en las normas y principios del proyecto son representativas de un amplio sector preocupado con la forma como debe organizarse y funcionar el sector justicia.

2.1. Postulados de la Reforma Procesal Penal

Desde un principio nos planteamos dos presupuestos básicos: (i) la legislación y la organización procesal penal debe concretizar los principios constitucionales que rigen el procedimiento y los derechos fundamentales de las víctimas y los procesados; y (ii) la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal no debe ser realizada de espaldas a la sociedad sino con la participación activa de los operadores del sistema judicial, la ciudadanía y los poderes públicos.

a) Fortalecer el juicio oral, público y contradictorio como etapa central del proceso penal

La reforma al proceso penal tiene ineludiblemente que realizar la garantía derivada del principio de judicialidad, consagrado de manera expresa en el artículo 8 (2), literal j de la Constitución de la República que sentencia "Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres".

Fortalecer la oralidad del juicio contempla la limitación de la incorporación de la prueba por lectura, así como su carácter contradictorio, asegurando la posibilidad de interrogatorio y contrainterrogatorio directos de las partes, testigos y peritos.

De la centralidad del juicio oral deriva que, por principio, sólo la prueba presentada y discutida en la audiencia es válida para fundamentar la sentencia. Toda

la prueba lícitamente recogida en etapas anteriores sólo será eficiente a los fines de fundar la acusación y dictar la apertura del juicio.

b) Fortalecer la función jurisdiccional de los jueces

Los tribunales han de ser quienes decidan por acto jurisdiccional sobre la apertura, sobreesamiento, perención o cierre de todo proceso penal. De ahí que las actuaciones de los jueces estén orientadas a la solución de los conflictos que les sean planteados dentro de un estricto marco de legalidad y respeto a los derechos y libertades fundamentales.

c) Estricta separación entre la actividad de investigación y la jurisdiccional.

La necesidad de definir los roles o funciones específicos de cada uno de los intervinientes en el proceso penal nos indica que corresponde al ministerio público y/o a la víctima, según el caso, la tarea de investigar y acusar al imputado, quien por sí y su defensor técnico debe tener la oportunidad de defenderse, y al juez le corresponde decidir a partir de las solicitudes que le son planteadas.

d) Dotar al Ministerio Público de los medios de investigación apropiados para asegurar una investigación criminal eficiente.

El Ministerio Público tendrá a su cargo la investigación penal, esto es, la recolección de todas las pruebas para concluir en la presentación de una acusación que permita enjuiciar al imputado, un requerimiento que permita concluir el caso u otra salida alternativa al conflicto planteado.

Emerge como una necesidad impostergable fortalecer una actividad de investigación objetiva destinada a establecer convicciones mínimas para justificar el mérito de la apertura del juicio, llevada a cabo con amplia intervención de las partes y en forma que se exprese en una acusación específica e individualizada y no en el difuso manto del expediente o la simple mención de textos legales pretendidamente violados.

Es preciso crear una policía técnica judicial, como organismo técnico de investigación bajo la dependencia funcional y la dirección del Ministerio Público, frente al cual éste pueda asignar tareas, recibir informes inmediatos de las per-

sonas capturadas o detenidas, promover las investigaciones disciplinarias en que incurran los funcionarios de la policía judicial y, en general, vigilar de manera directa y permanente todo el desarrollo y resultado de las indagatorias preliminares, con especial énfasis en la legalidad de las actuaciones y el respeto de los derechos humanos.

e) *Garantizar la defensa técnica, pública o particular, a todo sospechoso desde la primera información que indique que una persona está bajo investigación.*

Todo imputado tendrá derecho a contar con un defensor de su elección durante todas las fases del procedimiento con quien podrá mantener comunicación privada.

La declaración del imputado será un medio para garantizar la defensa de la persona y no un acto de investigación, salvo que éste de manera voluntaria, inteligente y con la asesoría de su defensor consienta en prestar declaraciones que pudieren comprometer su responsabilidad penal. Ninguna declaración inculpatoria podrá ser considerada si no ha sido brindada bajo las condiciones precitadas y en todo caso deberá ser articulada en juicio y circunstanciada por los hechos de la causa. Debe asegurarse los derechos constitucionales de la defensa, entre ellos el derecho a presentar prueba y a contradecir la prueba presentada por el fiscal, así como el derecho a no autoincriminarse.

La defensa ha de ser integral. Es decir, técnica, adecuada y oportuna. La oportunidad sólo se garantiza si esta se hace efectiva desde el primer acto de procedimiento y aún antes de su declaración.

Tal como señala el Dr. Pellerano, el de defensa es un derecho del justiciable consagrado en la Constitución, siendo una garantía previa al proceso. Se trata, en palabras de Londoño Jiménez, de "una garantía orientada a no permitir que a espaldas de un acusado se levante una investigación penal que solo se deje trascender en una etapa avanzada de ella, cuando al inculpativo ya le quedare más difícil ejercer su derecho de defensa, como sería el caso de que solo se diere una orden de captura o citación para indagatoria y que, recibida esta, se dictare inmediatamente un auto de privación de libertad".

f) *Racionalizar el uso de los recursos disponibles para la persecución penal.*

El empleo adecuado de los recursos humanos y materiales disponibles obliga a concentrar el sistema penal en los casos de mayor nocividad social.

Se establecerá un sistema de oportunidad de la persecución penal de forma que permitirá el no ejercicio de la acción penal para los casos menores. Este sistema será reglado por el Código y comprenderá los casos bagatelas, de pena natural o de ínfima lesión al bien jurídico.

g) *Introducción de medios alternativos de resolución de conflictos penales.*

Para determinados casos, será permitida la conciliación o la solución concertada del conflicto, mediante técnicas adecuadas de mediación. De esta forma se restituye el conflicto a las partes, se logra la pacificación social y la sanción penal queda confinada a ser el último recurso para los injustos más graves.

h) *Creación de un servicio público de defensa.*

El Estado tiene la obligación de crear y mantener un servicio de defensa pública técnica, integral y permanente en beneficio de todo imputado que no pudiere proveerse de una defensa privada por carecer de medios económicos para ello. Se fomentará la asistencia legal honoraria de los miembros de la profesión legal.

El servicio de defensa pública contará con el grado de autonomía necesaria a fin de asegurar un servicio eficiente y protegido de presiones externas.

No basta la defensa particular que se pueden procurar quienes cuentan con las posibilidades económicas para contratar los servicios de un abogado. Es preciso instituir un sistema de defensoría pública, que sustituya al infuncional sistema de los abogados de oficio. De conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el imputado debe contar con la asistencia de un abogado defensor, el cual debe ser provisto por el Estado cuando el imputado carece de recursos.

i) *Ampliar las facultades de intervención de la víctima.*

El proceso reconocerá a la víctima las facultades de intervención de modo que pueda confrontar al acusado, obtener el debido resarcimiento, presentar prue-

bas, solicitar actos de investigación y, en fin, participar de todas las etapas del proceso.

El consentimiento de la víctima será imprescindible para todos los casos de solución anticipada por conciliación o reparación.

La aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en materia penal ha de hacerse tomando en cuenta los intereses de la víctima como condición necesaria para asegurar la pacificación del conflicto que la sociedad ha hecho suyo.

j) *Asegurar la tutela judicial efectiva de intereses difusos*

La reforma garantiza el acceso a la justicia de los grupos de víctimas o grupos de ciudadanos preocupados por la defensa de intereses difusos. Será asegurada la posibilidad de ser parte en el proceso, con todas las facultades que ello implica, a aquellos grupos que satisfagan requerimientos claramente determinados.

k) *La Libertad como Regla*

El proceso penal se realizará a partir del principio fundamental de reconocer la libertad como la regla, derivado del principio de la presunción de inocencia.

Cualquier medida que comporte una restricción de derechos o un atentado a la libertad se tendrá como un acto jurisdiccional inmediatamente recurrible ante otro tribunal para la verificación de su razonabilidad y su legalidad. Se establecerán asimismo normas que fijen un límite temporal a la prisión preventiva. En todo caso, las normas procesales salvaguardarán el estado normal de libertad de todo procesado.

La libertad individual debe protegerse al máximo dentro del proceso penal, debiendo elegirse entre las normas que lo rigen la interpretación más favorable al imputado. Tal como señala Juan González Bustamante⁵, "si fuere posible, por respeto a la libertad humana, a nadie debiera privársele de ella sino hasta el fin del proceso, cuando han quedado plenamente comprobadas la existencia del delito y la responsabilidad penal del inculpado".

⁵) Apud, Londoño Jiménez, H. *Derecho Procesal Penal*. Temis 1982, p.44

l) Medidas alternativas a la prisión preventiva

Se establecerá una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva a los fines de disminuir los índices de presos sin condena en las cárceles y asegurando a la vez la presencia del imputado en el juicio (arrestos domiciliarios, medidas de control judicial, prohibición de salir del país, caución personal y otras).

ll) Control de la duración del proceso.

Con el objeto de asegurar el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, la reforma establecerá un sistema de control de la duración del proceso que intente superar el mero establecimiento de los plazos procesales uniformes y estrictos. Estos criterios deberán tomar en cuenta la complejidad del caso, el hecho imputado y la cantidad de imputados, entre otros.

m) Simplificación y racionalización de los procedimientos

Se establecerá un procedimiento común para los delitos y los crímenes, con una técnica legislativa sencilla y accesible, desprovista de toda fórmula ritual y de trámites vacíos de contenido garantista.

De igual modo, se preverá un procedimiento de tipo abreviado que, con el consentimiento del imputado y su defensor permita, para determinados casos, obviar la etapa de la producción de la prueba, pasando al dictado de la sentencia.

En el ordenamiento procesal hasta ahora vigente hay reglas particulares para el procedimiento dependiendo del tipo de infracción de que se trate, conforme a la clasificación tripartita de las infracciones. Se tienen, en consecuencia, tres procedimientos: de simple policía, correccional y criminal. En abono a la simplificación de la legislación procesal resulta conveniente adoptar un único procedimiento y no tres para hacer lo mismo. La flexibilidad de nuestra organización judicial, dado el hecho de que tenemos más tribunales que muchos países con similar desarrollo al de la República Dominicana, permitiría variar la integración o composición de los tribunales de juicio según las materias, aunque el procedimiento sea el mismo. No parece necesario permanecer atado a un esquema procesal tripartito, cuya prescindencia queda revelada por la existencia de normas que se repiten una y otra vez en el actual Código de Procedimiento Criminal en ocasión a cada procedimiento.

n) Asegurar la participación de la ciudadanía

Como realización del ideal republicano se asegurará la participación de la ciudadanía en la administración de justicia. Si bien, fruto de la unificación de las propuestas previas, en el nuevo Código Procesal Penal se prescinde de la instauración de la figura del juez lego o jurado, nada impide examinar el fundamento de este postulado.

La institución del jurado no es extraña al sistema republicano de gobierno, y de hecho en los períodos de auge democrático la República Dominicana conoció del juicio por jurados, los cuales de ordinario fueron suprimidos en los regímenes autoritarios. Eugenio María de Hostos, uno de los exponentes más preclaros del pensamiento liberal antillano nos recuerda que "el juicio por jurados es uno de los órganos que más vigor puede dar al cuerpo judicial y más eficacia a la justicia organizada. Argumenta el ilustre maestro que "es más fácil para el común de los hombres que para el hombre consagrado al ministerio de la ley -es decir, al juez a sueldo como lo denomina Carrara- por sus hábitos, volitivos y afectivos". En ese mismo sentido, Hostos analiza el hecho de que el juez "a solas con el delito o el crimen de que conoce, vacila entre el hecho y la ley, vacila también entre su sensibilidad de hombre y su conciencia de agente de la ley, y se conturba y se angustia y agoniza y sufre dolores de sensibilidad, de razón o de conciencia que alteran necesariamente la serenidad del fallo". Afirma, con claridad meridiana, que "a ese funcionario de la ley hay que completarlo con pocos o muchos funcionarios de la vida que, ignorantes de la ley, y conociéndose hombres, tengan más miedo a su conciencia que a la ley y más horror a la condenación de un inocente que al delito".

n) Motivación de las decisiones

Se concretará en la práctica la obligación constitucional de motivar todas las decisiones judiciales que impliquen la privación o limitación de algún derecho, las decisiones concernientes al ejercicio de la acción penal, la decisión de apertura del juicio y, obviamente, la sentencia.

La obligación de motivar la sentencia pone fin al principio de la íntima convicción para sustituirlo por el de la sana crítica que otorgará mayor transparencia y legitimidad al sistema.

Tal como ha señalado la Suprema Corte de Justicia en sentencia de su Cámara Penal, de fecha 20 de octubre de 1998: "los tribunales de Derecho deben exponer en sus sentencias la base en que descansa cada decisión tomada por ellos... además, sólo mediante la exposición de motivos las partes pueden apreciar en las sentencias, los elementos en los cuales se fundamentó el fallo que les atañe... es necesario que el tribunal exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentando en uno, o en varios, la combinación de elementos probatorios".

o) Establecer un régimen racional de impugnación de las resoluciones judiciales

Se establecerá un nuevo sistema de impugnación que asegure por principio el derecho al recurso, pero que a la vez limite su ejercicio abusivo y dilatorio.

p) Procedimientos especiales

Para casos especialmente complejos (por ejemplo la criminalidad organizada), casos de inimputabilidad, casos de delitos de acción o instancia privada, competencia especial o privilegio de jurisdicción, y otros, se establecerán procedimientos especiales adecuados a la naturaleza del caso, prescindiendo, al menos parcialmente, de las normas del procedimiento común.

q) Control de la ejecución penal

Se creará la figura del juez de vigilancia penitenciaria o juez del control de la ejecución de la pena, cuya tarea será la de asegurar los derechos del condenado de todo abuso de los funcionarios encargados de su custodia. Este juez tendrá la facultad de controlar la legalidad de las decisiones de la autoridad penitenciaria relativas a toda privación de derechos de los condenados no autorizada por la sentencia, así como de la aplicación de las sanciones disciplinarias en el medio carcelario. De esta forma cumplimos con la famosa máxima que "el derecho no se detiene ante los muros de la prisión".

r) Modernizar la organización y la gestión de los despachos judiciales

La reforma del proceso penal deberá tener en cuenta su impacto sobre la or-

ganización y la administración de los tribunales. Para ello se prevén normas de simplificación de la administración, de las comunicaciones, de las notificaciones, de los archivos y de todos los registros.

Habrà que producir una reorganización de los despachos de los jueces y fiscales, puesto que sus funciones serán distintas y sus volúmenes de trabajo pueden variar. De esta forma habrá que establecer el circuito administrativo de los asuntos y procedimientos administrativos internos claros y eficientes. Es posible que para este tipo de organización deban dictarse reglamentos u otras normas similares.

Deberán asimismo ser previstos los sistemas de archivos, notificaciones y otras comunicaciones y, en fin, toda aquella tarea destinada a resguardar las formas substanciales del proceso.

Por último, una vez identificadas todas las necesidades en materia de recursos humanos y materiales, se deberá planificar el presupuesto de cada institución de forma de asegurar la marcha sostenida del proceso de transformación.

2.2. Estructura del Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal se divide en dos partes: una general y otra especial. La parte general se distribuye en seis libros y la parte especial en cuatro libros, conforme se detalla en el siguiente esquema:

PARTE GENERAL

LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES

Título I. Principios fundamentales

Título II. Acciones que nacen de los hechos punibles

Capítulo 1. La acción penal

Sección 1. Ejercicio de la acción penal

Sección 2. Criterios de oportunidad

Sección 3. Conciliación

Sección 4. Suspensión condicional del procedimiento

Sección 5. Extinción de la acción penal

Capítulo 2. Ejercicio y régimen de la acción civil

Capítulo 3. Excepciones

LIBRO II. LA JURISDICCION PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES

Título I. La jurisdicción penal

Capítulo 1. Jurisdicción y competencia

Capítulo 2. Tribunales competentes

Capítulo 3. Motivos de inhibición y recusación

Título II. Víctima y querellante

Capítulo 1. La víctima

Capítulo 2. Querellante

Título III. Ministerio Público y órganos auxiliares

Capítulo 1. Ministerio Público

Capítulo 2. Los órganos de investigación y auxiliares

Título IV. El imputado

Capítulo 1. Normas generales

Capítulo 2. Declaración del imputado

Título V. La defensa técnica

Título VI. Partes civiles

Capítulo 1. El actor civil

Capítulo 2. El tercero civilmente demandado

Título VII. Auxiliares de las partes

Título VIII. Obligaciones de las partes

LIBRO III. ACTIVIDAD PROCESAL

Título único. Actos procesales

Capítulo 1. Actos y resoluciones

Capítulo 2. Plazos

Capítulo 3. Control de la duración del proceso

Capítulo 4. Cooperación judicial internacional

LIBRO IV. MEDIOS DE PRUEBA

Título I. Normas generales

Título II. Comprobación inmediata y medios auxiliares

Título III. Testimonios

Título IV. Peritos

Título V. Otros medios de prueba

LIBRO V. MEDIDAS DE COERCION

Título I. Normas generales

Título II. Medidas de coerción personales

Capítulo 1. Arresto y conduencia

Capítulo 2. Otras medidas

Capítulo 3. Revisión de las medidas de coerción

Título III. Medidas de coerción reales

LIBRO VI. COSTAS E INDEMNIZACIONES

Título I. De las costas

Título II. De la indemnización al imputado

PARTE ESPECIAL

LIBRO I. PROCEDIMIENTO COMÚN

Título I. Procedimiento preparatorio

Capítulo 1. Normas generales

Capítulo 2. Actos iniciales

Sección 1. Denuncia

Sección 2. Querrela

Sección 3. Intervención de la policía judicial

Sección 4. Investigación preliminar

Capítulo 3. Desarrollo de la investigación

Capítulo 4. Conclusión del procedimiento preparatorio

Título II. Audiencia preliminar

Título III. El juicio

Capítulo 1. Preparación del debate

Capítulo 2. Principios generales del juicio

Capítulo 3. De la sustanciación del juicio

Sección 1. De la vista de la causa

Sección 2. De la deliberación y la sentencia

Sección 3. Del registro o acta de audiencia

Sección 4. División del juicio

Libro II. Procedimientos especiales

Título I. Procedimiento por contravenciones

Título II. Procedimiento para infracciones de acción privada

Título III. Procedimiento penal abreviado

Capítulo 1. Acuerdo pleno

Capítulo 2. Acuerdo parcial

Título IV. Procedimiento para asuntos complejos

Título V. Procedimiento para inimputables

Título VI. Competencia especial

Título VII. El hábeas corpus

Libro III. De los recursos

Título I. Disposiciones generales

Título II. De la oposición

Título III. De la apelación

Título IV. Apelación de la sentencia

Título V. De la casación

Título VI. De la revisión

Libro IV. Ejecución

Título I. Ejecución penal

Capítulo 1. Normas Generales

Capítulo 2. Procedimiento

Título II. Ejecución civil

Disposiciones finales

La estructura descrita tiende a presentar un Código Procesal Penal que se caracteriza por su coherencia interna como cuerpo legislativo, de modo que, por un lado, su estructura permite hacer realidad los postulados que se han planteado en el Documento de Bases de la Reforma Procesal Penal; y, por otro lado, la precisión y claridad evitan las confusiones que supondría la existencia de reglas diversas para cumplimentar una misma función. En abono a la coherencia y a la simplificación, es que en la parte general se recogen las normas e instituciones generales que en el Código de Procedimiento Criminal hasta ahora vigente se hallan dispersas por todo su articulado. En la parte especial, se han colocado en un primer libro las normas del procedimiento común, con lo que se dejan atrás las repeticiones de normas en ocasión a cada procedimiento que favorecía la estructura del Código de Procedimiento Criminal vigente, en el cual como sabemos hay reglas particulares para el procedimiento dependiendo del tipo de infracción de que se trate, conforme a la clasificación tripartita de las infracciones (lo que da lugar a tres procedimientos: de simple policía, correccional y criminal). Los tres libros restantes contienen las normas que regulan los procedimientos especiales, los recursos y la ejecución, respectivamente.

3. PARTE GENERAL

3.1. Disposiciones generales

3.1.1. Los principios fundamentales que informan el nuevo proceso penal

La articulación ordenada de los diversos principios que informan al proceso penal en el marco de un Estado de Derecho y su inclusión como parte capital del nuevo Código Procesal Penal cumple la doble función de enraizar la forma de ejercicio del poder punitivo en la Constitución y en las convenciones internacionales, al tiempo de orientar la aplicación consecuente del resto del ordenamiento procesal conforme a las normas básicas de todo el sistema político.

Se trata de constitucionalizar el proceso penal a partir de la integración del conjunto de derechos, libertades y garantías fundamentales que el pensamiento republicano y liberal ha venido construyendo en el curso del devenir histórico. Así, se hace énfasis en aquellas normas y principios sustantivos que fijan límites a la acción del levatón estatal materializada en sus órganos de policía, de investigación, de enjuiciamiento y de ejecución penales.

Es por ello que, de entrada, en los principios fundamentales se ratifican las garantías con sede constitucional, como el punto de partida y marco vinculante de toda la actividad de los actores en el drama penal: policía, fiscales, imputados, defensores, víctimas, jueces y carceleros.

La incorporación y el reconocimiento de las normas y principios de derechos humanos consagradas en los instrumentos del derecho internacional nos coloca en la dinámica de la integración a la comunidad de naciones democráticas y respetuosas de la dignidad de las personas. La atribución de un valor vinculante a las normas y principios sustantivos, reconocidos como de aplicación directa e inmediata, es el aspecto más oportuno de una proposición que pretende superar el lastre que ha significado para nuestras democracias el funcionamiento de un sistema de justicia penal formalista-positivista, tradicionalmente alejado de la Constitución, despersonalizado, que esquiva la solución del conflicto, apegado al trámite y que en muchos casos ha devenido en partícipe o cómplice, por acción u omisión, de la violación masiva de los derechos humanos.



La solución del conflicto, aún lo sea en forma coactiva, tal lo supone la realización del litigio en el escenario judicial, es reconocido como el fin del proceso que pretende con ello restaurar la armonía social colocada en riesgo por la verificación del hecho punible. Esta concepción racional encuentra arraigo en el estilo de vida democrático, donde el ejercicio del poder punitivo no se puede convertir en un fin en sí mismo, sino que el servicio socialmente relevante es la pacificación a que va enderezada la intervención de la jurisdicción y los demás agentes estatales como medida extrema contra el individuo.

La afirmación del estatuto de libertad, como espacio normativo correlativo al estado natural de las personas, está dirigido a subrayar el carácter excepcional y proporcional de cualquier medida que, como la prisión preventiva, represente un menoscabo o restricción de aquella. Tal como se ha dicho, Latinoamérica y los sistemas de administración de justicia penales están enfermos de prisión preventiva, lo cual no sólo distorsiona, sino que deslegitima la forma como se ejerce el poder jurídico de castigar en nuestras sociedades.

La sujeción al control y a la tutela judicial efectiva de todas las medidas restrictivas de la libertad recupera parte de nuestras mejores tradiciones liberales, ya que desde el nacimiento de la república, el constituyente consagró la forma judicial como garantía contra el arresto y la detención arbitrarios e irrazonables.

Los principios fundamentales referidos al inicio, desarrollo y cierre del proceso nos remiten al carácter de oficialidad, legalidad, imparcialidad, objetividad y judicialidad que animan la actividad de los sujetos estatales en este ámbito.

La vigencia del principio de legalidad en la justicia penal deviene como corolario del principio de seguridad jurídica propio del Estado de Derecho. La fórmula "nulla poena sine lege..." rescatada por el iluminismo penal, se completa en la esfera procesal con la regla "nulla poena sine iudicio". Garantía mínima que, sin embargo, resulta contrariada por los operadores del sistema de justicia penal que abusan de la prisión preventiva.

Nunca resultará ocioso recordar la no retroactividad y la necesaria interpretación restrictiva de las normas en la esfera penal, lo que se aviene a los criterios de favorabilidad y presunción de inocencia, como datos dados y que lejos de asumirse como ficciones liberales son presupuestos efectivos para equilibrar las dispares fuerzas desplegadas en el ruedo penal.

De otro lado, la separación de las funciones de persecución e investigación respecto de las jurisdiccionales, colocando las primeras a cargo del órgano que debe sustentar la acusación en juicio se corresponde con la lógica del sistema acusatorio. El redimensionamiento de la actividad del ministerio público, bajo cuya dirección y control funcional quedan colocados todos los funcionarios y agentes de la policía judicial y aquellos que desde agencias ejecutivas realizan actividades de investigación, tiene como contrapeso efectivo la obligación de esta categoría de funcionarios de brindar igual trato a las personas ante la ley y el sometimiento de todas sus actuaciones al examen de la jurisdicción. El procedimiento preparatorio y, en general, todo el proceso permite que cada uno de los operadores del sistema cumplan funciones diferenciadas, de modo que el juez no comprometa su imparcialidad, no sustituya a la acusación ni la releve de construir los méritos del caso.

La forma judicial, caracterizada por la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación y la concentración, es situada como regla que orienta todo el proceso penal, aunque en interés del derecho a un juicio justo se limite la publicidad durante la fase preparatoria. La oralidad, es salvaguardada mediante la estricta limitación de los elementos de prueba que pueden ser incorporados al juicio a través de su lectura.

Las condiciones relativas a la jurisdicción son recogidas en una serie de principios que buscan contrarrestar los vicios que históricamente han afectado su desempeño como sujeto procesal independiente, imparcial, obligado a impartir justicia pronta, razonable y cumplida.

El conjunto de principios fundamentales articula el grueso de los derechos y ámbitos de incoercibilidad que la civilización ha ido construyendo a favor del imputado, desde el reconocimiento de la presunción de inocencia como fórmula para su tratamiento procesal en tanto interviene sentencia irrevocable, hasta la legalidad de la ejecución penal. Todo ello sin olvidar el reconocimiento de la dignidad de la persona humana como límite infranqueable y cuyo riesgo efectivo hace nulo cualquier acto que lo desconozca.

El anuncio de un régimen de legalidad de la prueba y de exclusión de aquellos elementos de prueba obtenidos en desconocimiento de este principio, atribuyendo a los jueces un papel activo en este ámbito, constituye el mayor estímulo

lo que pueda brindarse a la tecnificación, eficientización y humanización de nuestro sistema de investigación con fines de enjuiciamiento.

En ese mismo orden, la obligación con cargo a la parte actora del proceso penal, de tener que precisar las imputaciones objeto de investigación y juicio, en la acusación o querrela, coloca límites definidos al proceso en sus dos etapas: la preparatoria y el juicio. Sólo la garantía mínima de conocer el objeto de juicio permite la defensa adecuada, hace posible la contradicción y fundamenta la sentencia correlativa con lo probado. Esta regla básica permite organizar un "juicio limpio", a partir de la igualdad de armas, lo que en sentido general contribuye a la concreción de un debido proceso de ley.

Al robustecimiento de las facultades de investigación del ministerio público, sumado al control jurisdiccional del proceso, le es consustancial la garantía mínima con cargo al Estado de proveer una defensa pública, integral, gratuita y oportuna a los imputados que manifiesten esa necesidad por razones de incapacidad económica para pagarse un defensor privado. Lo mismo vale en relación a la necesidad de un intérprete para el extranjero o persona incapaz de comunicarse efectivamente en español de forma oral, o el reconocimiento de la diversidad cultural respecto de miembros de grupos socialmente diferenciados.

Particular importancia se atribuye a la participación de la víctima, que trasciende el papel de simple excusa para poner en movimiento la acción pública y se le reconoce la intervención autónoma en diversas hipótesis y de múltiples formas. Se trata de reivindicar el conflicto que la formulación legal le expropia al construir el tipo penal como norma que protege un bien pretendidamente público, de suerte que la víctima actúa de modo directo en el ejercicio de la pretensión punitiva y en la solución misma de la situación que perturba la armonía social.

En definitiva, la incorporación de los principios fundamentales como normas vinculantes del proceso penal, contribuye, sin lugar a dudas, a hacer de éste un verdadero espacio para el litigio, a superar el trámite y hacer que cada uno de los roles, acusación, defensa, reclamo de reparación, la valoración del caso y su fijación, mediante la sentencia y el cumplimiento de la pena, sean repotenciados, adquieran una fisonomía clara y gane la democracia y sus valores. La sociedad plural, admite así que el proceso penal y el litigio como su expresión di-

námica se constituyan en las vías para zanjar dentro de un marco de estabilidad institucional los conflictos surgidos en su seno.

Finalmente, los principios fundamentales plantean la necesidad de garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia, en consonancia con los principios republicanos de que el ejercicio de todo poder público debe estar sometido a alguna forma de control por parte de la generalidad de los asociados. Esta manifiesta intención de recuperar los valores liberales que dieron nacimiento a nuestra forma de organización política bajo la fórmula de un gobierno civil, democrático, republicano y representativo adquiere un significado singular en el contexto de una sociedad que reclama transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y participación.

3.1.2. Régimen de la acción

La nueva normática sobre el régimen de la acción distingue la acción penal de la acción civil y dentro de la primera fórmula contempla la acción penal pública, de oficio o a instancia privada y la acción penal privada. Dicha clasificación se hace tomando en cuenta a quien le corresponde y la forma del ejercicio de la acción, esto es, a quién se atribuye y cómo se promueve ésta.

Se mantiene el que constituye el principio en la legislación napoleónica, vigente en República Dominicana: La acción penal pública es confiada al ministerio público, encargado de su promoción y ejercicio en virtud del mandato general de perseguir de oficio las infracciones, reafirmandose la obligatoriedad de la acción penal como principio, quedando los criterios de oportunidad como excepciones que son reguladas en normas posteriores.

Se contempla además la acción pública a instancia privada, en la cual el ministerio público sólo puede ejercer la acción si previamente se ha presentado una instancia por parte de la víctima, mejor conocida entre nosotros como acción sujeta a querrela previa. Se trata de un concepto ampliado que sujeta no sólo el inicio de la acción a la instancia del particular, sino su mantenimiento.

En el texto se prevé una excepción en la cual el ministerio público podría ejercer la acción sin necesidad de la instancia previa, aún en presencia de un caso de los que están sujetos a ello. Se trata del caso de los menores y de los incapaces suje-

tos a tutela, bien porque no tenga representación o porque sea el padre, el tutor o representante quien comete el hecho punible en su perjuicio.

Donde el nuevo Código Procesal Penal da un giro verdaderamente importante es al consagrar la *acción penal privada* para determinadas categorías de infracciones, mediante la cual se brinda a la víctima la posibilidad de acusación autónoma y emerge la figura del acusador privado. Se trata de una especie de reivindicación del conflicto a las partes. En efecto, al contemplar la acción penal privada, se posibilita el ejercicio de la acción penal directamente por la víctima, quebrando de ese modo el monopolio de la acción pública que tradicionalmente ha tenido el ministerio público.

El texto indica, de manera limitativa, las “categorías de infracciones” perseguibles mediante acción privada.

Un mecanismo interesante que recoge el Código Procesal Penal es la posibilidad de la conversión, en el caso de algunos delitos, de la acción pública en privada, por acuerdo entre la víctima y el ministerio público. Las infracciones susceptibles de tal conversión son aquellas perseguibles sólo a instancia privada y las constitutivas de un delito contra la propiedad sin violencia grave, así como aquellas en las cuales el ministerio público aplica un criterio de oportunidad. La conversión es posible antes de la formulación de la acusación, de cualquier otro requerimiento conclusivo o dentro de los diez días siguientes a la aplicación de un criterio de oportunidad.

Conforme a la tendencia que luce más racional para transparentar los criterios que llevan a su aplicación, se regula el principio de oportunidad, con lo cual se busca además mitigar los excesos e inconvenientes de la persecución obligatoria aún de infracciones de escasa nocividad social. La aplicación del criterio de oportunidad permitirá al Estado concentrar sus limitados recursos en la investigación y enjuiciamiento de los casos con un impacto social más grave. La acción penal es el último recurso de la política criminal del Estado y, por tanto, la decisión de aplicarla debe estar influenciada por la utilidad de esta medida. Los casos previstos para la aplicación del principio de oportunidad tienen como objetivo principal solucionar en una fase temprana el conflicto al extinguir la persecución cuando su costo social y económico es mayor que el de la infracción.

La existencia de salidas alternativas y de fórmula de selección de casos (princi-

pio de oportunidad) no sólo responde a razones de política criminal, que buscan concentrar esfuerzos para los casos de mayor gravedad, sino que parten de la realidad ya inocultable de la sobrecarga de trabajo de los tribunales. Frente a ella ya no se pueden cerrar los ojos y se debe legislar creando los instrumentos que permitan diseñar políticas de control de esa sobrecarga. Esto es una condición esencial para que el proceso penal adquiera ribetes de eficiencia apreciables.

Como una regla de equidad, se le atribuye efecto extensivo, respecto de todos los coimputados, a la resolución que admite la prescindencia de la acción penal cuando la misma se fundamente en la insignificancia o poca lesividad del hecho.

El que se haya prescindido de la acción pública no impide, sin embargo, que la víctima pueda presentar la querrela en el plazo de diez días contados a partir de la notificación de la disposición que aplica el criterio de oportunidad. Transcurrido dicho plazo opera la caducidad para presentar la querrela.

La propuesta favorece la solución del conflicto mediante los mecanismos de la conciliación y la mediación. De ese modo, en los casos expresamente señalados, al acuerdo o conciliación entre la víctima y el imputado se le otorga efecto extintivo de la acción penal, siempre que se cumpla con lo pactado.

El ministerio público tiene el deber en los casos que admiten conciliación de instar a las partes a manifestar cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse. La propuesta faculta además al ministerio público a recurrir a la mediación, tanto solicitando el asesoramiento y auxilio de personas o entidades especializadas como instando a las partes a designar un amigable componedor. La conciliación está sujeta al control del ministerio público, quien puede desestimarla en presencia de fundados motivos para considerar la ausencia de igualdad para negociar entre las partes o que una de ellas ha actuado bajo coacción.

Otra figura procesal novedosa que contribuye a descongestionar el inflado sistema de justicia penal es la suspensión condicional del procedimiento, la cual se aplica a los casos en que sea previsible la aplicación de la suspensión condicional de la pena y se trate de un imputado que haya reparado el daño causado o haya asumido la obligación de hacerlo. Se requiere que el imputado haya admitido los hechos y manifestado su disposición de someterse durante un pla-

zo de prueba que va de uno a tres años, a ciertas reglas, cuyo incumplimiento pondría fin a la suspensión y permitiría reanudar la persecución penal.

Las reglas que condicionan la suspensión del procedimiento van dirigidas a evitar consecuencias ulteriores del conflicto que se pretende solucionar anticipadamente.

La violación injustificada y considerable de las condiciones de la suspensión del procedimiento necesariamente llevan a la reanudación del mismo.

Siguiendo el patrón de la legislación actual, en el Código Procesal Penal se regula la extinción de la acción penal, enumerando las causas que la producen.

Entre estas, merece especial mención la forma en que se regula la prescripción de la acción, que opera al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con prisión, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres; y al término de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto.

Se dedica un capítulo al régimen y ejercicio de la acción civil que surge de la infracción penal. En esta parte se mantiene en sus líneas generales el actual régimen procesal, aunque con importantes innovaciones que la amplían.

Entre éstas se cuenta la acción civil por daño social que tiende a la protección de los intereses difusos, es decir, los intereses que no son atribuibles a una persona en particular sino a una colectividad o a una categoría de personas. Se permite esta acción al ministerio público como representante de la sociedad y a organizaciones no gubernamentales que tengan una labor reconocida en el campo de los intereses difusos lesionados.

Por otra parte, se toma en cuenta en el nuevo Código Procesal Penal la falta de recursos de las víctimas para poder participar activamente en un proceso judicial luego de que sus derechos han sido vulnerados y para evitar que queden desamparadas les permite delegar el ejercicio de su acción civil en una organización no gubernamental especializada el ejercicio de esta acción. Esta delegación es posible también en el caso de los incapaces.

En un último capítulo del régimen de la acción se regulan las excepciones co-

mo obstáculos que se oponen al progreso de la acción. Estas encuentran su espacio de resolución sin que se conviertan en un mecanismo retardatario. Así se puede observar en la parte del Código relativa al procedimiento preparatorio, al juicio y a los recursos, los cuales son explicados más adelante.

3.1.3. La Justicia Penal y los Sujetos Procesales

El Código Procesal Penal dedica el Libro II a la definición de la justicia penal y los sujetos legitimados para intervenir en el proceso penal.

Al abordar la justicia penal se plantea la doble cuestión de la jurisdicción y de la competencia, determinando su carácter de irrenunciabilidad e indelegabilidad, así como la competencia exclusiva y universal de los tribunales para conocer y fallar sobre los hechos tipificados y sancionados penalmente. Como se puede observar al leer esta parte, se reivindica el principio republicano propio de nuestra forma de gobierno de que no pueden existir en esta materia tribunales o comisiones especiales. Hemos optado por la supresión de la competencia de las jurisdicciones militares y policiales para conocer y fallar los hechos punibles tipificados y sancionados por la legislación penal común, reservándole la atribución de conocer las infracciones estrictamente militares o policiales y aquellas faltas de carácter disciplinario.

Se abandona la regla de competencia territorial contenida en el Código de Procedimiento Criminal que contempla la triple posibilidad de que conozca el tribunal del lugar del hecho, el del domicilio del imputado o el del lugar donde éste es arrestado, que tiende a crear un conflicto de competencia causado por la propia norma destinada a regular. En consecuencia, en el Código Procesal Penal se asume como principio que el juez o tribunal territorialmente competente lo es el del lugar donde se haya consumado la infracción, dejando la posibilidad de que sólo de modo subsidiario otros lugares se tomen como referencia para determinar el juez o tribunal competente.

A estas reglas básicas se agregan las de la conexidad, la fusión de causas y los procedimientos en caso de incompetencia, y de conflictos de competencia negativos o positivos.

Las excepciones de incompetencia deben ser advertidas e invocadas antes de la apertura de juicio, ya que en toda la propuesta prima el criterio de que los

incidentes y excepciones previsibles deben ser solucionados durante el procedimiento preparatorio, de suerte que no se produzcan los retrocesos y contramarchas que tanto contribuyen a la demora judicial. Se asume en todo caso, el principio de la preclusión de los actos procesales, en la medida que cada medida tiene su oportunidad. No se trata de adelantar el caso "como caña pa' el ingenio", sino de disciplinar adecuadamente la realización de los actos, diligencias y trámites para que no se vea entorpecida y subvertida toda la actividad procesal.

a) Los Jueces y Tribunales

En lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales en materia penal, el Código Procesal Penal se adscribe plenamente a lo que dispone la Constitución, modificando la naturaleza de las funciones del juez de instrucción, quien pasa a ser un verdadero juez de control y garantías, abandonando su rol policiaco. Se suma a los órganos tradicionales el denominado juez de ejecución penal, lo que tiene el claro propósito político de brindar juridicidad a la ejecución penal.

La Suprema Corte de Justicia mantiene su competencia normal en materia penal, al tiempo de ver fortalecido su rol como organismo rector del Poder Judicial, al fijar por vía reglamentaria algunos asuntos de interés práctico. Pero, es importante destacar que, dada las peculiaridades del recurso de apelación que está a cargo de las Cortes de Apelación, los recursos extraordinarios de casación serán previsiblemente menos, en la medida que las decisiones ofrecidas por aquellas son verdaderas "mini-casaciones", con lo que se alivia en términos prácticos la sobrecarga de trabajo de nuestro más alto tribunal de justicia.

Las atribuciones de las Cortes de Apelación no se modifican estructuralmente, pero sí cualitativamente, en la medida que el juicio ante los juzgados de primera instancia es de mayor calidad y el recurso de apelación es más restringido y no conduce necesariamente a la repetición del juicio, sino a una evaluación de los agravios contra la sentencia desde el punto de vista del derecho y sólo excepcionalmente sobre los hechos.

En consonancia con el criterio de ofrecer un buen juicio desde el inicio del iter procesal, los juzgados de primera instancia se reorganizan a partir de su funcionamiento unipersonal o colegiado, según la gravedad del hecho punible objeto de

conocimiento y fallo. Así, para los hechos que conlleven penas pecuniarias o pena privativa de libertad cuyo máximo previsto sea de dos años, o ambas penas a la vez, se integra por un sólo juez y por tres jueces cuando lleve aparejada la posibilidad de una sanción superior a dos años de pena privativa de libertad. Para conocer de las acciones de hábeas corpus y de los hechos punibles de acción privada se integra igualmente de modo unipersonal.

El juez de instrucción, como se ha indicado, abandona sus funciones investigativas y se concentra en las jurisdiccionales, asumiendo el control de las medidas restrictivas de libertad o de derechos y examinando la legalidad de la investigación realizada por el ministerio público, al tiempo de autorizar o no la apertura de juicio, según corresponda. El juez de la instrucción, como se le denomina en el nuevo Código Procesal Penal, modifica su modo de actuación tradicional, vinculado a los trámites administrativos, clandestinos y desprovistos de garantías, y lo sustituye por la forma judicial, en la cual se garantiza el contradictorio y la publicidad entre las partes.

El juez de ejecución penal viene a vincular la actividad jurisdiccional con los efectos concretos del cumplimiento de las penas, la suspensión condicional del procedimiento y la prisión preventiva.

Los jueces de paz conocen de las contravenciones, los procedimientos para inimputables, las infracciones a la legislación de tránsito de vehículos de motor y a la legislación municipal, y del procedimiento preparatorio en los casos de urgencia hasta la intervención del juez de la instrucción. Esta última atribución, permite que toda persona sea llevada ante un juez sin demora innecesaria, lo cual le confiere carácter jurisdiccional y de razonabilidad a cualquier medida de coerción que pueda ser adoptada en esta fase.

La jurisdicción de atención permanente es otra innovación, conforme a la cual en cada Distrito Judicial se mantiene en funcionamiento un despacho judicial las 24 horas del día y de la noche, de suerte que las diligencias y actuaciones que no admiten demora se puedan realizar oportunamente.

La organización del despacho judicial permite que el juez se concentre en sus actividades jurisdiccionales y que todo lo concerniente al trámite se delegue en el secretario y el personal auxiliar de los tribunales.

En lo que se refiere a la inhibición y recusación de los jueces, el nuevo Código

Procesal Penal especifica los hechos y circunstancias que pueden dar lugar a su procedencia. El trámite, las formas y plazos de la inhibición y la recusación son simplificados.

b) La Víctima

En el nuevo Código Procesal Penal el concepto de víctima se amplía al reconocer como tal a los socios o asociados de sociedades o asociaciones en los cuales los gestores y administradores son los que violan la ley penal. Lo mismo ocurre al admitir la representación de intereses difusos por parte de organizaciones especializadas en determinados ámbitos de la actividad comunitaria.

La víctima puede intervenir en esa sola calidad, pero al mismo tiempo puede presentarse en querrela, lo que le legitima para perseguir por sí misma o adherirse a la persecución ya iniciada por el ministerio público, según se trate de hechos de acción privada o pública. De modo que su pretensión no es exclusivamente a fines resarcitorios, sino que puede velar efectivamente por la correcta aplicación de la ley penal. Esta participación directa de la víctima también facilita la solución anticipada del conflicto por la medtación y la conciliación. La víctima abandona su rol de "convidado de piedra" y pasa a ser un actor importante en el escenario judicial.

c) El Ministerio Público

El ministerio público ejerce la acción penal, mediante las actividades de investigación durante el procedimiento preparatorio y la presentación de la acusación y su sostenimiento en juicio, a partir de las pruebas lícitamente obtenidas y sometidas al debate oral y público. El principio de objetividad y de igual trato de todas las personas al hacer aplicación de la ley forman parte de los criterios rectores de sus actividades.

Un dato que conviene destacar es que en la nueva normativa el ministerio público a cargo de una investigación tiene para ese caso competencia nacional, y puede adelantar sus actuaciones en todo el territorio nacional con la única obligación de anticipar o dar noticia al funcionario del ministerio público del lugar. Esta norma práctica se aviene con el principio de indivisibilidad de este órgano y al mismo tiempo le otorga flexibilidad.

d) La Policía Judicial y los demás órganos auxiliares de investigación

La Policía Judicial es visualizada como un cuerpo técnico, no militarizado, integrado por profesionales y técnicos en las ciencias forenses sujetos al control del ministerio público, cuyas reglas y procedimientos aplican por igual a las agencias ejecutivas que cumplen tareas auxiliares y accidentales de investigación con fines judiciales.

La profesionalización y la subordinación funcional de la policía, así como la de todas las agencias ejecutivas o administrativas que realicen actividades auxiliares de investigación, se robustece mediante la posibilidad de activar mecanismos sancionatorios.

e) La Defensa Técnica

La obligatoriedad de la asistencia profesional letrada de los imputados, así como las provisiones de una defensa pública integral, es disciplinada a partir del reconocimiento del derecho a la defensa técnica como una facultad irrenunciable.

Los aspectos relativos al número, renuncia o abandono, sustitución y sanciones aplicables a la defensa son reglamentadas de un modo simple, siempre a la luz del principio rector de garantizar una defensa técnica adecuada y oportuna.

f) El Actor Civil y el Tercero Civilmente Responsable

En el Código Procesal Penal se organiza la intervención del actor civil y del tercero civilmente demandado en forma similar, pero más simplificada, a como actualmente lo hace el Código de Procedimiento Criminal.

g) Auxiliares de las partes

Las nuevas normas brindan a las partes la oportunidad de contar con la asistencia de consultores técnicos que les audien en materias especializadas, sin tener que estar sometidos a la imparcialidad del perito o intérprete judicial.

De igual modo se prevé la posibilidad de que las partes cuenten con asistentes no letrados, entre los que vale mencionar a los estudiantes que realizan su práctica forense.

Finalmente, se establece el deber común de todas las partes intervinientes de litigar con lealtad.

3.1.4. Actividad Procesal

Normas que en el Código de Procedimiento Criminal se encuentran dispersas y otras que no contiene o que estando presentes llevan a confusiones, se presentan en este libro del Código Procesal Penal de manera ordenada, procurando claridad y precisión en el lenguaje. Lo novedoso de las reglas contenidas en este libro reside, a más de su presentación, en su simplificación y su flexibilidad. En lo que respecta a la actividad procesal, se destacan:

- a) La forma de documentación de los actos procesales, que considera el aprovechamiento de los nuevos avances tecnológicos, pues no se limita a la instrumentación escrita.
- b) El establecimiento de plazos normales y no francos, de más fácil cómputo, que abarcan hasta las doce de la noche del día en que concluye el plazo, toda vez que el código prevé la habilitación de oficinas de atención permanente.
- c) La atribución a la Suprema Corte de Justicia de la facultad de dictar normas prácticas para regular las formas y el medio de las notificaciones, regulaciones que podrán responder a las necesidades que revelen los estudios que sobre el funcionamiento de la justicia encargue la propia Suprema Corte de Justicia.
- d) La inclusión de todo un capítulo destinado a establecer normas de control de la duración del proceso.
- e) El establecimiento de reglas de cooperación judicial, y entre ellas las relativas a la extradición, la cual se somete a control judicial.

3.1.5. Medios de Prueba

El Código Procesal Penal establece los principios de libertad, objetividad y legalidad de la prueba como los ejes rectores del régimen probatorio, al tiempo de fijar la sana crítica como el sistema de su valoración judicial.

Se sigue el criterio de que el ministerio público y sus auxiliares deben disponer de las herramientas para hacer una investigación eficiente, pero en aquellos ca-

esos en que los actos o diligencias conduzcan a restringir los derechos o libertades de las personas tienen que proveerse de una autorización judicial.

La inspección de lugares, cosas y personas es rodeada de suficientes garantías para otorgarles eficacia probatoria. Los allanamientos y visitas domiciliarias, así como las interceptaciones telefónicas y el secuestro de objetos son regulados con los mismos criterios de eficiencia y garantías.

3.1.6. Medidas de coerción

La legislación procesal penal que hasta ahora hemos padecido los dominicanos concede muy pocas opciones a los operadores del sistema de justicia en las ocasiones que deben adoptar una medida de coerción antes del juicio. En efecto, el sistema abusa de la prisión preventiva o provisional como único medio para asegurar la presencia del imputado en los procedimientos. No por casualidad la proporción de presos preventivos se mantiene constante entre el 77% al 87%, según se considere como preventivo o condenado a los sentenciados en primer grado que ejercen el recurso de apelación.

La prisión preventiva y provisional, lejos de ser considerada una medida de coerción extrema de naturaleza excepcional, es, en el sistema del antiguo Código de Procedimiento Criminal, aplicada como un acto de instrucción mediante el cual se "regulariza" el arresto operado por la policía o el ministerio público. De hecho, los jueces de instrucción "trancan" para investigar de manera administrativa a la generalidad de las personas que les son remitidas como imputadas o sospechosas de hechos criminales. Por lo regular se descarta la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares menos gravosas o en todo caso, reconocer el derecho de todo imputado de esperar el juicio en libertad.

La vigencia del síndrome de la prisión preventiva, verdadera enfermedad que afecta a la mayor parte de los sistemas penales latinoamericanos y al francés, nos obliga a examinar los presupuestos materiales y formales que autorizan la excepcional medida de privar preventiva o provisionalmente a una persona de su libertad.

La prisión preventiva o provisional es la intervención más grave que el Estado está autorizado a adoptar en ausencia de juicio en nuestro ordenamiento jurídico. En razón de que la misma implica la privación total de libertad física sin un juicio definitivo, debe ser rodeada de las más estrictas garantías y reservas. No

por casualidad la seguridad personal ocupa el centro del artículo 8 de nuestra carta sustantiva.

En el nuevo Código Procesal Penal se organizan medidas de coerción personales y reales. Las primeras vienen a limitar la libertad de actividades o de movimiento del imputado y las segundas a conservar los bienes sobre los cuales se ejecutaría una eventual multa o indemnización o a establecer una garantía accesorio de que el imputado no se sustraerá al juicio.

En materia de medidas de coerción personales se ofrece un abanico de opciones a los jueces a fin de que adecuen a las circunstancias concretas del imputado y del caso. Así, se contemplan la presentación de una garantía económica, la prohibición de abandonar el país o una determinada localidad, la obligación de someterse a una vigilancia periódica, la colocación de un localizador electrónico, el arresto domiciliario y, como medida extrema, la prisión preventiva.

En todo los casos las medidas de coerción tiene que estar contenida en un escrito nominado, individualizado, expreso, motivado, fechado y firmado por el juez que la dispone. Constituye un acto que cumple con la forma general de los mandamientos, el cual debe ser notificado o exhibido al imputado al momento de su ejecución.

La naturaleza jurisdiccional del acto hace que sea recurrible, esto es, impugnabile ante juez o tribunal diferente al que lo libra. En todo caso se establece un régimen de revisión permanente de todas las medidas de coerción, de modo que puedan hacerse cesar, modificarse o sustituirse por otra más o menos grave, según las circunstancias.

Finalmente, cabe anotar que el Código Procesal Penal permite la adopción de medidas de coerción reales dirigidas a conservar y a poner a buen recaudo los bienes que podrían servir para la ejecución de las indemnizaciones o multas imponibles mediante una sentencia irrevocable.

3.1.7. Costas e Indemnizaciones

Las particulares características del proceso penal obligan a una regulación especial de la cuestión de las costas, distinta de la del procedimiento civil. En este sentido, este libro se caracteriza:

- a) Por la delimitación del concepto costas, de modo que comprende las tasas judiciales, los gastos originados por la tramitación del procedimiento y los honorarios de los abogados, expertos, consultores técnicos, traductores e intérpretes que hayan intervenido en el procedimiento;
- b) La liquidación a cargo del secretario;
- c) Su revisión ante el juez o tribunal que tomó la decisión o ante el ministerio público cuando corresponda;
- d) La imposición de las costas al denunciante que haya falseado los hechos;

En el mismo libro se establecen normas que regulan la indemnización del imputado en caso de revisión de las sentencias por error judicial, salvo el caso de aplicación de una ley o jurisprudencia posterior más benigna y el caso de amnistía o indulto.

4. PARTE ESPECIAL

4.1. El Procedimiento Común

Al diseñar el procedimiento común, asumimos la necesidad de simplificar, racionalizar y agilizar el procedimiento preparatorio para que el juicio sea el espacio visible donde se realice el litigio en la forma que lo ordena nuestra Constitución. Una legislación que procure eficientizar y salvaguardar los intereses encontrados de las partes intervinientes en el crucial procedimiento preparatorio debe basarse en: 1) una diferenciación de las funciones investigativas y persecutorias de las jurisdiccionales; 2) una mayor participación de las partes, y; 3) en la oportunidad de solucionar anticipadamente aquellos conflictos que por diversas razones no deben recorrer los laberínticos vericuetos del procedimiento hasta el juicio de fondo.

Debemos plantear de inicio la atribución de las tareas de investigación al órgano que tiene a su cargo la promoción de la acción penal, el ministerio público, a fin de que pueda fundamentar la acusación propia, o la que en su caso presente el querellante. De otro lado, el juez tiene la misión de examinar y garantizar la legalidad de las actuaciones del ministerio público y los órganos de investigación. Este control opera mediante la atribución exclusiva de la facultad de ordenar las medidas de coerción o referidas a la obtención de elementos de prueba que impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales. Asimismo, se le reserva al juez el examen de los incidentes, excepciones y los presupuestos para autorizar la apertura de juicio, esto es la acusación del ministerio público o del querellante. De suerte que el juez no sólo conserva su poder jurisdiccional, sino que se fortalece al convertirse en guardián efectivo y diferenciado de las libertades y derechos fundamentales de las partes.

4.1.1. Procedimiento Preparatorio

El procedimiento preparatorio es una etapa compleja en la que deben armonizarse diversos intereses y funciones. Por una parte, la preparación de la acusación por parte de los acusadores estatales y de la propia víctima, acciones que son concurrentes pero que no por ello dejan de plantear controversias y divergencias de enfoque. Por otro lado, las partes civiles, circunscritas al ejercicio de la acción civil. Por último, el interés del imputado y la función de la defensa, en

contradicción directa y necesaria con los acusadores. Esta pluralidad de intereses y la complejidad de controversias que generan justifican plenamente las nuevas funciones del juez durante el procedimiento preparatorio.

El Código Procesal Penal abandona el sistema procesal penal mixto clásico o inquisitivo reformado para adoptar el modelo acusatorio. La actividad jurisdiccional durante el procedimiento preparatorio. Se procura concentrar en una o dos audiencias previas al juicio. Una que se produce en las oportunidades que sea necesario controlar las medidas de coerción o decidir sobre los requerimientos y solicitudes iniciales de las partes y otra, la audiencia preliminar, que cierra el procedimiento y sirve para controlar la acusación y autorizar, cuando corresponde, la apertura de juicio.

El procedimiento preparatorio, que se inicia con uno de los actos a través de los cuales los órganos estatales adquieren conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible, consiste en el agotamiento de una serie de actos y diligencias, esencialmente de investigación, enderezados a determinar si existen fundamentos para presentar la acusación y exponer a la persona imputada al juicio.

La denuncia, la querrela, el informe policial o el conocimiento directo obligan al ministerio público a abrir la investigación preliminar en los casos de acción pública a la luz del principio de legalidad. Sin embargo, tras una valoración inicial, éste puede disponer el archivo del caso o bien ejercer la acción penal.

El archivo, sobre el cual le corresponde decidir al ministerio público, está referido a la inexistencia del hecho, a la verificación de que el mismo no es punible, el imputado no puede ser individualizado, se ha producido la conciliación o por aplicación de un criterio de oportunidad. El acto por el cual el ministerio público dispone el archivo puede ser objetado por la víctima ante el juez que resuelve mediante una resolución que es apelable. Como se puede apreciar, se combina el principio de legalidad con el de oportunidad reglada de la acción penal.

En vista de la excepcionalidad y proporcionalidad de toda medida de coerción, aún aquellas que pueden ser adoptadas en ausencia de un acto jurisdiccional, el Código Procesal Penal impone su examen sin demora innecesaria en audiencia oral y contradictoria por parte de los jueces. En el nuevo Código Procesal Pe-

nal se organiza un régimen de plazos muy estrictos para favorecer el estado de libertad del imputado, ya que la detención sólo se autoriza, en sus modalidades de arresto o conducencia, en caso de flagrancia o para el agotamiento de determinadas diligencias.

Además de examinar las medidas de coerción, los jueces realizan otros actos jurisdiccionales como son autorizar los allanamientos, interceptaciones de las telecomunicaciones privadas y el secuestro de objetos o documentos.

Una vez comienza el procedimiento preparatorio, mediante uno de sus actos iniciales, el mismo concluye en plazos y formas específicos. Así, si el ministerio público, después de la valoración inicial, pone en movimiento la acción penal, debe agotar su investigación y presentar un acto conclusivo dentro de los tres meses si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de seis meses si ha sido ordenada otra de las medidas de coerción previstas en el Código. Aquellos casos en los que se abre una investigación genérica rige el plazo máximo de la prescripción para el ejercicio de la acción penal.

Los actos conclusivos son aquellos referidos a los resultados de los actos de investigación del ministerio público, los cuales son examinados en la audiencia preliminar. Estos actos son la acusación, la aplicación de un procedimiento abreviado y la suspensión condicional del procedimiento, ya explicada.

La acusación es la solicitud de apertura formal de juicio, articulada por el ministerio público o el querellante, a partir de los elementos de prueba recogidos durante la investigación.

El procedimiento preparatorio concluye con la resolución dictada por el juez en la audiencia preliminar, mediante la cual puede admitir y fijar los límites de la acusación, ordenar la suspensión condicional del procedimiento o aplicar un procedimiento abreviado, entre otras disposiciones. El juez puede también dictar auto de no haber lugar cuando el hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado, la acción penal se ha extinguido, el hecho no constituye un tipo penal, concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable o los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos.

4.1.2. El Juicio

Luego de establecer normas sencillas para su preparación, que facilitan, previo a la audiencia de juicio, la solución de los incidentes, se ratifican los principios generales de inmediación, publicidad y oralidad. La realización de estos principios se ve reforzada en el Código Procesal Penal en razón de que las fases anteriores y posteriores al juicio han sido diseñadas en función de éste. Así, la idea de la centralidad del juicio que domina todo el Código Procesal Penal ha tenido por consecuencia un producto que permite sustraernos a la semi-oralidad, semi-contradicción y semi-publicidad a la que conduce la estructura del antiguo Código de Procedimiento Criminal, en la que el juicio se ve condicionado por un procedimiento preparatorio de corte inquisitivo cuyo resultado es el expediente.

Aunque se fija el orden en que intervienen los distintos sujetos, estas normas dejan plena libertad a las partes para organizar el orden interno en que presentan cada uno de sus medios de prueba.

Especial énfasis se puso en la regulación de las causas de suspensión de la audiencia de juicio, las cuales se indican en el texto y dan lugar a una única suspensión que no puede superar los diez días. El principio de concentración y continuidad conforme al cual el juicio se celebra en días consecutivos pretende erradicar la odiosa práctica de envíos y reenvíos interminables que fracturan el debate.

El juicio presenta algunas innovaciones interesantes. Entre ellas cabe resaltar el interrogatorio directo, la posibilidad del voto disidente y la del voto salvado en las deliberaciones, y la valoración de la prueba conforme la regla de la sana crítica.

Se prevé la consignación del voto de los jueces que no estuvieron de acuerdo con la decisión de la mayoría. De igual modo, se puede consignar el voto salvado, en los casos en los que uno o más jueces coinciden con la decisión de la mayoría, pero no con sus motivaciones.

Al hablar de la sana crítica a lo que nos referimos al sistema de valoración en virtud del cual el juez o tribunal examina los elementos de prueba conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Los jueces y tribunales deben explicar en términos sencillos las razones por las cuales otorgan un determinado valor a cada uno de los elementos de prue-

ba, con base a su apreciación conjunta y armónica. Se abandona así el sistema de la íntima convicción.

La parte más novedosa del juicio la constituye sin dudas su separación en un debate sobre la culpabilidad y otro para la determinación de la pena. Esta regla aplica a los juicios donde la pena imponible prevista pueda superar los diez años de privación de libertad. Para estos casos se celebra una audiencia separada para la pena, posterior a la declaración de culpabilidad.

En el nuevo Código Procesal Penal se fijan criterios de determinación de la pena e incluso se prevé la posibilidad, en algunos casos, ya del perdón judicial, ya de la suspensión condicional de la pena. El juez o tribunal puede establecer condiciones especiales de cumplimiento de la pena para casos determinados, como los de los mayores de setenta años de edad y las mujeres en estado de embarazo o de lactancia, entre otros.

4.2. Procedimientos Especiales

Los procedimientos especiales comprenden los realizados para las contravenciones, el procedimiento para infracciones de acción privada, los procedimientos abreviados, el procedimiento para asuntos complejos, el procedimiento para inimputables, los casos de competencia especial o "privilegio de jurisdicción", y, por último, el hábeas corpus, cuyos rasgos particulares señalamos a continuación:

4.2.1. Procedimiento por Contravenciones

El procedimiento por contravenciones se caracteriza por su simplicidad y brevedad. A partir de la acusación presentada por la víctima, el ministerio público o el requerimiento del funcionario al cual la ley faculta para comprobar y perseguir las contravenciones, el juez procede a fijar el juicio dentro de los tres días siguientes, en el cual se produce la prueba y se dicta la resolución que corresponda.

4.2.2. Procedimiento para Infracciones de Acción Privada

Presentada la acusación por parte de la víctima, el juez convoca a una audiencia de conciliación preliminar dentro de los diez días siguientes. Se aplican las

reglas generales de la conciliación y la mediación. Si ésta no se logra, entonces el juez procede a fijar el juicio conforme a las reglas del procedimiento común.

Lo novedoso de este procedimiento es el hecho de que la víctima acusa por sí sola y directamente, sin la presencia del ministerio público en el juicio.

4.2.3. Procedimiento Penal Abreviado

El código contempla entre sus novedades el procedimiento penal abreviado, en dos modalidades, de acuerdo pleno y de acuerdo parcial. En ambos casos se simplifican los trámites, se suprime la producción de prueba en juicio y se procura aminorar los costos y favorecer la solución en muchos casos en que la prueba disponible hace casi segura la condena del imputado.

Se habla de acuerdo pleno en aquellos casos en que concurre el consentimiento del imputado, el querellante y el ministerio público, siempre y cuando se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima igual o inferior a cinco años de pena privativa de libertad, o una sanción no privativa de libertad y el defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento de modo voluntario e inteligente. En tales casos, el juez de la instrucción convoca a una audiencia y dicta sentencia luego de oír a las partes.

El caso de acuerdo parcial opera de modo distinto, ya que sólo abarca el juicio sobre la culpabilidad y se aplica en todos los casos en que las partes lleguen a un acuerdo exclusivamente sobre los hechos y soliciten un juicio sobre la pena.

Los casos de procedimiento penal abreviado son convenientes en muchos casos, pero no luce recomendable permitirlos sin restricciones toda vez que ponen en juego el principio de judicialidad. Por ello la sola solicitud no basta para admitir el procedimiento, sino que se otorga al juez la facultad de verificar los requisitos de su admisibilidad.

4.2.4. Procedimiento para Asuntos Complejos

El llamado procedimiento para asuntos complejos, concebido cuando existen una multiplicidad de hechos punibles, pluralidad de imputados o víctimas o se presente una modalidad de delincuencia organizada, autoriza la aplicación de normas que modifican los plazos procesales y permite extender las medidas de

coerción. Se establece una regla para la producción de prueba masiva y su unificación a fin de simplificar los juicios y no proceder a la recepción maratónica de prueba cuando la misma es coincidente y repetitiva. Otra novedad que aplica a este tipo de casos es la admisión de los llamados investigadores bajo reserva o encubiertos, los cuales son necesarios para infiltrar organizaciones del crimen organizado. Esta figura muy conocida en el derecho penal comparado es diferente al agente provocador, cuya admisión es discutible en razón de que su coparticipación en los hechos punibles no lo hace un medio idóneo de investigación.

4.2.5. Procedimiento a Inimputables

Con la incorporación de un procedimiento especial para el caso de inimputables se procura en esencia judicializar la aplicación de medidas de seguridad a las personas a quienes se les atribuye la comisión de un hecho punible, pero sus particulares circunstancias personales lo hacen inimputables. Con estas reglas la aplicación de medidas de seguridad a los inimputables no queda ya abandonada a la disposición de una autoridad administrativa.

Las características que alejan al procedimiento para inimputables del procedimiento común:

- a) Cuando el imputado es un incapaz, sus facultades son ejercidas por su representante legal o la persona designada por el juez o tribunal;
- b) No puede ser tramitado conjuntamente con uno ordinario;
- c) El juicio se realiza en cámara de consejo, sin la presencia del procesado, cuando es imposible a causa de su estado de salud o resulta inconveniente por razones de orden, seguridad o de salud;
- d) La sentencia tiene por objeto disponer la absolución o la aplicación de una medida de seguridad, nunca una sanción penal ordinaria.
- e) No son aplicables las reglas referidas al juicio penal abreviado, ni las de suspensión condicional del procedimiento.

4.2.6. Competencia Especial

El Código Procesal Penal establece un procedimiento especial para los casos de competencia especial, también denominados como de "privilegio de jurisdicción", para aquellos casos cuyo conocimiento en primera o única instancia

compete excepcionalmente a las Cortes de Apelación o a la Suprema Corte de Justicia en razón de la función que desempeña el imputado. El nuevo procedimiento, similar al previsto en el antiguo Código de Procedimiento Criminal, se ajusta en la nueva normativa a la forma acusatoria.

4.2.7. El Hábeas Corpus

La acción constitucional de habeas corpus resulta simplificada en sus formas de presentación, la agilidad de la tutela judicial y en el objeto de la resolución que lo admite.

El nuevo Código Procesal Penal busca desformalizar lo relativo a la solicitud, la cual puede plantearse aún por escrito y obliga a una reacción inmediata de presentación del impetrante como una forma de ponerlo bajo protección judicial. Se admite el habeas corpus preventivo, en consonancia con lo que dispone la Convención Americana de Derechos Humanos y se limita a la discusión de la violación de las formalidades legales o de competencia, sin examinar lo relativo a los indicios, ya que esa tarea corresponde al juez de la instrucción. De otro lado, esto persigue proscribir la odiosa regla que permite a los jueces convalidar o subsanar las violaciones a las exigencias constitucionales *ex-post facto*, como si fuera posible que una ley o procedimiento pudiere autorizar la vulneración de las garantías sustantivas. No procede el hábeas corpus cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de las medidas de coerción.

5. RECURSOS Y MEDIOS DE IMPUGNACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

La forma en que se organiza el sistema de recursos en el nuevo Código Procesal Penal se funda en la idea de la centralidad del juicio como matriz a partir de la cual se desarrolla el resto del proceso penal. En consecuencia, se asume que la sentencia fruto de un juicio, adelantado y concluido con garantías para el ejercicio de los derechos de todas las partes intervinientes, no pueda ser impugnada sin mayores razones o agravios.

En la práctica dominicana, los recursos se convierten muchas veces en vías de dilación de los procesos, de modo que la solución del conflicto se ve entorpeci-

da por efecto de la presentación y el conocimiento de un recurso, todo en detrimento de la impartición de una justicia pronta y cumplida.

Salvo el recurso de casación, que es extraordinario, y el de revisión, que puede calificarse como especial, los recursos que contempla la legislación vigente conducen a una repetición del juicio.

La repetición del juicio resulta lógica en el actual sistema por las siguientes razones, consideradas individualmente o en su conjunto:

- Porque el primer juicio no fue tal, por no cumplir las condiciones a que obligan la sustancia y forma judiciales;
- Porque los jueces no satisfacen debidamente la motivación de las sentencias;
- Porque la composición unipersonal de los juzgados de primera instancia, hace que la sentencia descansa sobre una sola persona, lo cual debilita el juicio.

La lógica anterior no funciona del mismo modo en un sistema estructurado sobre la base de un juicio ajustado a las formas que les son consustanciales, cuales son independencia, identidad e imparcialidad del juzgador, la oralidad, publicidad, contradicción, inmediación y concentración de los debates, la incorporación de la prueba lícitamente obtenida y la motivación en hecho y en derecho de las decisiones.

Partiendo de que en primera instancia, tal como está diseñado en el nuevo Código Procesal Penal, se realizará un verdadero juicio *con todas las de la ley* (para usar una frase que paradójicamente no es tan común entre los juristas), los recursos se han diseñado de modo que no conduzcan inevitablemente a la duplicación del juicio.

Así, la oposición, aunque sigue siendo una vía de retractación, pasa a ser un recurso contra las decisiones que resuelven un trámite o incidente del procedimiento, cerrándose la vía de la oposición contra las sentencias que resuelven el fondo del asunto.

En el Código Procesal Penal que este documento pretende explicar, el recurso de apelación se organiza de manera distinta según que vaya dirigido contra las

decisiones de la etapa preparatoria o de instrucción, o vaya dirigido contra las sentencias ("de fondo", como se les llama entre nosotros) pronunciadas en el juicio oral de primera instancia.

La casación se presenta como un recurso destinado a controlar el apego de las sentencias a las normas de orden legal, constitucional o contenida en los pactos internacionales de derechos humanos adoptados por los poderes públicos dominicanos. La casación queda limitada porque muchas de sus funciones ya las cumple la apelación de la sentencia, diseñada de modo más cercano al recurso de casación; esto es, limitado a los errores de procedimiento y aplicación de la ley, sin que pueda valorar nuevamente los hechos. Las limitaciones al recurso de casación permiten que el máximo tribunal concentre sus esfuerzos en los casos de mayor gravedad (más de 10 años) y en la unificación de la interpretación de la ley. Por eso se han incorporado los motivos de manifiesta falta de fundamento y de jurisprudencia contradictoria.

En el recurso de revisión se mantienen con algún perfeccionamiento los cuatro casos de revisión, con el elemento innovador de que se agregan dos nuevos casos en los que se abre el recurso y cede con ello la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada: el de prevaricación de los jueces o jurados que intervinieron en la sentencia y el de la promulgación de una ley más favorable al condenado.

6. EJECUCION

La justicia penal no puede permanecer ajena a la cuestión de la ejecución de sus decisiones. No se justifican las excusas de que el problema de los sujetos a condena es asunto de los encargados de los centros penitenciarios o de cobrar las multas o de aplicar la medida de que se trate, para abandonar a la suerte de las autoridades administrativas el control del cumplimiento de penas que, sin embargo, han impuesto los jueces. Como consecuencia de ello, se crea en el Código Procesal Penal la figura del juez de la ejecución, cuyas funciones principales son:

- a) Controlar el cumplimiento de adecuado de las sanciones y el respeto de los fines constitucionales de la pena;
- b) Disponer las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y hacer comparecer ante sí a los condenados o a los encargados de la ejecución, con fines de vigilancia y control;

- c) Dictar los pronunciamientos que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe y exhortar a la autoridad competente para que en el mismo sentido expida las resoluciones necesarias;
- d) Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión del proceso a prueba;
- e) Presentar los recursos de revisión de sentencia, en caso de que se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, o en caso de cambio jurisprudencial en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que favorezca al imputado sujeto a condena;
- f) Conoce de todos los incidentes propios de la ejecución; y
- g) Disponer la libertad condicional del imputado, en los casos procedentes.

Otro aspecto importante de las reglas contenidas en este libro, son las que tratan de la ejecución civil (Título II), que disponen lo relativo a la ejecución de la sentencia en cuanto a los intereses civiles.

En fin, todo el libro de la ejecución tiende a judicializar la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales penales, lo cual fortalece las garantías del imputado al tiempo que se habilita un dispositivo de control, que en el caso de los encarcelados opera externamente sobre el sistema penitenciario y viene a llenar el necesario papel de fiscalizador de las actuaciones de las autoridades administrativas encargadas de los recintos carcelarios.

7. NECESIDAD DE NORMAS Y ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS

Es necesario insistir en que la transformación integral del proceso penal y de un modo particular del ejercicio del poder punitivo formal en una sociedad como la nuestra no es un simple cambio de procedimientos, sino que obliga a provocar modificaciones sustanciales en la organización de los dispositivos de investigación, persecución, acusación, defensa, enjuiciamiento y ejecución penales. Y al mismo tiempo, comprometen un cambio de paradigma cultural que debe influir en toda la sociedad.

Precisamente, una de las virtudes de la reforma procesal penal, es que pone al descubierto muchas disfunciones del sistema de justicia penal y obliga en una dinámica de ajustes permanentes a buscar soluciones a viejos problemas que

permanecen encubiertos bajo las formas autoritarias de organización de nuestras instituciones.

La sustitución de juicios de papel por juicios a partir de pruebas, conduce necesariamente al fortalecimiento en las capacidades de investigación, prueba y acusación. La ampliación de la intervención de la víctima implica el diseño de sistemas de atención integrales y lo propio sucede con la defensa pública.

Estamos conscientes de que hacen falta otras medidas complementarias que permitan transformar todo el sistema de justicia penal. De ahí, que apoyemos la aprobación de un Estatuto del Ministerio Público, una reforma policial, una ley de defensa pública, un sistema integral de atención a las víctimas y otras normas que vendrían a preparar la puesta en marcha de un modelo de proceso penal como lo pauta la Constitución y lo merece la sociedad dominicana.

En sentido general, la reforma procesal penal tiene un efecto multiplicador, que permite hacer visible los juicios, fortalece la aplicación de la ley, anima la producción del conocimiento jurídico, consolida el Estado de Derecho y mejora la calidad de vida de toda la comunidad.

Félix Damán Olivares Guillón

Ramón Emilio Núñez Núñez

**CODIGO PROCESAL PENAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

PREVIOUS PAGE BLANK

CONSIDERANDO: Que el actual Código de Procedimiento Penal es el producto de la traducción, localización y adecuación del Código de Instrucción Criminal Francés, ordenada mediante resolución congresional promulgada por el Presidente Meriño el 4 de julio del año 1882, y que tuvo como resultado la publicación ordenada por decreto No.2250 de fecha 27 de junio de 1884;

CONSIDERANDO: Que en su conjunto las normas del Código de Instrucción Criminal favorecen la aparición de prácticas inquisitivas, arbitrarias, altamente formalizadas y retidas con la programación constitucional de un debido proceso;

CONSIDERANDO: Que la reforma procesal penal constituye una necesidad impostergable, por lo que la adopción de un nuevo Código Procesal Penal inspirado en los principios y normas constitucionales, viene a permitir la realización de la aspiración ciudadana de una justicia que provee protección efectiva frente al fenómeno criminal y la violencia social, aproxime la justicia a los ciudadanos, tutele efectivamente los derechos humanos, al tiempo de humanizar y dignificar la ejecución penal;

CONSIDERANDO: Que el objeto de la reforma procesal penal propuesta, después de un intenso proceso de discusión y análisis, caracterizado por una amplia participación y consenso nacionales, consiste en dotar al sistema de justicia penal dominicano de herramientas normativas modernas y consonas con las aspiraciones ciudadanas de contar con una impartición de justicia pronta, certera y cumplida;

CONSIDERANDO: Que este conjunto de normas viene a disciplinar la forma como se acusa, se defiende, se juzga y se ejecuta lo juzgado, de una manera sencilla, con celeridad y respeto de las garantías constitucionales, con el firme propósito de contribuir a que los procesos dejen de ser una sucesión

de trámites interminables o vía crucis, en cuyos laberintos quedan atrapados y desamparados víctimas e imputados, sin que la comunidad vea satisfecha sus aspiraciones de paz y sosiego que derivan de la solución efectiva de los conflictos generados por las conductas socialmente lesivas;

CONSIDERANDO: Que hemos considerado oportuno clarificar las funciones respectivas de los órganos y sujetos procesales, de modo que las tareas de investigación, acusación y prueba queden a cargo de los representantes del ministerio público, la defensa técnica a cargo de los abogados, y el conocimiento y fallo de los asuntos, a los jueces, conforme las pruebas sometidas al debate;

CONSIDERANDO: Que el país aspira y merece iniciar todo el proceso de cambios en el sistema de justicia penal con un cuerpo normativo sistematizado que permita hacer una transición pausada, pero decidida, hacia nuevos estadios de ejercicio de las funciones estatales y sociales de gestión de los conflictos penalmente relevantes, lo cual incluye obviamente esfuerzos complementarios en los ámbitos concernientes a la investigación criminal, el ministerio público, la defensa pública y el sistema penitenciario;

CONSIDERANDO: Que por todo lo expresado más arriba, resulta de alto interés nacional y conveniente adoptar un nuevo Código Procesal Penal.

**EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA**

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

**CODIGO PROCESAL PENAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

PARTE GENERAL

**LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**TITULO I.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES**

Art. 1. Primacía de la Constitución y los tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.

La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio.

Art. 2. Solución del conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.

Art. 3. Juicio previo. Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo.

El juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, intermediación, celeridad y concentración.

Art. 4. Juez natural. Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales, ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa.

Art. 5. Imparcialidad e independencia. Los jueces sólo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares.

Art. 6. Participación de la ciudadanía. Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia por la forma y condiciones establecidas por este código.

Art. 7. Legalidad del proceso. Nadie puede ser sometido a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado. Este principio rige además en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales.

Art. 8. Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad.

Art. 9. Única persecución. Nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho.

Art. 10. Dignidad de la persona. Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, síquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 11. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.

Art. 12. Igualdad entre las partes. Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.

Art. 13. No autoincriminación. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad ni puede ser valorado en su contra.

Art. 14. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción.

En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.

Art. 15. Estatuto de libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar.

Toda persona que se encuentre privada de su libertad o amenazada de ello, de manera arbitraria o irrazonable tiene derecho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin de que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza, en los términos que lo establece este código.

Art. 16. Límite razonable de la prisión preventiva. La prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada.

Art. 17. Personalidad de la persecución. Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible, con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado, se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal.

Art. 18. Derecho de defensa. Todo imputado tiene el derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección. Si no lo hace, el Estado le designa uno. El imputado puede comunicarse libre y privadamente con su defensor desde el inicio de los actos de procedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho.

El defensor debe estar presente durante la declaración del imputado.

El Estado tiene la obligación de proporcionar un intérprete al imputado para que le asista en todos los actos necesarios para su defensa, si éste muestra incompreensión o poco dominio del idioma español.

Art. 19. Formulación precisa de cargos. Desde que se le señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra.

Art. 20. Derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial, conforme a este código.

Art. 21. Derecho a recurrir. El imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión.

Art. 22. Separación de funciones. Las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público puede realizar actos jurisdiccionales.

La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de investigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público.

Art. 23. Obligación de decidir. Los jueces no pueden abstenerse de fallar so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni demorar indebidamente una decisión.

Art. 24. Motivación de las decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Art. 25. Interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente.

La analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.

La duda favorece al imputado.

Art. 26. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley a los autores del hecho.

Art. 27. Derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este código.

Art. 28. Ejecución de la pena. La ejecución de la pena se realiza bajo control judicial y el condenado puede ejercer siempre todos los derechos y facultades que le reconocen las leyes.

El Estado garantiza condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios y provee los medios que permiten, mediante la aplicación de un sistema progresivo de ejecución penal, la reinserción social del condenado.

TITULO II. ACCIONES QUE NACEN DE LOS HECHOS PUNIBLES

CAPITULO I LA ACCION PENAL

SECCION I. EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

Art. 29. Ejercicio de la acción penal. La acción penal es pública o privada. Cuando es pública, su ejercicio corresponde al ministerio público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima.

Art. 30. Obligatoriedad de la acción pública. El ministerio público de-

be perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.

Art. 31. Acción pública a instancia privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada, el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima.

La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querrela por parte de la víctima.

El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.

Una vez presentada la instancia privada, queda autorizada la persecución de todos los imputados.

Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:

1. Vías de hecho;
2. Golpes y heridas que no causen lesión permanente;
3. Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones;
4. Robo sin violencia y sin armas;
5. Estafa;
6. Abuso de confianza;
7. Trabajo pagado y no realizado;
8. Revelación de secretos;
9. Falsedades en escrituras privadas.

Art. 32. Acción privada. Son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes:

1. Violación de propiedad;
2. Difamación e injuria;
3. Violación de la propiedad industrial;
4. Violación a la ley de cheques.

La acción privada se ejerce con la acusación de la víctima o su representante legal, conforme el procedimiento especial previsto en este código.

Art. 33. Conversión. A solicitud de la víctima, el ministerio público puede autorizar la conversión de la acción pública en privada, si no existe un interés público gravemente comprometido, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de un hecho punible que requiera instancia privada, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 31;
2. Cuando se trate de un hecho punible contra la propiedad realizada sin violencia grave contra las personas o
3. Cuando el ministerio público dispone la aplicación de un criterio de oportunidad.

La conversión es posible antes de la formulación de la acusación, de cualquier otro requerimiento conclusivo o dentro de los diez días siguientes a la aplicación de un criterio de oportunidad.

Si existen varias víctimas, es necesario el consentimiento de todas.

SECCION II. CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

Art. 34. Oportunidad de la acción pública. El ministerio público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, cuando:

1. Se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste;
2. El imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o síquico grave, que torne desproporcionada la aplicación de una pena o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación y
3. La pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o califica-

ciones pendientes, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la acción penal puede ser dispuesta en cualquier momento previo a que se ordene la apertura de juicio.

El ministerio público debe aplicar los criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales en base a razones objetivas, generales y sin discriminación. En los casos que se verifique un daño, el ministerio público debe velar porque sea razonablemente reparado.

Art. 35. Objeción. Dentro de los tres (3) días de haber sido dictada, la víctima y el imputado pueden objetar ante el juez la decisión del ministerio público que aplique o niegue un criterio de oportunidad, cuando no se ajuste a los requisitos legales o constituya una discriminación. Presentada la objeción, el juez convoca a las partes a una audiencia.

Art. 36. Efectos. La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga. No obstante, si el criterio se fundamenta en la aplicación del numeral 1 del artículo 34, sus efectos se extienden a todos los imputados.

La extinción de la acción pública no impide la persecución del hecho por medio de la acción privada, siempre que se ejerza dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de la notificación de la medida.

En el caso del numeral 3 del artículo 34, la acción pública se suspende hasta el pronunciamiento de una sentencia condenatoria que satisfaga las condiciones por las cuales se prescindió de la acción, momento en que la prescindencia de la acción adquiere todos sus efectos.

SECCION III. CONCILIACION

Art. 37. Procedencia. Procede la conciliación para los hechos punibles siguientes:

1. Contravenciones;
2. Infracciones de acción privada;
3. Infracciones de acción pública a instancia privada;
4. Homicidio culposo y

5. Infracciones que admiten el perdón condicional de la pena.

En las infracciones de acción pública, la conciliación procede en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, en cualquier estado de causa.

En los casos de acción pública, el ministerio público debe desestimar la conciliación e iniciar o continuar la acción cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.

Art. 38. Mediación. Para facilitar el acuerdo de las partes, el ministerio público puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas en mediación, o sugerir a los interesados que designen una.

Los mediadores deben guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. Si no se produce la conciliación, las manifestaciones de las partes deben permanecer secretas y carecen de valor probatorio.

En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el ministerio público sólo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales.

Art. 39. Efectos. Si se produce la conciliación, se levanta acta la cual tiene fuerza ejecutoria. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiera conciliado.

SECCION IV. SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO

Art. 40. Suspensión condicional del procedimiento. En los casos en que sea previsible la aplicación de la suspensión condicional de la pena, el ministerio público, de oficio o a petición de parte, puede solicitar al juez la suspensión condicional del procedimiento en cualquier momento previo a que se ordene la apertura de juicio.

El juez puede disponer la suspensión condicional del procedimiento cuando el imputado ha declarado su conformidad con la suspensión, ha admitido los hechos que se le atribuyen y ha reparado los daños causados en ocasión de la infracción, firmado un acuerdo con la víctima o prestado garantía suficiente para cumplir con esa obligación.

Si no se cumplen las condiciones establecidas en este artículo, el juez rechaza la solicitud, pero la admisión de los hechos por parte del imputado carece de valor probatorio y no puede hacerse mención de esta circunstancia en ningún momento posterior.

Art. 41. Reglas. El juez, al decidir sobre la suspensión, fija el plazo de prueba, no menor de un año ni mayor de tres, y establece las reglas a las que queda sujeto el imputado, de entre las siguientes:

1. Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el juez;
2. Abstenerse de visitar ciertos lugares o personas;
3. Abstenerse de viajar al extranjero;
4. Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas;
5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación o formación indicados en la decisión;
6. Prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado;
7. Abstenerse del porte o tenencia de armas y
8. Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera del trabajo, en los casos en que el hecho que se atribuye se relaciona con una violación a las reglas relativas al tránsito de vehículos.

Para fijar las reglas, el juez puede disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. En ningún caso el juez puede imponer medidas más gravosas que las solicitadas por el ministerio público.

La decisión sobre la suspensión del procedimiento es pronunciada en audiencia y en presencia del imputado, con expresa advertencia sobre las reglas de conducta y las consecuencias de su inobservancia.

La decisión de suspensión del procedimiento no es apelable, salvo que el imputado considere que las reglas fijadas son inconstitucionales, resulten manifiestamente excesivas o el juez haya excedido sus facultades.

Art. 42. Revocación. Si en forma considerable e injustificada, el imputado se aparta de las condiciones impuestas, comete una nueva infracción o incumple con los acuerdos sobre la reparación, el juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar en audiencia, mediante decisión motivada, la revocación de la suspensión condicional y la reanudación del procedimiento.

Art. 43. Suspensión del plazo de prueba. El plazo de prueba se suspende mientras el imputado se encuentre privado de su libertad en razón de otro procedimiento.

Cuando, sin ser privado de su libertad, el imputado está sujeto a otro procedimiento, el plazo sigue corriendo, pero se suspende la declaración de extinción de la acción penal hasta que se dicte la resolución que lo sobresee, absuelve o extingue la acción penal a su respecto en el otro procedimiento.

SECCION V. EXTINCION DE LA ACCION PENAL

Art. 44. Causas de extinción. La acción penal se extingue por:

1. Muerte del imputado;
2. Prescripción;
3. Amnistía;
4. Abandono de la acusación, en las infracciones de acción privada;
5. Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública depende de aquella;
6. Aplicación del criterio de oportunidad, en la forma prevista por este código;
7. Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, sin que haya mediado revocación;
8. Muerte de la víctima en los casos de acción privada, salvo que la ya iniciada por ésta sea continuada por sus herederos, conforme lo previsto en este código;
9. Resarcimiento integral del daño particular o social provocado, realizada antes del juicio, en infracciones contra la propiedad sin grave violencia sobre las personas, en infracciones culposas y en las contravenciones, siempre que la víctima o el ministerio público lo admitan, según el caso;
10. Conciliación;
11. Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;
12. Vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo;
13. Pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de infracciones sancionadas sólo con esa clase de penas.

Art. 45. Prescripción. La acción penal prescribe:

1. Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infraccio-

nes sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres.

2. Al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto.

Art. 46. Cómputo de la prescripción. Los plazos de prescripción se rigen por la pena principal prevista en la ley y comienzan a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y para las infracciones continuas o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia.

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe, en forma individual para cada uno de los sujetos que intervinieron en la infracción. En caso de persecución conjunta de varias infracciones, las acciones penales respectivas que de ellas resultan prescriben separadamente en el término señalado para cada una.

Art. 47. Interrupción. La prescripción se interrumpe por:

1. La presentación de la acusación;
2. El pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable;
3. La rebeldía del imputado.

Provocada la interrupción, el plazo comienza a correr desde su inicio.

Art. 48. Suspensión. El cómputo de la prescripción se suspende:

1. Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal la acción penal no puede ser promovida ni proseguida. Esta disposición no rige cuando el hecho no puede perseguirse por falta de la instancia privada;
2. En las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso;
3. En las infracciones que constituyen atentados contra la Constitución y la libertad o relativas al sistema constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta su restablecimiento;
4. Mientras dure en el extranjero el trámite de extradición;
5. Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad, o cuando se haya dictado la suspensión condicional del procedimiento y mientras dure la suspensión.

Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continúa su curso.

Art. 49. Genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. A estos efectos y a los del artículo 56, se considerarán como tales aquellos contenidos en los tratados internacionales, sin importar la calificación jurídica que se les atribuya en las leyes nacionales.

CAPITULO II EJERCICIO Y REGIMEN DE LA ACCION CIVIL

Art. 50. Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable.

La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil.

Art. 51. Intereses colectivos o difusos. La acción civil puede ser ejercida por el ministerio público o por una organización no gubernamental especializada cuando se trate de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos.

El juez o tribunal pueden encomendar a la organización no gubernamental que ha promovido la acción para que ésta vigile el correcto cumplimiento de la reparación, cuando corresponda.

En los casos que, como consecuencia de una acción civil promovida en representación de intereses colectivos o difusos, el juez o tribunal pronuncie condenaciones en daños y perjuicios, el monto de la indemnización es destinado a un fondo general de reparaciones a las víctimas, administrado por el Procurador General de la República, quien vela por su manejo y reglamenta la forma en que estas indemnizaciones satisfacen los intereses de las víctimas.

Art. 52. Delegación. La acción civil puede ser ejercida por una organización no gubernamental, cuyos objetivos se vinculen directamente con los intereses de la víctima, cuando el titular de la acción:

1. Carezca de recursos y le delegue su ejercicio;
2. Sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, sin perjuicio de la intervención que haga el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando corresponda.

Art. 53. Carácter accesorio. La acción civil accesoria a la acción penal sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal.

En caso de suspensión del procedimiento penal, el ejercicio de la acción civil se suspende hasta que la persecución penal continúe, sin perjuicio del derecho de interponer la acción ante los tribunales civiles competentes en caso de extinción de la acción penal por estas causas.

La sentencia absolutoria no impide al juez pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda.

CAPITULO III EXCEPCIONES

Art. 54. Motivos. El ministerio público y las partes pueden oponerse a la prosecución de la acción por cualquiera de los siguientes motivos:

1. Incompetencia;
2. Falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla;
3. Extinción de la acción penal;
4. Cosa juzgada;
5. Litispendencia.

Si concurren dos o más excepciones deben plantearse conjuntamente.

El juez o tribunal competente puede asumir, aun de oficio, la solución de cualquiera de ellas, sin perjuicio de que el ministerio público, de oficio o a solicitud de parte, dicte el archivo durante el procedimiento preparatorio.

Art. 55. Efectos. Cuando se declara la incompetencia, se procede según este código. En los demás casos las actuaciones se archivan, sin perjuicio de que en los casos de falta de acción se pueda proseguir en razón de otros intervinientes.

El rechazo de las excepciones impide que sean presentados de nuevo por los mismos motivos.

LIBRO II LA JURISDICCION PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES

TITULO I. LA JURISDICCION PENAL

CAPTULO I JURISDICCION Y COMPETENCIA

Art. 56. Jurisdicción. La jurisdicción penal es ejercida por los jueces y tribunales que establece este código, y se extiende sobre los dominicanos y sobre los extranjeros para los efectos de conocer y juzgar los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio nacional, o cuyos efectos se produzcan en él, salvo los casos exceptuados en tratados o convenciones internacionales adoptados por los órganos públicos o en los principios reconocidos por el derecho internacional general y americano.

Es competencia de los tribunales nacionales, independientemente del lugar de su comisión, juzgar los casos que constituyan genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, siempre que el imputado resida, aún temporalmente, en el país o los hechos se hayan cometido en perjuicio de nacionales.

Art. 57. Exclusividad y universalidad. Es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal y en la legislación penal especial, y la ejecución de sus sentencias y resoluciones, según lo establece este código.

Las normas de procedimiento establecidas en este código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen.

Los actos infraccionales y procedimientos en los casos de niños, niñas y adolescentes se rigen por su ley especial.

Art. 58. Irrenunciabilidad e indelegabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, excepto en los casos en los cuales el ejercicio de la

acción pública esté sujeto a la presentación de querrela o instancia previa, o la ley permita de modo expreso el desistimiento del ejercicio de la acción pública en cualquier fase del procedimiento.

Art. 59. Competencia. La competencia es improrrogable. No obstante, la competencia territorial de un tribunal de juicio no puede ser objetada ni modificada una vez transcurrido el plazo establecido para la fijación de audiencia y solución de los incidentes previstos en el artículo 305.

Un juez o tribunal competente en razón de la materia no puede declararse incompetente porque el caso corresponde a un juez con competencia para juzgar hechos punibles más leves, cuando dicha incompetencia es invocada o advertida durante el juicio.

El juez o tribunal competente para conocer de una infracción lo es también para resolver todas las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del procedimiento, aunque no correspondan a la jurisdicción penal. La resolución sobre tales incidentes produce efectos limitados al ámbito penal.

Art. 60. Competencia territorial. La competencia territorial de los jueces o tribunales se determina por el lugar donde se haya consumado la infracción.

En caso de tentativa, es competente el juez del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión de la infracción.

En los casos de infracciones continuas o permanentes, el conocimiento corresponde al juez o tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido de la infracción.

En los casos de infracciones cometidas parcialmente dentro del territorio nacional, es competente el juez o tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado.

Art. 61. Competencias subsidiarias. Cuando no se conoce el lugar de la consumación de la infracción, o el de la realización del último acto dirigido a su comisión, o aquél donde haya cesado la continuidad o permanencia, el conocimiento del caso corresponde, según su orden, al juez o tribunal:

1. Del lugar donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación de los autores o cómplices;
2. De la residencia del primer investigado.

Art. 62. Competencia universal. En los casos en que los tribunales na-

cionales conocen de hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional, es competente el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Art. 63. Competencia durante la investigación. En los distritos judiciales con dos o más jueces de la instrucción todos son competentes para resolver los asuntos y solicitudes planteados por las partes, sin perjuicio de las normas prácticas de distribución establecidas por la ley 50-2000 para los distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago, y las normas prácticas de distribución que establezca la Corte de Apelación correspondiente en los demás distritos judiciales y aún en los mencionados distritos. Cuando el ministerio público decide investigar de forma conjunta hechos punibles cometidos en distintos distritos o departamentos judiciales, y es competente el juez o tribunal del lugar correspondiente al hecho más grave. Si los hechos fueren de igual gravedad, es competente el juez donde se desarrolla la investigación principal, salvo cuando el imputado se oponga formalmente porque se dificulta el ejercicio de la defensa o se produce retardo procesal.

Art. 64. Fusión y separación de juicios. Cuando dos o más juicios puedan ser conocidos simultáneamente por el mismo o por distintos jueces o tribunales, el ministerio público o la víctima en la acusación o la defensa pueden solicitar la fusión o separación de los juicios. El juez o tribunal deciden la realización fusionada o separada según convenga a la naturaleza de los casos.

La fusión o separación no procede cuando pueda producir un grave retardo en alguno de los procedimientos.

Art. 65. Excepciones. Los procedimientos por hechos punibles de acción privada siguen las reglas de la conexidad, pero no pueden ser acumulados con procedimientos por hechos punibles de acción pública.

Art. 66. Incompetencia. El juez o tribunal que reconoce su incompetencia en cualquier estado del proceso debe remitir las actuaciones al que considere competente y poner a su disposición a los imputados.

Art. 67. Conflicto de competencia. Si dos jueces o tribunales se declaran contradictoriamente competentes o incompetentes para conocer de un hecho punible, el conflicto es resuelto por:

1. La Corte de Apelación correspondiente, cuando se plantee entre jueces o tribunales de un mismo departamento judicial;

2. La Suprema Corte de Justicia, en los demás casos.

Art. 68. Efectos. La inobservancia de las reglas de competencia sólo produce la ineficacia de los actos cumplidos después de resuelto el conflicto de competencia.

El planteamiento de una cuestión de competencia no suspende el procedimiento preparatorio ni la audiencia preliminar, pero sí las resoluciones conclusivas.

CAPITULO II TRIBUNALES COMPETENTES

Art. 69. Órganos. Son órganos jurisdiccionales en los casos y forma que determinan la Constitución y las leyes:

1. La Suprema Corte de Justicia;
2. Las Cortes de Apelación;
3. Los Jueces de Primera Instancia;
4. Los Jueces de la Instrucción;
5. Los Jueces de Ejecución Penal;
6. Los Jueces de Paz.

Art. 70. Suprema Corte de Justicia. Además de los casos que expresamente le atribuyen la Constitución de la República y las leyes, es competencia de la Suprema Corte de Justicia conocer:

1. Del recurso de casación;
2. Del recurso de revisión;
3. Del procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de Apelación o entre jueces o tribunales de distintos departamentos judiciales;
4. De la recusación de los jueces de Corte de Apelación;
5. De las quejas por demora procesal o denegación de justicia contra las Cortes de Apelación;
6. Del procedimiento de solicitud de extradición.

Art. 71. Cortes de Apelación. Las Cortes de Apelación son competentes para conocer:

1. De los recursos de apelación;

2. De los conflictos de competencia dentro de su jurisdicción, salvo los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;
3. De las recusaciones de los jueces;
4. De las quejas por demora procesal o denegación de justicia;
5. De las causas penales seguidas a los jueces de primera instancia, jueces de la instrucción, jueces de ejecución penal, jueces de jurisdicción original del tribunal de tierras, procuradores fiscales y gobernadores provinciales.

Art. 72. Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia conocen de modo unipersonal del juicio por hechos punibles que conlleven penas pecuniarias o pena privativa de libertad cuyo máximo previsto sea de dos años, o ambas penas a la vez. Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de las acciones de hábeas corpus que les sean planteadas y de los hechos punibles de acción privada.

Para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años, el tribunal se integra con tres jueces de primera instancia.

Art. 73. Jueces de la instrucción. Corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.

Art. 74. Jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal tienen a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena.

Art. 75. Jueces de Paz. Los jueces de paz son competentes para conocer y fallar:

1. Del juicio por contravenciones;
2. Del juicio por infracciones relativas al tránsito de vehículos de motor;
3. Del juicio por infracciones relativas a asuntos municipales;
4. Del control de la investigación en los casos que no admitan demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del juez de la instrucción competente;
5. De las solicitudes de medidas de coerción, en los casos que no admitan

demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del juez de la instrucción, o que resulte conveniente para facilitar la participación de todos los intervinientes;

6. De los demás hechos punibles cuyo conocimiento y fallo le son atribuidos por las leyes especiales.

Art. 76. Jurisdicción de atención permanente. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia dictar las normas prácticas que organicen y aseguren en cada distrito judicial el funcionamiento permanente de oficinas judiciales, habilitadas para conocer a cualquier hora del día o de la noche de aquellos casos, procedimientos y diligencias que no admitan demora.

Art. 77. Despacho judicial. Los jueces o tribunales son asistidos por un despacho judicial integrado por un secretario y el personal auxiliar que sea menester para despachar eficientemente los asuntos administrativos y de organización de la oficina.

Corresponde al secretario, como función propia, organizar la preparación de las audiencias, dictar las resoluciones de mero trámite, ordenar las notificaciones, citaciones, disponer la custodia de objetos secuestrados, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes del estado y marcha de los procedimientos y colaborar en todos los trabajos materiales o administrativos que el juez o el tribunal les indique.

La delegación de funciones jurisdiccionales en el secretario o en uno cualquiera de los auxiliares del despacho judicial hace nula las actuaciones realizadas y compromete la responsabilidad disciplinaria y personal del juez por dicha conducta.

CAPITULO III

MOTIVOS DE INHIBICION Y RECUSACION

Art. 78. Motivos. Los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes en razón de:

1. Ser cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, de alguna de las partes o de su representante legal o convencional;
2. Ser acreedor, deudor o garante, él, su cónyuge o conviviente de alguna de las partes, salvo cuando lo sea de las entidades del sector público, de

las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. En todo caso, la inhabición o recusación sólo son procedentes cuando el crédito o garantía conste en un documento público o privado reconocido o con fecha cierta anterior al inicio del procedimiento de que se trate:

3. Tener personalmente, su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro de los grados expresados en el ordinal 1), procedimiento pendiente con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes, si el procedimiento ha sido civil y dentro de los cinco años si ha sido penal. No constituyen motivo de inhabición ni recusación la demanda o querrela que no sean anteriores al procedimiento penal que se conoce;
4. Tener o conservar interés personal en la causa por tratarse de sus negocios o de las personas mencionadas en el ordinal 1.;
5. Ser contratante, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes;
6. Haber intervenido con anterioridad, a cualquier título, o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa;
7. Haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento particular de que se trata y que conste por escrito o por cualquier medio lícito de registro;
8. Tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualesquiera de las partes e intervinientes;
9. Tener enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos con una cualesquiera de las partes e intervinientes;
10. Cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.

Art. 79. Trámite de la inhabición. El juez que se inhabita debe remitir las actuaciones por resolución fundada a quien deba reemplazarlo. Una vez recibida, éste toma conocimiento de la causa de manera inmediata y dispone el trámite a seguir. Si estima que la inhabición no tiene fundamento, remite los antecedentes a la Corte de Apelación correspondiente. El incidente es resuelto sin más trámites.

Si se trata de un tribunal colegiado, el juez que se inhabita es reemplazado por otro, conforme lo dispone la ley de Organización Judicial.

Art. 80. Forma de la recusación. La recusación de un juez debe indicar los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes.

Durante las audiencias, la recusación se presenta oralmente, bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las presentaciones escritas y se deja constancia de sus motivos en el acta.

Art. 81. Plazo de la recusación. La recusación debe presentarse dentro de los tres días de conocerse los motivos y de obtenerse los elementos de prueba que le sirven de fundamento. Cuando la recusación se plantea respecto de los jueces que deban conocer del juicio, rige el artículo 305.

Art. 82. Trámite de la recusación. Si el juez objeto de la recusación la admite, procede conforme el mismo trámite de la inhibición. En caso contrario, debe remitir el escrito de recusación y su informe a la Corte de Apelación correspondiente o, si el juez integra un tribunal colegiado, solicita el examen de la recusación a los restantes miembros del tribunal. Si se estima necesario, el tribunal o la corte, fija audiencia para recibir las pruebas e informar a las partes. El tribunal competente resuelve el incidente dentro de los tres días, sin que su decisión esté sujeta a recurso alguno.

TITULO II. VICTIMA Y QUERELLANTE

CAPITULO I LA VICTIMA

Art. 83. La víctima. Se considera víctima:

1. Al ofendido directamente por el hecho punible;
2. Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del directamente ofendido;
3. A los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

Art. 84. Derechos de la víctima. Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes:

1. Recibir un trato digno y respetuoso;
2. Ser respetada en su intimidad;
3. Recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares;
4. Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código;
5. Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso;

6. Ser informada de los resultados del procedimiento;
7. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

CAPITULO II QUERELLANTE

Art. 85. Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este código.

En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos, pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho.

En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante.

Las entidades del sector público no pueden ser querellantes. Corresponde al ministerio público la representación de los intereses del Estado en estos casos.

La intervención de la víctima como querellante no altera las facultades atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades.

Art. 86. Actuación y representación. El querellante es representado por un abogado. En los casos en que la víctima puede delegar la acción civil a una organización no gubernamental, también puede delegar la acción penal.

Cuando sean varios querellantes, deben actuar bajo la representación común de no más de dos abogados, los que pueden ser designados de oficio por el juez o tribunal en caso de que no se produzca un acuerdo.

Art. 87. Responsabilidad. El querellante es responsable, de conformidad con la ley, cuando falsee los hechos o la prueba en que fundamenta su querrela o cuando litigue con temeridad.

TITULO III. MINISTERIO PUBLICO Y ORGANOS AUXILIARES

CAPITULO I MINISTERIO PUBLICO

Art. 88. Funciones. El ministerio público dirige la investigación y practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.

Art. 89. Unidad y jerarquía. El ministerio público es único e indivisible. Cada uno de sus funcionarios, cuando actúa en un procedimiento, lo representa íntegramente.

El funcionario encargado de la investigación actúa ante toda jurisdicción competente y continúa haciéndolo durante el juicio sosteniendo la acusación y los recursos cuando corresponda. Si el funcionario del ministerio público no reúne los requisitos para actuar ante la jurisdicción en la que se sustancia un recurso, actúa como asistente del funcionario habilitado ante esa jurisdicción.

El ministerio público a cargo de la dirección jurídica de una investigación principal, puede extender los actos y diligencias a todo el territorio nacional por sí mismo o por instrucciones impartidas al órgano investigativo con la única obligación de dar noticia al ministerio público del distrito o departamento judicial en que tenga que realizar tales actuaciones.

Art. 90. Inhibición y recusación. Los funcionarios del ministerio público pueden inhibirse y pueden ser recusados cuando existan motivos graves que afecten la objetividad en su desempeño.

La recusación es planteada ante el superior inmediato y resuelta sin mayores trámites.

CAPITULO II LOS ORGANOS DE INVESTIGACION Y AUXILIARES

Art. 91. Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del ministerio público, debe investigar los hechos punibles de acción pública, impedir que se lleven a cabo, completen o extiendan en sus efectos, individualizar a los autores y cómplices, reunir los elementos de prue-

ba útiles para determinar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos y ejercer las demás tareas que le asignan su ley orgánica y este código.

Art. 92. Obligaciones. Los funcionarios y agentes de policía tienen las obligaciones de practicar las diligencias orientadas a la individualización física e identificación de los autores y cómplices del hecho punible y llevar a cabo las actuaciones que el ministerio público les ordene, previa autorización judicial, si es necesaria.

Art. 93. Dirección de la investigación. La dirección de la investigación de los hechos punibles por el ministerio público tiene los siguientes alcances:

1. El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y agentes policiales de todas las órdenes relativas a la investigación de los hechos punibles, emitidas por el ministerio público o los jueces. La autoridad administrativa policial no debe revocar o modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento;
2. A requerimiento del ministerio público la asignación obligatoria de funcionarios y agentes policiales para la investigación del hecho punible. Asignados los funcionarios y agentes, la autoridad administrativa policial no puede apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin autorización del ministerio público;
3. La separación de la investigación del funcionario y agente policial asignado, con noticia a la autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o del ministerio público, actúe negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones;
4. La solicitud de sanción de los funcionarios y agentes policiales.

Art. 94. Otros funcionarios. Las reglas del presente capítulo se aplican a los funcionarios y agentes de otras agencias ejecutivas o de gobierno que cumplen tareas auxiliares de investigación con fines judiciales.

TITULO IV. EL IMPUTADO

CAPITULO I NORMAS GENERALES

Art. 95. Derecho. Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a:

1. Ser informado del hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplicables;
2. Recibir durante el arresto un trato digno y, en consecuencia, a que no se le apliquen métodos que entrañen violencia innecesaria o el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza;
3. Conocer la identidad de quien realiza el arresto, la autoridad que lo ordena y bajo cuya guarda permanece;
4. Comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección y con su abogado para notificarles sobre su arresto y a que le proporcionen los medios razonables para ejercer este derecho;
5. Ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de su elección, y a que si no puede pagar los servicios de un defensor particular el Estado le proporcione uno;
6. No autoincriminarse. En consecuencia, puede guardar silencio en todo momento sin que esto le perjudique o sea utilizado en su contra. En ningún caso puede ser sometido a malos tratos o presión para que renuncie a este derecho ni ser sometido a técnicas o métodos que constriñan o alteren su voluntad;
7. Ser presentado ante el juez o el ministerio público sin demora y siempre dentro de los plazos que establece este código;
8. No ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro;
9. Reunirse con su defensor en estricta confidencialidad.

La precedente enumeración de derechos no es limitativa. El ministerio público y los demás funcionarios y agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como los jueces, tienen la obligación de hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, sobre sus derechos, procurar su salvaguarda y efectividad.

El funcionario o agente que vulnere, permita o instigue el atentado o violación de cualesquiera de estos derechos es responsable y sancionado de acuerdo a lo establecido por la ley.

Son nulos los actos realizados en violación de estos derechos y los que sean su consecuencia.

Art. 96. Identificación. Desde el primer acto en que interviene, el imputado es identificado por sus datos personales. Si se abstiene de proporcionar estos datos o lo hace falsamente, se le identifica por testigos u otros medios útiles, aún contra su voluntad, pero sin violentar sus derechos. La duda sobre los datos obtenidos no altera el curso del procedimiento y los errores pueden ser corregidos en cualquier oportunidad.

Art. 97. Domicilio. En su primera intervención, el imputado declara su domicilio real y fija el domicilio procesal. Posteriormente puede modificarlos.

Art. 98. Incapacidad. El trastorno o alteración mental temporal del imputado, que excluye su capacidad de entender o de asentir en los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, provoca la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad, sin perjuicio de los procedimientos especiales que establecen este código y las leyes. Los actos realizados o autorizados por el incapaz son nulos.

La suspensión del procedimiento no impide la investigación del hecho, ni su prosecución con respecto a otros imputados.

Art. 99. Examen corporal. El juez o tribunal competente puede ordenar el examen médico del imputado para la constatación de circunstancias relevantes para la investigación.

Son admisibles, siempre con autorización judicial, extracciones de sangre y fluidos en general, además de otros estudios corporales, que deben realizarse preservando la salud del imputado.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que exista peligro en la demora, el ministerio público y sus funcionarios auxiliares tienen la facultad de realizar los peritajes y exámenes, sin atender contra la dignidad del imputado y con la obligación de informar sin demora innecesaria al juez o tribunal a cargo del procedimiento.

Art. 100. Rebeldía. Cuando el imputado no comparece a una citación sin justificación, se fuga del establecimiento donde está detenido o se ausenta de su

domicilio real con el propósito de sustraerse al procedimiento, el ministerio público puede solicitar al juez o tribunal que lo declare en rebeldía y que dicte orden de arresto.

Declarada la rebeldía, el juez o tribunal, dispone:

1. El impedimento de salida del país;
2. La publicación de sus datos personales en los medios de comunicación para su búsqueda y arresto, siempre que lo juzgue conveniente;
3. Las medidas de carácter civil que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho atribuido, siempre que se haya ejercido la acción civil;
4. La ejecución de la fianza que haya sido prestada;
5. La conservación de las actuaciones y de los elementos de prueba;
6. La designación de un defensor para el imputado en rebeldía, si éste no ha sido designado, para que lo represente y lo asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado.

Art. 101. Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspende el procedimiento preparatorio y puede presentarse la acusación, pero no se celebrará la audiencia preliminar. Cuando la rebeldía es declarada durante el juicio, éste se suspende con respecto al rebelde y continúa para los demás imputados presentes.

Cuando el imputado en rebeldía comparece voluntariamente o es puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extingue el estado de rebeldía y el procedimiento continúa, quedando sin efecto la orden de arresto. El juez puede dictar la medida de coerción que corresponda.

CAPITULO II DECLARACION DEL IMPUTADO

Art. 102. Libertad de declarar. El imputado tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo o suspender su declaración, en cualquier momento del procedimiento.

Art. 103. Oportunidad o autoridad competente. El imputado no puede ser citado a los fines exclusivos de ser interrogado ni ser obligado a declarar, salvo que voluntaria y libremente decida hacerlo. En este último caso, durante el procedimiento preparatorio, el imputado puede declarar ante el ministerio

público que tenga a su cargo la investigación. Los funcionarios o agentes policiales sólo tienen derecho a requerir del imputado los datos correspondientes a su identidad, cuando éste no se encuentre debidamente individualizado. Si manifiesta su deseo de declarar, se le hace saber de inmediato al ministerio público correspondiente.

Durante las audiencias y el juicio, el juez o el tribunal deben permitir al imputado declarar cuantas veces manifieste interés en hacerlo, siempre que su intervención sea pertinente y no aparezca como un medio dilatorio del procedimiento y sin que esta facultad dé lugar a indefensión material.

Art. 104. Defensor. En todos los casos, la declaración del imputado sólo es válida si la hace en presencia y con la asistencia de su defensor.

Art. 105. Desarrollo. Antes de comenzar su declaración, el imputado debe ser advertido de su derecho a no autoincriminarse y de que el ejercicio de ese derecho no puede perjudicarlo. Asimismo, se le instruye en el sentido de que su declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones que se le formulen, y a solicitar la práctica de las diligencias que considere oportunas.

Acto seguido, se le formula la indicación del hecho punible que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes, salvo las que se encuentren bajo reserva y las disposiciones legales que se juzguen aplicables.

El imputado inicia su declaración consignando su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión u ocupación, nacionalidad, cédula de identidad y electoral, fecha y lugar de nacimiento, domicilio real y procesal. Asimismo, si se le solicita, el imputado puede ofrecer un informe sobre la identidad y datos generales de familiares cercanos con quienes mantenga contacto permanente, si tiene. En las declaraciones posteriores basta con la confirmación de los datos ya proporcionados.

El imputado declara todo lo que considere conveniente sobre los hechos que se le atribuyen e indica los medios de prueba cuya práctica considera oportuna. Las partes pueden dirigir al imputado las preguntas que estimen convenientes, con la autorización de quien presida el acto. El imputado tiene derecho a consultar a su defensor en cualquier momento del interrogatorio.

Art. 106. Forma del interrogatorio. Las preguntas deben ser claras y precisas; nunca capciosas ni sugestivas. Las respuestas no son exigidas peren-

toriamente. El imputado no puede ser interrumpido mientras responde una pregunta u ofrece una declaración.

El interrogatorio se suspende a solicitud del imputado, de su defensor o del ministerio público si el imputado demuestra signos de fatiga o cansancio.

Art. 107. Métodos prohibidos. En ningún caso se puede requerir del imputado ratificación solemne de su exposición o promesa de decir la verdad. No puede ser expuesto a métodos de coacción, amenazas o promesas con el fin de llevarlo a declarar contra su voluntad.

También están prohibidas todas las medidas que menoscaben su libertad de decisión, su memoria o capacidad de comprensión y dirección de sus actos; en especial, las violencias corporales o psicológicas, la tortura, el engaño, la administración de sicofármacos o cualquier sustancia que disminuya su capacidad de comprensión o altere su percepción de la realidad, como los sueros de la verdad, detectores de mentiras y la hipnosis. Se prohíbe inducir al imputado a hacer cualquier tipo de declaración mediante el chantaje y la amenaza de sufrir las consecuencias de la declaración de otro imputado.

El imputado no puede ser obligado a confrontarse con ningún otro declarante o testigo.

Art. 108. Acta. Las declaraciones del imputado durante el procedimiento preparatorio se hacen constar en acta escrita u otra forma que reproduzca del modo más fiel el contenido de sus manifestaciones.

Si el imputado se abstiene de declarar, así se hace constar. El acta es leída en voz alta, lo que se hace constar, sin perjuicio de que también la lea el imputado o su defensor.

Cuando el declarante quiera añadir o enmendar algo, sus manifestaciones son consignadas sin alterar lo escrito. Esta finaliza con la lectura y firma del acta por todas las partes o con las medidas dispuestas para garantizar la individualización, fidelidad e inalterabilidad de los otros medios de registros. Si rehúsa o no puede suscribirla, se consigna el motivo.

Art. 109. Declaraciones separadas. Las declaraciones son tomadas por separado, sin que haya comunicación previa entre los declarantes.

Art. 110. Exclusión. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impiden que se la utilice en su contra, aun cuando se haya infringido alguna regla con su consentimiento.

TITULO V. LA DEFENSA TECNICA

Art. 111. Elección. El imputado tiene el derecho irrenunciable a hacerse defender desde el primer acto del procedimiento por un abogado de su elección, y, a que si no lo hace, se le designe de oficio un defensor público. El imputado puede asumir su propia defensa, conjuntamente con aquél. En este caso, el juez vela para que esto no perjudique la eficacia de la defensa técnica. La designación del defensor no debe menoscabar el derecho del imputado a formular directamente solicitudes e informaciones. La inobservancia de esta norma produce la nulidad del procedimiento.

Art. 112. Capacidad. Sólo pueden ser defensores los abogados matriculados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y debidamente juramentados ante la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las reglas especiales de la representación en los casos de cooperación judicial internacional.

Art. 113. Designación. La designación del defensor por parte del imputado está exenta de formalidades. La simple presencia del defensor en los procedimientos vale como designación y obliga al ministerio público, al juez o tribunal, a los funcionarios o agentes de la policía y de otras agencias ejecutivas o de gobierno a reconocerla. Luego de conocida la designación se hace constar en acta.

Cuando el imputado esté privado de su libertad, cualquier persona de su confianza puede proponer, por escrito u oralmente, ante la autoridad competente, la designación de un defensor, lo que debe ser comunicado al imputado de inmediato.

Art. 114. Número de defensores. El imputado puede ser defendido simultáneamente por un máximo de tres abogados, sin perjuicio de los asistentes y asesores correspondientes. Cuando intervienen dos o más defensores, la notificación a uno de ellos vale para los demás.

Es admisible la defensa de varios imputados por un defensor común siempre y cuando no existan intereses contrapuestos. En caso de existir esta incompatibilidad, el juez o tribunal provee de oficio las sustituciones de lugar.

Art. 115. Sustitución. La designación de un defensor, público o particular, no impide que el imputado elija otro de su confianza con posterioridad.

El defensor puede, con autorización del imputado, designar un sustituto para que intervenga cuando tenga algún impedimento. En caso de urgencia, se permite la intervención del sustituto aún a falta de la autorización del imputado, pero se solicita su opinión en la primera oportunidad.

Negado el consentimiento, el juez nombra un defensor público.

Art. 116. Renuncia y abandono. El defensor particular puede renunciar a la defensa. En este caso, el juez o tribunal emite una resolución fijando un plazo para que el imputado nombre un nuevo defensor.

Transcurrido el plazo y a falta de dicho nombramiento, el juez o tribunal nombra de oficio un defensor público. El renunciante no puede abandonar la defensa hasta que intervenga su reemplazo. El defensor no puede renunciar durante las audiencias.

Si el abandono ocurre poco antes o durante el juicio, se puede aplazar su comienzo o suspenderse por un plazo no mayor de diez días, si lo solicita el imputado o su defensor.

Art. 117. Sanciones. El abandono de la defensa se sanciona con el pago de las costas producidas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias establecidas en la ley y en el Código de Ética del Colegio de Abogados.

TITULO VI. PARTES CIVILES

CAPITULO I EL ACTOR CIVIL

Art. 118. Constitución en parte. Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada.

El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar además por mandatario con poder especial.

Art. 119. Requisitos. El escrito de constitución en actor civil debe contener:

1. El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso su representante. Si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el domicilio social y el nombre de quienes la representan legalmente;

2. El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado;
3. La indicación del proceso a que se refiere;
4. Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el monto.

Art. 120. Ejercicio. Si en el proceso existen varios imputados y civilmente responsables, la pretensión resarcitoria puede dirigirse indistintamente contra uno o varios de ellos. Cuando el actor civil no mencione a ningún imputado en particular, se entiende que se dirige contra todos solidariamente.

El ejercicio de la acción civil resarcitoria procede, aún cuando el imputado no esté individualizado.

Art. 121. Oportunidad. El escrito de constitución en actor civil debe presentarse ante el ministerio público durante el procedimiento preparatorio, antes de que se formule la acusación del ministerio público o de la víctima, o conjuntamente con ésta.

Art. 122. Procedimiento. Una vez que recibe el escrito de constitución, el ministerio público, lo notifica al imputado, al tercero demandado civil, a los defensores y, en su caso, al querellante.

Cuando el imputado no se ha individualizado, la notificación es efectuada en cuanto sea identificado.

Cualquier interviniente puede oponerse a la constitución del actor civil, invocando las excepciones que correspondan. En tal caso, la oposición se notifica al actor y la resolución se reserva para la audiencia preliminar, sin perjuicio de que se admita su intervención provisional hasta que el juez decida. Una vez admitida la constitución en actor civil, ésta no puede ser discutida nuevamente, a no ser que la oposición se fundamente en motivos distintos o elementos nuevos.

La inadmisibilidad de la instancia no impide el ejercicio de la acción civil por vía principal ante la jurisdicción civil.

Art. 123. Facultades. El actor civil interviene en el procedimiento en razón de su interés civil. En la medida que participe en su calidad exclusiva de actor civil, limita su intervención a acreditar la existencia del hecho, a determinar sus autores y cómplices, la imputación de ese hecho a quien considere respon-

sable, el vínculo con el tercero civilmente demandado, la existencia, extensión y cuantificación de los daños y perjuicios cuya reparación pretende y la relación de causalidad entre el hecho y el daño.

El actor civil puede recurrir las resoluciones únicamente en lo concerniente a su acción. La intervención no le exime de la obligación de declarar como testigo.

Art. 124. Desistimiento. El actor civil puede desistir expresamente de su acción, en cualquier estado del procedimiento. La acción se considera tácitamente desistida, cuando el actor civil no concreta su pretensión oportunamente o cuando, sin justa causa, después de ser debidamente citado:

1. No comparece a prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica se requiere su presencia;
2. No comparece a la audiencia preliminar;
3. No comparece al juicio, se retire de la audiencia o no presente sus conclusiones.

En los casos de incomparecencia, de ser posible, la justa causa debe acreditarse antes del inicio de la audiencia o del juicio; en caso contrario, dentro de las cuarentiocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella.

Art. 125. Efectos del desistimiento. El desistimiento tácito no perjudica el ejercicio posterior de la acción civil por vía principal por ante los tribunales civiles, según las reglas del procedimiento civil.

Declarado el desistimiento, procede la condena del actor civil al pago de las costas que haya provocado su acción.

CAPITULO II EL TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO

Art. 126. Tercero civilmente demandado. Es tercero civilmente demandado la persona que, por previsión legal o relación contractual, deba responder por el daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de la cual se plantee una acción civil resarcitoria.

Art. 127. Intervención. El tercero que pueda ser civilmente demandado tiene derecho a solicitar su intervención en el procedimiento, cuando se ejerza la acción civil. Su intervención es notificada a las partes.

Art. 128. Incomparecencia. La incomparecencia del tercero civilmente demandado no suspende el procedimiento. En este caso, se continúa como si él estuviere presente.

Art. 129. Oposición. El actor civil y el imputado, según el caso, pueden oponerse a la intervención voluntaria del tercero civilmente demandado.

Cuando el actor civil se opone a la intervención voluntaria del tercero civilmente demandado, no puede intentar posteriormente la acción contra aquel.

Son aplicables las reglas sobre oposición a la participación del actor civil.

Art. 130. Exclusión. La exclusión del actor civil o el desistimiento de su acción hace cesar la intervención del tercero civilmente demandado, sin perjuicio de que las costas sean declaradas en su provecho.

Art. 131. Facultades. Desde su intervención en el procedimiento, el tercero civilmente demandado goza de las mismas facultades concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente a sus intereses civiles. La intervención del tercero civilmente demandado no lo exime de la obligación de declarar como testigo.

El tercero civilmente demandado debe actuar con el patrocinio de un abogado y puede recurrir contra la sentencia que declare su responsabilidad.

TITULO VII. AUXILIARES DE LAS PARTES

Art. 132. Asistentes. Las partes pueden designar asistentes para que colaboren en su tarea. En ese caso asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia.

Los asistentes solo cumplen con tareas accesorias, sin que les esté permitido sustituir a quienes ellos auditan. Se les permite asistir a las audiencias, sin intervenir directamente en ellas.

Esta norma es aplicable a los estudiantes de ciencias jurídicas que realizan su práctica forense.

Art. 133. Consultores técnicos. Si, por la particularidad y complejidad del caso, el ministerio público o alguno de los intervinientes considera necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propone al

juez o tribunal, el cual decide sobre su autorización, conforme las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuman tal carácter.

El consultor técnico puede presenciar las operaciones de peritaje, acotar observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se deja constancia de sus observaciones. Asimismo, puede acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, auxiliarla en los actos propios de su función o interrogar, directamente, a peritos, traductores o intérpretes, siempre bajo la dirección de la parte a la que asiste.

TITULO VIII. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Art. 134. Lealtad procesal. Las partes deben litigar con lealtad, absteniéndose de proponer medidas dilatorias, meramente formales y de abusar de las facultades que este código les reconoce.

Art. 135. Régimen disciplinario. Cuando se comprueba que las partes o sus asesores actúan con mala fe, realizan gestiones o asumen actitudes dilatorias o litigan con temeridad, el juez o tribunal puede sancionar la falta con multa de hasta quince días del salario base del juez de primera instancia, sin perjuicio de lo previsto para el abandono de la defensa.

Cuando el juez o tribunal estima que existe la posibilidad de imponer esta sanción, advierte a la parte en falta a los fines de que ofrezca sus explicaciones y presente prueba de descargo, la cual recibe en el momento. Cuando el hecho se verifique en una audiencia oral, el procedimiento se realiza en ella.

Quien resulte sancionado es requerido para que haga efectivo el importe de la multa en un plazo de tres días. En caso de que la falta sea cometida por un abogado, el juez o tribunal expide comunicación al Colegio de Abogados, planteando la queja a los fines de que se examine su actuación a la luz de las disposiciones que norman disciplinariamente el ejercicio de la abogacía.

LIBRO III ACTIVIDAD PROCESAL

TITULO UNICO. ACTOS PROCESALES

CAPITULO I ACTOS Y RESOLUCIONES

Art. 136. Idioma. Todos los actos del proceso se realizan en español.

Todo documento redactado en idioma extranjero, para su presentación en juicio, debe ser traducido al español por intérprete judicial. Durante el procedimiento preparatorio, el imputado siempre puede solicitar la traducción de cualquier documento o registro que se le presente en un idioma diferente al suyo.

Art. 137. Tiempo. Los actos procesales se cumplen cualquier día y en cualquier hora, salvo las excepciones previstas en este código.

Art. 138. Registro. Los actos procesales se pueden registrar por escrito, imágenes o sonidos, y de cualquier otra forma que garantice su fidelidad.

Art. 139. Actas y resoluciones. Toda diligencia que se asiente en forma escrita contiene indicación del lugar, fecha y hora de su redacción, las personas que intervienen y una relación sucinta de los actos realizados. El acta es suscrita por los funcionarios y demás intervinientes. Si alguno no puede o no quiere firmar, se deja constancia de ese hecho.

La omisión de estas formalidades acarrea nulidad sólo cuando ellas no puedan suplirse con certeza, sobre la base de su contenido o de otros elementos de prueba.

Las resoluciones contienen además indicación del objeto a decidir, las peticiones de las partes, la decisión con sus motivaciones y la firma de los jueces, de los funcionarios del ministerio público o del secretario, según el caso.

Art. 140. Grabaciones. El registro de imágenes o sonidos se puede emplear para documentar total o parcialmente actos de prueba o audiencias. Queda prohibida, sin embargo, toda forma de edición de las imágenes o sonidos registrados.

La autenticidad e inalterabilidad de estos registros se asegura con los medios

técnicos idóneos. Los originales se deben preservar en condiciones que garanticen su inviolabilidad hasta el juicio, sin perjuicio de la obtención de copias para utilizarse a otros fines del proceso.

Estos registros pueden ser incorporados al debate en los mismos casos previstos para la lectura de los documentos escritos.

En lo aplicable, rigen las formalidades previstas en el artículo anterior.

Art. 141. Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el juez o tribunal o el ministerio público, según el caso, pueden requerir el auxilio de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordenen.

Art. 142. Notificaciones. Las resoluciones y los actos que requieren una intervención de las partes o terceros se notifican de conformidad con las normas prácticas dictadas por la Suprema Corte de Justicia.

Estas deben asegurar que las notificaciones se hagan a la brevedad y ajustadas a los siguientes principios:

1. Que transmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la actividad requerida y las condiciones o plazos para su cumplimiento;
2. Que contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes;
3. Que adviertan suficientemente al imputado o a la víctima, según el caso, cuando el ejercicio de un derecho esté sujeto a plazo o condición.

CAPITULO II PLAZOS

Art. 143. Principios generales. Los actos procesales deben ser cumplidos en los plazos establecidos por este código. Los plazos son perentorios e improrrogables y vencen a las doce de la noche del último día señalado, salvo que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración.

Los plazos determinados por horas comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.

Los plazos determinados por días comienzan a correr al día siguiente de practicada su notificación. A estos efectos, sólo se computan los días hábiles,

salvo disposición contraria de la ley o que se refiera a medidas de coerción, caso en el que se computan días corridos.

Los plazos comunes comienzan a correr a partir de la última notificación que se haga a los interesados.

Art. 144. Renuncia o abreviación. Las partes a cuyo favor se ha establecido un plazo pueden renunciar a él o abreviarlo mediante expresa manifestación de voluntad. Cuando el plazo es común, se reputa que existe renuncia o abreviación, mediante la expresa manifestación de voluntad de todas las partes.

Art. 145. Plazos fijados judicialmente. Cuando la ley permite la fijación de un plazo judicial, los jueces lo fijan conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se debe cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes.

Art. 146. Plazos para decidir. Las decisiones judiciales que sucedan a una audiencia oral son pronunciadas inmediatamente después de concluida la audiencia, sin interrupción alguna, salvo cuando este código disponga un plazo distinto.

En los demás casos, el juez o el ministerio público, según corresponda, resuelve dentro de los tres días de la presentación o planteamiento de la solicitud, siempre que este código no disponga otro plazo.

Art. 147. Prórroga del plazo. Las partes pueden solicitar la reposición total o parcial del plazo, cuando por defecto de la notificación, por razones de fuerza mayor o por caso fortuito, no hayan podido observarlo.

CAPTULO III CONTROL DE LA DURACION DEL PROCESO

Art. 148. Duración máxima. La duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.

La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso, el cual se reanuda cuando éste comparezca o sea arrestado.

La duración del proceso no puede superar el plazo previsto para la prescrip-

ción de la acción penal, cuando este es inferior al máximo establecido en este artículo.

Art. 149. Efectos. Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este código.

Art. 150. Plazo para concluir la investigación. El ministerio público debe concluir el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento respectivo o disponer el archivo en un plazo máximo de tres meses si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de seis meses si ha sido ordenada otra de las medidas de coerción previstas en el artículo 226. Estos plazos se aplican aún cuando las medidas de coerción hayan sido revocadas.

Si no ha transcurrido el plazo máximo del procedimiento preparatorio y el ministerio público justifica la necesidad de una prórroga para presentar la acusación, puede solicitarla por única vez al juez, quien resuelve, después de dar al imputado la oportunidad de manifestarse al respecto. La prórroga no puede superar los dos meses, sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso.

Art. 151. Perentoriedad. Vencido el plazo de la investigación, si el ministerio público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de diez días. Si ninguno de ellos presentan requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal.

Art. 152. Queja por retardo de justicia. Si los jueces no dictan la resolución correspondiente en los plazos establecidos en este código, el interesado puede requerir su pronto despacho, y si dentro de las veinticuatro horas no lo obtiene, puede presentar queja por retardo de justicia directamente ante el tribunal que debe decidirla.

El tribunal que conoce de la queja resuelve directamente lo solicitado o emplaza a los jueces para que lo hagan dentro de las veinticuatro horas de haber sido devueltas las actuaciones. Si es necesario para resolver, el tribunal puede ordenar que se le envíen las actuaciones. Si los jueces insisten en no decidir, son reemplazados inmediatamente, sin perjuicio de su responsabilidad personal.

Art. 153. Demora. Cuando se ha planteado la revisión o un recurso contra una decisión que impone la prisión preventiva o el arresto domiciliario y el juez o la Corte no resuelve dentro de los plazos establecidos en este código, el imputado puede requerir su pronto despacho, y si dentro de las veinticuatro horas no lo obtiene, se entiende que se ha concedido la libertad de pleno derecho.

En este caso, la prisión preventiva o el arresto domiciliario sólo puede ser ordenado nuevamente por el tribunal inmediatamente superior, a petición del ministerio público o del querellante, si concurren nuevas circunstancias.

Art. 154. Demora de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por este código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, en cuyo caso se entiende que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admite la solución propuesta por el imputado.

Lo dispuesto en este artículo rige, sin perjuicio de la responsabilidad personal generada a cargo de los magistrados por mal desempeño de funciones.

El Estado debe indemnizar al querellante cuando ha perdido su recurso por este motivo, conforme lo previsto en este código.

CAPTULO IV COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL

Art. 155. Cooperación. Los jueces y el ministerio público deben brindar la máxima cooperación a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que sean formuladas conforme a lo previsto en los tratados internacionales y en este código.

En los casos de urgencia, el juez o el ministerio público, según corresponda, pueden dirigir, por cualquier medio, requerimientos de cooperación a cualquier autoridad judicial o administrativa, en cuyo caso informa posteriormente a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

Art. 156. Gastos extraordinarios. Cuando la cooperación demande gastos extraordinarios, se puede solicitar a la autoridad requirente el anticipo o el pago de los gastos.

Art. 157. Negación de la cooperación. La cooperación es negada por

resolución motivada cuando la solicitud vulnera garantías y derechos de las partes.

La cooperación puede ser suspendida por resolución motivada cuando su ejecución inmediata perjudique el curso de una investigación o de un juicio que se desarrolle en la jurisdicción requerida.

Art. 158. Presencia. Cuando las características de la cooperación solicitada hagan necesarias la presencia de funcionarios de la autoridad requirente, se puede autorizar la participación de ellas en los actos requeridos, siempre bajo la coordinación del ministerio público o del juez, según corresponda.

Art. 159. Investigaciones conjuntas. El ministerio público puede coordinar la investigación con las autoridades encargadas del Estado interesado, pudiendo formarse a tales efectos equipos de investigación, dirigidos por el ministerio público y sometidos al control de los jueces.

Art. 160. Extradición. La extradición se rige por la Constitución, las normas de los tratados, convenios y acuerdos internacionales adoptados por los poderes públicos y su ley especial en aquello que no se oponga a este código.

Art. 161. Extradición activa. Cuando se tiene noticias de que un imputado respecto del cual se ha presentado la acusación y se ha dictado una medida de coerción privativa de libertad, se halla en país extranjero, el juez o tribunal competente tiene la facultad de ordenar el trámite de su extradición, a petición del ministerio público o de las partes.

La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores certifica y hace las traducciones cuando corresponda, y presenta la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de dos meses.

Art. 162. Extradición pasiva. La solicitud de extradición de una persona que se halle en territorio de República Dominicana debe ser remitida por el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia para que ésta decida lo que corresponda.

Art. 163. Medidas de coerción. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia puede ordenar la aplicación de medidas de coerción en relación a la persona solicitada en extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden, se determine con claridad la naturaleza del he-

cho punible y se trate de un caso en el cual proceda la prisión preventiva según este código, en concordancia con el derecho internacional vigente.

En caso de urgencia, se puede ordenar una medida de coerción, incluyendo la prisión preventiva, por un plazo máximo de un mes, aún cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición. Presentada la documentación correspondiente, la medida puede extenderse hasta dos meses, salvo cuando los tratados establezcan un plazo mayor.

El pedido de prisión preventiva se puede hacer por cualquier vía fehaciente y es comunicado inmediatamente a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

Art. 164. Procedimiento. Recibida la solicitud de extradición por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, se convoca a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación dirigida al solicitado. A esta audiencia concurren el imputado, su defensor, el ministerio público y el representante del Estado requirente, quienes exponen sus alegatos. Concluida la audiencia, la Suprema Corte de Justicia decide en un plazo de quince días.

Art. 165. Abogado. Los Estados extranjeros pueden designar un abogado para que defienda sus intereses en este procedimiento.

LIBRO IV MEDIOS DE PRUEBA

TITULO I. NORMAS GENERALES

Art. 166. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo pueden ser valorados si han sido obtenidos por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este código.

Art. 167. Exclusión probatoria. No puede ser apreciada para fundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, la prueba recogida con inobservancia de las formas y condiciones que impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la Constitución de la República, los tratados internacionales y este código. Tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado.

Asimismo, no pueden ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que impidan el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del ministerio público, salvo que el defecto haya sido convalidado.

Art. 168. Renovación, rectificación o cumplimiento. Cuando no se violen derechos o garantías del imputado, los actos defectuosos pueden ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado.

No se puede retrotraer el proceso a etapas anteriores, bajo pretexto del saneamiento, salvo los casos expresamente señalados por este código.

Art. 169. Convalidación. Los defectos formales que afectan al ministerio público o a la víctima son convalidados:

1. Cuando éstos no solicitan su saneamiento mientras se realiza el acto, o dentro de las veinticuatro horas de practicado, cuando quien lo solicita no haya estado presente. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado debe reclamarlo dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo;
2. Cuando éstos aceptan, expresa o tácitamente, los efectos del acto.

Art. 170. Libertad probatoria. Los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa.

Art. 171. Admisibilidad. La admisibilidad de la prueba está sujeta a su referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado y a su utilidad para descubrir la verdad. El juez o tribunal puede restringir los medios de prueba ofrecidos que resulten manifiestamente sobreabundantes. También pueden prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.

Art. 172. Valoración. El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba.

Las actas que tienen por objeto la comprobación de contravenciones hacen fe de su contenido hasta prueba en contrario.

TITULO II. COMPROBACION INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES

Art. 173. Inspección del lugar del hecho. Los funcionarios del ministerio público o de la policía deben custodiar el lugar del hecho y comprobar, mediante la inspección del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean el resultado del hecho punible.

El funcionario a cargo de la inspección levanta acta en la cual describe detalladamente el estado de los lugares y de las cosas, recoge y conserva los elementos probatorios útiles, dejando constancia de ello en el acta.

El acta debe ser firmada por el funcionario o agente responsable y, de ser posible, por uno o más testigos. Bajo esas formalidades puede ser incorporada al juicio por su lectura, sin perjuicio de que el funcionario y el testigo instrumental puedan ser citados para prestar su testimonio.

Art. 174. Levantamiento e identificación de cadáveres. En caso de muerte, cuando existan indicios de la comisión de un hecho punible, antes de procederse al traslado e inhumación del occiso, los funcionarios y agentes de la policía realizan la inspección corporal preliminar, la descripción de la situación o posición del cuerpo y de la naturaleza de las lesiones o heridas, además de las diligencias ordenadas por el ministerio público.

La identificación del occiso puede realizarse por cualquier medio posible.

En caso de urgencia y en ausencia del ministerio público, la policía, luego de realizadas las operaciones correspondientes, dispone el traslado del cadáver al laboratorio médico forense para practicar la autopsia, efectuar su identificación y entregarlo a sus familiares.

Art. 175. Registros. Los funcionarios del ministerio público o la policía pueden realizar registros de personas, lugares o cosas, cuando razonablemente existan motivos que permitan suponer la existencia de elementos de prueba útiles para la investigación o el ocultamiento del imputado, de conformidad a las normas y previsiones de este código.

Art. 176. Registro de personas. Antes de proceder al registro personal, el funcionario actuante debe advertir a la persona sobre la sospecha de que entre sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con el hecho punible, invitándole a exhibirlo. Los registros de personas se practican separadamente,

respetando el pudor y dignidad de las personas, y en su caso, por una de su mismo sexo.

El registro de personas se hace constar en acta levantada al efecto, que debe incluir el cumplimiento de la advertencia previa sobre el objeto buscado, la firma del registrado, y si se rehúsa a hacerlo, se hace mención de esta circunstancia. En estas condiciones, el acta puede ser incorporada al juicio por su lectura.

Estas normas se aplican al registro de vehículos.

Art. 177. Registros colectivos. En los casos que excepcional y preventivamente sea necesario realizar el registro colectivo de personas o vehículos, el funcionario de la policía debe informar previamente al ministerio público.

Si el registro colectivo se realiza a propósito de una investigación ya iniciada, debe hacerse bajo la dirección del ministerio público.

Art. 178. Facultades coercitivas. El funcionario del ministerio público o la policía, que realice el registro puede disponer, cuando sea estrictamente necesario y por el tiempo que dure la diligencia, que no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca inmediatamente cualquier otra.

Aquellas personas que desatiendan esta disposición incurrir en la misma responsabilidad que los testigos reticentes, sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública, conforme lo previsto en este código.

Las restricciones de circulación y ambulatorias no pueden prolongarse más allá de seis horas, y si fuere necesario superar ese límite, se requiere autorización motivada de juez competente.

Si el ministerio público o el funcionario a cargo de la diligencia lo estima útil, puede disponer el secuestro de objetos y el arresto de los sospechosos de ser autores o cómplices, bajo las formalidades y restricciones que rigen para las medidas de coerción.

Art. 179. Horario. Los registros en lugares cerrados o cercados, aunque sean de acceso público, sólo pueden ser practicados entre las seis horas de la mañana y las seis horas de la tarde. Sin embargo, excepcionalmente pueden realizarse registros en horas de la noche:

1. En los lugares de acceso público, abiertos durante la noche;
2. Cuando el juez lo autorice de modo expreso mediante resolución motivada.

Art. 180. Registro de moradas y lugares privados. El registro de un recinto privado, destinado a la habitación o a otros fines particulares, sólo pue-

de realizarse, a solicitud del ministerio público, por orden de allanamiento expedida mediante resolución judicial motivada. En los casos de urgencia, y en ausencia del ministerio público, la policía puede solicitarla directamente.

Art. 181. Excepciones. El registro sin autorización judicial procede cuando es necesario para evitar la comisión de una infracción, en respuesta a un pedido de auxilio o cuando se persigue a un sospechoso que se introdujo a una vivienda ajena.

Art. 182. Contenido de la orden. La orden de allanamiento debe contener:

1. Indicación del juez o tribunal que ordena el registro;
2. La indicación de la morada o lugares a ser registrados;
3. La autoridad designada para el registro;
4. El motivo preciso del registro, con indicación exacta de los objetos o personas que se espera encontrar y las diligencias a practicar;
5. La fecha y lugar de expedición y la firma del juez.

El mandamiento u orden de allanamiento tiene validez para su ejecución dentro de un plazo de quince días, transcurrido el cual queda sin efecto, salvo cuando se expide para ser ejecutado en un tiempo determinado, en cuyo caso así se hace constar.

Art. 183. Procedimiento y formalidades. La orden de allanamiento es notificada a quien habite o se encuentre a cargo del lugar donde se efectúa, mediante la exhibición y entrega de una copia. En ausencia de éste, se notifica a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. El notificado debe ser invitado a presenciar el registro. Si no se encuentra persona alguna en el lugar, o si alguien que habita la casa se resiste al ingreso, se hace uso de la fuerza pública para ingresar.

Una vez practicado el registro se consigna en un acta su resultado, cuidando que el lugar quede cerrado y resguardado de otras personas. Bajo esas formalidades puede ser incorporada al juicio por su lectura, sin perjuicio de que el funcionario y el testigo instrumental puedan ser citados para prestar su testimonio.

Art. 184. Registro de locales públicos. El registro en dependencias estatales, locales comerciales o aquellos destinados al esparcimiento público o al culto religioso, se hace en presencia del responsable o encargado del lugar y, a falta de éste, de cualquier dependiente o un vecino o persona mayor de edad.

Bajo esas formalidades puede ser incorporada al juicio por su lectura, sin perjuicio de que el funcionario y el testigo instrumental puedan ser citados para prestar su testimonio.

El registro de personas o muebles de uso particular en estos lugares se sujeta a las disposiciones de los artículos precedentes.

Art. 185. Operaciones técnicas. Para mayor eficacia y calidad de los registros e inspecciones, se pueden ordenar operaciones técnicas o científicas, reconocimientos y reconstrucciones.

La reconstrucción del hecho es procedente a los fines de comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.

El imputado no está obligado a participar de la reconstrucción del hecho, pero si decide hacerlo se aplican las reglas previstas para su declaración.

En lo que atañe a la participación de testigos, peritos e intérpretes se aplican las disposiciones establecidas por este código.

Art. 186. Entrega de cosas y documentos. Secuestros. Los objetos y documentos relacionados con el hecho punible y los sujetos a confiscación o decomiso, relevantes para la investigación, son individualizados, tomados en depósito y conservados del mejor modo posible, salvo que la ley disponga su destrucción, en cuyo caso siempre se conserva una muestra que permita su examen.

La persona que tenga en su poder objetos o documentos de los señalados precedentemente, está obligada a presentarlos y entregarlos, cuando le sea requerido. Si los objetos requeridos no son entregados, se dispone su secuestro.

Art. 187. Objetos no sometidos a secuestro. No pueden ser objeto de secuestro los exámenes o diagnósticos médicos protegidos por el secreto profesional ni las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor.

Art. 188. Orden de secuestro. La orden de secuestro es expedida por el juez en una resolución motivada. El ministerio público y la policía pueden hacerlo sin orden en ocasión de un registro.

Art. 189. Procedimiento. Rige el procedimiento previsto para el registro. Los efectos secuestrados son individualizados, inventariados y depositados de forma que asegure su custodia y buena conservación, bajo la responsabilidad del ministerio público.

Si los objetos secuestrados corren el riesgo de alterarse, desaparecer, sean de difícil custodia o perecederos, o estén sujetos a destrucción, se ordenan reproducciones, copias, pericias o certificaciones sobre su existencia y estado.

El ministerio público dispone de los bienes sujetos a decomiso de conformidad con la ley.

Art. 190. Devolución. Tan pronto como se pueda prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron.

Esta devolución puede ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito judicial, e imponerse al poseedor la obligación de presentarlos cuando se le requiera.

Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos pueden ser entregados en depósito a un establecimiento asistencial que los necesite, que sólo puede utilizarlos para cumplir el servicio que brinda al público.

En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se aplican, análogamente, las reglas civiles respectivas.

La decisión del ministerio público referida a la devolución puede ser objetada ante el juez.

Art. 191. Secuestro de correspondencia. Siempre que sea útil para el establecimiento de la verdad, el juez puede ordenar, por resolución motivada, el secuestro de la correspondencia epistolar o telegráfica, remitida por el imputado o destinada a él, aunque sea bajo nombre supuesto.

Art. 192. Interceptación de telecomunicaciones. Se requiere autorización judicial para la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado, o cualquier otra persona que pueda facilitar razonablemente información relevante para la determinación de un hecho punible, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Se procede conforme a las reglas del allanamiento o registro.

La medida de interceptación de comunicaciones tiene carácter excepcional y debe renovarse cada treinta días, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo.

La resolución judicial que autoriza la interceptación o captación de comuni-

caciones debe indicar todos los elementos de identificación de los medios a interceptar y el hecho que motiva la medida.

El funcionario encargado debe levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la investigación, con exclusión de cualquier otra comunicación de carácter personal o familiar. Bajo esas formalidades, la grabación puede ser reproducida en el juicio o su transcripción puede ser incorporada por su lectura, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar su reproducción íntegra.

Los registros y transcripciones son destruidos a la expiración del plazo de prescripción de la acción pública.

La interceptación de comunicaciones sólo se aplica a la investigación de hechos punibles cuya sanción máxima prevista supere los diez años de privación de libertad y a los casos que se tramitan conforme el procedimiento especial para asuntos complejos.

Art. 193. Clausura de locales y aseguramiento de cosas muebles.

Cuando para la averiguación de un hecho punible sea indispensable la clausura temporal de un local o la inmovilización de cosas muebles que, por su naturaleza o dimensión, no puedan ser mantenidas en depósito, se procede a asegurarlas, según las reglas del secuestro.

TITULO III. TESTIMONIOS

Art. 194. Obligación de testificar. Toda persona tiene la obligación de comparecer a la citación y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones de ley.

La persona llamada a testificar no está obligada a declarar sobre hechos que puedan comprometer su responsabilidad penal.

Si el juez o tribunal, y en su caso el ministerio público, estima que el testigo invoca erróneamente la facultad o el deber de abstención, ordena su declaración.

Art. 195. Excepción a la obligación de comparecer. El Presidente de la República, el Vicepresidente, los presidentes de las cámaras legislativas, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el Presidente de la Junta Central Electoral, los embajadores y cónsules extran-

jeros, pueden solicitar que la declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio.

Art. 196. Facultad de abstención. Pueden abstenerse de prestar declaración:

1. El cónyuge o conviviente del imputado;
2. Los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Antes de que presten testimonio estas personas deben ser advertidas de su facultad de abstención. Ellas pueden ejercer dicha facultad en cualquier momento, aún durante su declaración, incluso para preguntas particulares.

Art. 197. Deber de abstención. Deben abstenerse de declarar quienes, según la ley, deban guardar secreto. Estas personas no pueden negarse a prestar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas, deben comparecer y explicar sobre las razones de su abstención.

Art. 198. Comparecencia. El testigo debidamente citado está obligado a comparecer.

Si el testigo reside en un lugar lejano de donde deba prestar declaración y carece de los medios económicos para su traslado, se puede disponer la provisión de los medios económicos necesarios para asegurar su comparecencia.

Art. 199. Conducencia. Si debida y regularmente citado, el testigo, no se presenta a prestar declaración, el juez o tribunal o el ministerio público, durante el procedimiento preparatorio, puede hacerle comparecer mediante el uso de la fuerza pública.

La conducencia no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que la motiva.

Art. 200. Residentes en el extranjero. Si el testigo reside en el extranjero, se procede de conformidad con las reglas de cooperación judicial. Sin embargo, se puede requerir la autorización del Estado en el cual se encuentre, para que el testigo sea interrogado por el representante consular o por el juez que conoce de la causa o por un representante del ministerio público, quienes pro-

ceden a trasladarse a fin de ejecutar la diligencia, según la fase del procedimiento y la naturaleza del acto de que se trate.

Art. 201. Forma de la declaración. Antes de iniciar su declaración, el testigo es informado sobre sus obligaciones y de la responsabilidad derivada de su incumplimiento y, según su creencia, presta juramento o promesa de decir la verdad.

Acto seguido procede su interrogatorio por separado, el cual se inicia con las preguntas acerca de sus datos personales y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de su testimonio.

Si el testigo expresa temor por su integridad o la de otra persona, puede ser autorizado excepcionalmente a no indicar públicamente su domicilio y otros datos de referencia, de lo cual se toma nota reservada, pero el testigo no puede ocultar su identidad ni ser eximido de comparecer.

Art. 202. Testimonios especiales. El testimonio de personas que se encuentren en circunstancias especiales de vulnerabilidad puede recibirse en privado y con la asistencia de familiares o personas especializadas.

Cuando se trate de personas que no puedan expresarse fácilmente en español o que adolezcan de algún impedimento manifiesto, se pueden disponer las medidas necesarias para que el interrogado sea asistido por un intérprete o traductor o se exprese por escrito o de la forma que facilite la realización de la diligencia.

Art. 203. Testigo reticente. Toda persona citada para prestar declaración que no comparezca o se niega a satisfacer el objeto de la citación, es sancionada con una multa por el equivalente de hasta treinta días de salario base de un juez de primera instancia. Esta sanción la aplica el juez, a solicitud del ministerio público.

TITULO IV. PERITOS

Art. 204. Peritaje. Puede ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. La prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes.

Art. 205. Calidad habilitante. Los peritos deben ser expertos y tener título, expedido en el país o en el extranjero, habilitante en la materia relativa al punto sobre el cual son llamados a dictaminar, siempre que la ciencia, arte o técnica estén reglamentadas. En caso contrario, debe designarse a personas de idoneidad manifiesta.

No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció directamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso se aplican las reglas de la prueba testimonial.

Art. 206. Incapacidad. No pueden actuar como peritos:

1. Quienes por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales no comprendan el significado del acto;
2. Quienes deban abstenerse de declarar como testigos;
3. Quienes hayan sido testigos del hecho objeto de procedimiento;
4. Los inhabilitados.

Art. 207. Nombramiento de peritos. Los peritos son designados por el ministerio público durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En cualquier otro momento son nombrados por el juez o tribunal, a propuesta de parte.

El número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes. La resolución que ordena el peritaje fija con precisión su objeto y el plazo para la presentación de los dictámenes.

Art. 208. Facultad de las partes. Las partes pueden proponer otro perito en reemplazo del ya designado, o para que dictamine conjuntamente con él cuando, por las circunstancias particulares del caso, resulte conveniente su participación, por su experiencia o idoneidad especial.

Las partes pueden proponer fundadamente temas para el peritaje y objetar los admitidos o propuestos por otra de las partes.

Art. 209. Inhibición y recusación. Son causas legales de inhibición y recusación de los peritos las establecidas para los jueces.

Art. 210. Citación y aceptación del cargo. Los peritos son citados en la misma forma que los testigos; tienen el deber de comparecer y de desempeñar el cargo para el cual son designados.

Si los peritos no son idóneos, están comprendidos en algunas de las incapacidades citadas, presentan un motivo que habilite su recusación o sufren un impedimento grave, así lo pueden manifestar, indicando los motivos.

Art. 211. Ejecución del peritaje. El funcionario que ha dispuesto el peritaje resuelve todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

Los peritos practican conjuntamente el examen, siempre que sea posible o conveniente. Las partes y sus consultores técnicos pueden asistir a la diligencia y solicitar aclaraciones pertinentes, con la obligación de retrarse cuando los peritos inicien la deliberación. Durante la etapa preparatoria, esta facultad no obliga al ministerio público a convocar a las partes a la operación.

Cuando algún perito no concurre a realizar las operaciones periciales, por negligencia o por alguna causa grave, o cuando simplemente desempeña mal su función, se procede a su reemplazo.

Art. 212. Dictamen pericial. El dictamen debe ser fundado y contener la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, en su caso, y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado.

Los peritos pueden dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presenta por escrito firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las audiencias.

Art. 213. Nuevo dictamen. Cuando el dictamen es dudoso, insuficiente o contradictorio, el juez, a solicitud de parte, o el ministerio público, según corresponda, puede ordenar su ampliación o la realización de un nuevo peritaje por los mismos peritos o por otros.

Art. 214. Auxilio judicial. El juez o el ministerio público, según la naturaleza del acto, puede ordenar la presentación o el secuestro de cosas y documentos; así como la comparecencia de personas, si es necesario para llevar a cabo las operaciones de peritaje. También puede requerir al imputado y a otras personas que confeccionen el cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones semejantes.

Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y ella rehúse colaborar, se deja constancia de su negativa y se dispone lo necesario para suplir esa falta de colaboración.

Art. 215. Intérpretes. En lo relativo a los intérpretes rigen las disposiciones de este título.

Art. 216. Pericia cultural. En los casos de hechos punibles atribuidos a miembros de un grupo social con normas culturales propias, se puede ordenar una pericia para conocer las pautas culturales de referencia y valorar adecuadamente su responsabilidad penal.

Art. 217. Autopsia. Los peritos que designe el ministerio público deben rendir un informe sobre la causa médica de la muerte, de los estados patológicos preexistentes, de la forma médico legal del hecho y del momento en que ésta se produjo. Si el ministerio público no ordena la autopsia, las partes pueden solicitar al juez o tribunal que lo haga.

TITULO V. OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Art. 218. Reconocimiento de personas. Cuando sea necesario individualizar al imputado, se ordena su reconocimiento de la siguiente manera:

1. Se ubica al imputado o a la persona sometida a reconocimiento junto con otras de aspecto exterior semejante;
2. Se pregunta claramente a quien lleva a cabo el reconocimiento, si después del hecho ha visto a la persona mencionada, si entre las personas presentes se encuentra la que mencionó y, en caso afirmativo, se le invita para que la señale con precisión;
3. Al momento de reconocerla, debe expresar las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía al momento del hecho.

La observación de la rueda de personas puede ser practicada desde un lugar oculto, cuando se considere conveniente para la seguridad del testigo.

Se adoptan las previsiones para que el imputado no se desfigure.

El reconocimiento procede aún sin consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda ser conducido personalmente, se procede a utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas.

El acto de reconocimiento de personas debe realizarse en presencia del defensor del imputado. De la diligencia se levanta acta donde se consignan todas

las circunstancias útiles, incluso los datos personales y el domicilio de los que han formado la rueda de personas, la cual puede ser incorporada al juicio por su lectura.

Art. 219. Pluralidad de reconocimientos. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practica por separado, sin que se comuniquen entre sí.

Cuando sean varias las personas a las que una deba reconocer, el reconocimiento de todas puede efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.

Art. 220. Reconocimientos. Los documentos y objetos pueden ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen acerca de ellos.

Antes del reconocimiento de un objeto, se procede a invitar a la persona que deba reconocerlo a que lo describa.

Art. 221. Careo. Puede ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes.

Para la realización de estos actos se aplican respectivamente las reglas del testimonio, del peritaje y de la declaración del imputado.

LIBRO V MEDIDAS DE COERCION

TITULO I. NORMAS GENERALES

Art. 222. Principio general. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tienen carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento.

La resolución judicial que impone una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable en cualquier estado del procedimiento. En todo caso, el juez puede proceder de oficio cuando favorezca la libertad del imputado.

TITULO II. MEDIDAS DE COERCION PERSONALES

CAPITULO I ARRESTO Y CONDUCTENCIA

Art. 223. Citación. En los casos en que es necesaria la presencia del imputado para realizar un acto, el ministerio público o el juez, según corresponda, lo cita a comparecer, con indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto.

Art. 224. Arresto. La policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene. La policía no necesita orden judicial cuando el imputado:

1. Es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido, o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción;
2. Se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención;
3. Tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hacen presumir, razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.

En el caso del numeral 1 de este artículo, si la búsqueda o persecución ha sido interrumpida, se requiere orden judicial.

En ningún caso se puede practicar el arresto cuando se trate de infracciones de acción privada o de aquellas en las que no está prevista pena privativa de libertad.

Si se trata de una infracción que requiere la instancia privada, es informado inmediatamente quien pueda presentarla y, si éste no presenta la denuncia en el término de veinticuatro horas, el arrestado es puesto en libertad.

La autoridad policial que practique el arresto de una persona debe ponerla, sin demora innecesaria, a la orden del ministerio público, para que éste, si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad o solicite al juez una medida de coerción. La solicitud del ministerio público debe formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del arresto.

En el caso del numeral 1 de este artículo, cualquier persona puede practicar el arresto, con la obligación de entregar inmediatamente a la persona a la autoridad más cercana.

En todos los casos el ministerio público debe examinar las condiciones en que se realiza el arresto. Si el arresto no resulta conforme con las disposiciones de la ley, dispone la libertad inmediata de la persona y en su caso vela por la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan.

Art. 225. Orden de arresto. El juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar el arresto de una persona cuando:

1. Es necesaria su presencia y existen elementos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;
2. Después de ser citada a comparecer no lo hace y es necesaria su presencia durante la investigación o conocimiento de una infracción.

El arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que lo motiva. Si el ministerio público estima que la persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, así lo solicita al juez en un plazo máximo de veinticuatro horas, quien resuelve en una audiencia. En caso contrario, dispone su libertad inmediata.

CAPITULO II OTRAS MEDIDAS

Art. 226. Medidas. A solicitud del ministerio público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez, puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción:

1. La presentación de una garantía económica suficiente;
2. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez;
4. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
5. La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado;
6. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga;
7. La prisión preventiva.

En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva, ni el arresto domiciliario, ni la colocación de localizadores electrónicos.

En cualquier caso, el juez puede prescindir de toda medida de coerción, cuando la promesa del imputado de someterse al procedimiento sea suficiente para descartar el peligro de fuga.

Art. 227. Procedencia. Procede aplicar medidas de coerción, cuando concurren todas las circunstancias siguientes:

1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción;
2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento;
3. La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.

Art. 228. Imposición. A solicitud del ministerio público o del querrelante, el juez puede imponer, una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción.

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.

Art. 229. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga, el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga;
2. La pena imponible al imputado en caso de condena;
3. La importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo;
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal.

Art. 230. Prueba. Las partes pueden proponer prueba con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de una medida de coerción.

Dicha prueba se individualiza en un registro especial cuando no está permitida su incorporación al debate.

El juez valora estos elementos de prueba conforme a las reglas generales establecidas en este código, exclusivamente para fundar la decisión sobre la medida de coerción.

En todos los casos el juez debe, antes de pronunciarse, convocar a una audiencia para oír a las partes o para recibir directamente la prueba. De dicha audiencia se levanta un acta.

Art. 231. Resolución. La resolución que impone una medida de coerción debe contener:

1. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo;
2. La enunciación del hecho que se le atribuye y su calificación jurídica;
3. La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;
4. La fecha en que vence el plazo máximo de vigencia de la medida.

Art. 232. Acta. Previo a la ejecución de las medidas de coerción, cuando corresponda, se levanta un acta en la que conste:

1. La notificación al imputado;
2. La identificación y el domicilio de la institución o de los particulares que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función u obligación que les ha sido asignada;
3. El señalamiento del lugar o la forma para recibir notificaciones;
4. La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.

Art. 233. Internamiento. A solicitud del ministerio público, el juez puede ordenar el internamiento del imputado en un centro de salud mental, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso para sí o para terceros, siempre que medien las mismas condiciones que para aplicar la prisión preventiva.

Art. 234. Prisión preventiva. Además de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, la prisión preventiva

sólo es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona.

No puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta años, si se estima que, en caso de condena, no le es imposible una pena mayor a cinco años de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en perjuicio de mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia o de personas afectadas por una enfermedad grave y terminal.

Art. 235. Garantía. La garantía es presentada por el imputado u otra persona, mediante el depósito de dinero, valores, con el otorgamiento de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más personas solventes.

Al decidir sobre la garantía, el juez fija el monto, la modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía excesiva ni de imposible cumplimiento en atención a los recursos económicos del imputado.

El juez hace la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones.

El imputado y el garante pueden sustituirla por otra equivalente, previa autorización del juez.

Art. 236. Ejecución de la garantía. Cuando se declare la rebeldía del imputado o cuando éste se sustraiga a la ejecución de la pena, el juez concede un plazo de entre quince a cuarenticinco días al garante para que lo presente. Le advertirá que si no lo hace o no justifica la incomparecencia, se procederá a la ejecución de la garantía. Vencido el plazo otorgado, el juez dispone, según el caso, la ejecución en perjuicio del garante o la venta en pública subasta de los bienes dados en prenda o de los hipotecados, sin necesidad de embargo inmobiliario previo.

Art. 237. Cancelación de la garantía. La garantía debe ser cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados, siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, cuando:

1. Se revoque la decisión que la acuerda;
2. Se dicte el archivo o la absolución;
3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o ella no deba ejecutarse.

CAPITULO III

REVISION DE LAS MEDIDAS DE COERCION

Art. 238. Revisión. Salvo lo dispuesto especialmente para la prisión preventiva, el juez, en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte, o de oficio en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento las justificaron.

En todo caso, previo a la adopción de la resolución, el secretario notifica la solicitud o la decisión de revisar la medida a todas las partes intervinientes para que formulen sus observaciones en el término de cuarentiocho horas, transcurrido el cual el juez decide.

Art. 239. Revisión obligatoria de la prisión preventiva. Cada tres meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone expresamente, el juez o tribunal competente examina los presupuestos de la prisión preventiva y, según el caso, ordena su continuación, modificación, sustitución por otra medida o la libertad del imputado.

La revisión se produce en audiencia oral con citación a todas las partes y el juez decide inmediatamente en presencia de las que asistan. Si compete a un tribunal colegiado, decide el presidente.

El cómputo del término se interrumpe en los plazos previstos en el artículo siguiente o en caso de recurso contra esta decisión, comenzándose a contar íntegramente a partir de la decisión respectiva.

Art. 240. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor pueden provocar la revisión de la prisión preventiva que le haya sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento. La audiencia prevista en el artículo anterior se lleva a cabo dentro de las cuarentiocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud.

Al revisarse la prisión preventiva, el juez toma en consideración, especialmente, la subsistencia de los presupuestos que sirvieron de base a su adopción.

Art. 241. Cese de la prisión preventiva. La prisión preventiva finaliza cuando:

1. Nuevos elementos demuestren que no concurren las razones que la motivaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;
2. Su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponi-

ble, considerándose incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o a la libertad condicional;

3. Su duración exceda de doce meses;
4. Se agraven las condiciones carcelarias de modo que la prisión preventiva se convierta en una forma de castigo anticipado o trato cruel, inhumano o degradante.

Art. 242. Prórroga del plazo de la prisión preventiva. Si el fallo ha sido recurrido por parte del imputado o del ministerio público en su favor, el plazo del artículo anterior puede prorrogarse por seis meses. Vencido ese plazo, no se puede acordar una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva.

TITULO III. MEDIDAS DE COERCION REALES

Art. 243. Embargo y otras medidas conservatorias. Para garantizar la reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible y el pago de las costas del procedimiento, las partes pueden formular al juez la solicitud de embargo, inscripción de hipoteca judicial u otras medidas conservatorias previstas por la ley civil.

El ministerio público puede solicitar estas medidas para garantizar el pago de las multas imponibles o de las costas o cuando la acción civil le haya sido delegada.

Art. 244. Aplicación supletoria. El trámite se rige, en cuanto sean aplicables, por las reglas del Código de Procedimiento Civil y la legislación especial.

Art. 245. Recurso. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas de coerción reguladas por este libro son apelables. La presentación del recurso no suspende la ejecución de la resolución.

LIBRO VI COSTAS E INDEMNIZACIONES

TITULO I. DE LAS COSTAS

Art. 246. Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales.

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente.

Art. 247. Exención. Los representantes del ministerio público, abogados y mandatarios que intervengan en el proceso no pueden ser condenados en costas, salvo en los casos de temeridad, malicia o falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y de otro tipo en que incurran.

Art. 248. Contenido. Las costas del proceso consisten en:

1. Las tasas judiciales;
2. Los gastos originados por la tramitación del procedimiento;
3. Los honorarios de los abogados, peritos, consultores técnicos e intérpretes que hayan intervenido en el procedimiento.

Art. 249. Condena. Las costas son impuestas al condenado a una pena o medida de seguridad.

El juez o tribunal establece el porcentaje que corresponde a cada uno de los responsables, en el caso de varios condenados en relación con un mismo hecho.

Este artículo no rige para la ejecución penal ni para las medidas de coerción.

Art. 250. Absolución. Si el imputado es absuelto, las costas son soportadas por el Estado y el querellante en la proporción que fije el tribunal.

Art. 251. Archivo. Cuando se ordena el archivo de las actuaciones, cada parte y el Estado, soportan sus propias costas.

Art. 252. Denuncia falsa. Cuando el denunciante hubiere provocado el proceso por medio de una denuncia basada en hechos falseados, y así fuere declarado por el juez o tribunal, se le impone el pago total de las costas.

Art. 253. Acción privada. En el procedimiento de acción privada, en caso de absolución o abandono, las costas son soportadas por el querellante. En caso de condena, son soportadas por el imputado.

El juez puede decidir sobre las costas según el acuerdo que hayan alcanzado las partes.

Art. 254. Liquidación y ejecución. El secretario practica la liquidación de las costas en el plazo de tres días, regulando los honorarios que correspondan y fijando los gastos judiciales.

Se puede solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de cinco días, ante el juez o tribunal que tomó la decisión o ante el ministerio público en su caso.

TITULO II. DE LA INDEMNIZACION AL IMPUTADO

Art. 255. Revisión. Cuando, a causa de la revisión de la sentencia, el condenado es absuelto o se le impone una pena menor, debe ser indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida o por el tiempo sufrido en exceso.

La multa o su exceso le es devuelta.

En caso de revisión por aplicación de una ley o jurisprudencia posterior más benigna, en caso de amnistía o indulto, no se aplica la indemnización de que trata el presente artículo.

Art. 256. Determinación. Al resolver favorablemente la revisión que origina la indemnización, el tribunal fija su importe a razón de un día de salario base de juez de primera instancia por cada día de prisión o de inhabilitación injusta.

La aceptación de la indemnización fijada anteriormente impide demandar ante los tribunales competentes por la vía que corresponda, a quien pretenda una indemnización superior.

Art. 257. Medidas de coerción. También corresponde esta indemnización cuando se declare que el hecho no existe, no reviste carácter penal o no se compruebe la participación del imputado, y éste ha sufrido prisión preventiva o arresto domiciliario durante el proceso.

Art. 258. Obligación. El Estado está siempre obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de su derecho a repetir contra algún otro obligado. A tales fines, el juez o tribunal impone la obligación solidaria, total o parcial, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial.

En caso de medidas de coerción sufridas injustamente, el juez o tribunal puede imponer la obligación total o parcialmente, al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o litigado con temeridad.

PARTE ESPECIAL

LIBRO I PROCEDIMIENTO COMUN

TITULO I. PROCEDIMIENTO PREPARATORIO

CAPITULO I NORMAS GENERALES

Art. 259. Objeto. El procedimiento preparatorio tiene por objeto determinar la existencia de fundamentos para la apertura de juicio, mediante la recolección de los elementos de prueba que permiten basar la acusación del ministerio público o del querellante y la defensa del imputado.

El ministerio público tiene a su cargo la dirección de la investigación de todas las infracciones perseguibles por acción pública y actúa con el auxilio de la policía.

Art. 260. Alcance de la investigación. Es obligación del ministerio público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

Art. 261. Registro de la investigación. El ministerio público elabora actas de las diligencias realizadas durante el procedimiento preparatorio cuando sean útiles para fundar la acusación u otro requerimiento.

Las actuaciones contenidas en el registro de investigación no tienen valor probatorio para fundar la condena del imputado, salvo las actas que este código autoriza incorporar al juicio por su lectura.

Los jueces llevan un registro general de sus decisiones.

CAPITULO II ACTOS INICIALES

SECCION I. DENUNCIA

Art. 262. Facultad de denunciar. Toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública puede denunciarla ante el ministerio público, la policía o cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación.

Cuando la denuncia es presentada por un menor de edad, el funcionario que la recibe está obligado a convocar a los padres o tutores o persona mayor de edad de su confianza e iniciar su investigación sin perjuicio de evitar que el hecho denunciado derive en consecuencias ulteriores.

Art. 263. Forma y contenido. La denuncia puede ser presentada en forma oral o escrita, personalmente o por mandatario con poder especial. Cuando la denuncia es oral, el funcionario que la recibe debe levantar acta.

La denuncia contiene, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los autores y cómplices, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. El funcionario que la recibe comprueba y deja constancia de la identidad y domicilio del denunciante.

Art. 264. Obligación de denunciar. Tienen obligación de denunciar acerca de todas las infracciones de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de éste, lleguen a su conocimiento:

1. Los funcionarios públicos;
2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros, y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas;
3. Los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de infracciones que afecten el patrimonio o ingresos públicos.

En todos estos casos, la denuncia deja de ser obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional.

Art. 265. Imputación pública. Toda persona que sea imputada pública-

mente por otra de la comisión de una infracción, tiene el derecho a comparecer ante el ministerio público y solicitarle la investigación correspondiente.

Art. 266. Participación. El denunciante no es parte en el proceso. No incurre en responsabilidad, salvo cuando las imputaciones sean falsas.

SECCION II. QUERELLA

Art. 267. Querella. La querella es el acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el ministerio público.

Art. 268. Forma y contenido. La querella se presenta por escrito ante el ministerio público y debe contener los datos mínimos siguientes:

1. Los datos generales de identidad del querellante;
2. La denominación social, el domicilio y los datos personales de su representante legal, para el caso de las personas jurídicas;
3. El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la identificación de los autores, cómplices, perjudicados y testigos;
4. El detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra.

Art. 269. Admisibilidad. Si el ministerio público estima que la querella reúne las condiciones de forma y de fondo y que existen elementos para verificar la ocurrencia del hecho imputado, da inicio a la investigación. Si ésta ya ha sido iniciada, el querellante se incorpora como parte en el procedimiento.

Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo precedente, el ministerio público requiere que se complete dentro del plazo de tres días. Vencido este plazo sin que haya sido completada, se tiene por no presentada.

El solicitante y el imputado pueden acudir ante el juez a fin de que éste decida sobre la disposición adoptada por el ministerio público sobre la admisibilidad de la querella. Las partes pueden oponerse ante el juez a la admisión de la querella y a la intervención del querellante, mediante las excepciones correspondientes.

La resolución del juez es apelable.

Art. 270. Oportunidad. La querrela debe presentarse antes de que se dicte el auto de apertura de juicio. Si la querrela es presentada en la audiencia preliminar, deben cumplirse todas las condiciones de forma y de fondo previstos en esa etapa.

Art. 271. Desistimiento. El querellante puede desistir de la querrela en cualquier momento del procedimiento y paga las costas que ha ocasionado.

Se considera que el querellante desiste de la querrela cuando sin justa causa:

1. Citado legalmente a prestar declaración testimonial no comparece;
2. No acuse o no asista a la audiencia preliminar;
3. No ofrece prueba para fundar su acusación o no se adhiere a la del ministerio público;
4. No comparece al juicio o se retira del mismo sin autorización del tribunal.

El desistimiento es declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. La decisión es apelable.

Art. 272. Imposibilidad de nueva persecución. El desistimiento impide toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querrela y en relación con los imputados que participaron en el proceso.

SECCION III. INTERVENCION DE LA POLICIA JUDICIAL

Art. 273. Conocimiento directo. Los funcionarios de la policía que tengan conocimiento directo de una infracción de acción pública deben dar noticia al ministerio público, sin demora innecesaria y siempre dentro del plazo máximo de las veinticuatro horas siguientes a su intervención. Cuando la información provenga de una fuente no identificada, el funcionario que la recibe está en la obligación de confirmarla y hacerla constar en un registro destinado a tales fines, en el que conste el día, la hora, el medio y los datos del funcionario.

Art. 274. Diligencias preliminares. Los funcionarios de la policía practican las diligencias preliminares dirigidas a obtener y asegurar los elementos de prueba, evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, recibir las declaraciones de las personas presentes e impedir que el hecho produzca consecuencias ulteriores.

Si la infracción es de acción privada, sólo debe proceder cuando recibe la orden del juez o del ministerio público. Pero si es una infracción dependiente de instancia privada, actúa por la denuncia de la persona autorizada a presentarla, sin perjuicio de las acciones inmediatas para preservar la prueba o impedir que el hecho tenga consecuencias ulteriores.

Art. 275. Medida precautoria. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no sea posible individualizar al autor, al cómplice ni a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, la policía puede disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas ni de los lugares, disponiendo las medidas que el caso requiera. Esta medida no puede exceder el plazo de seis horas.

Art. 276. Arresto. Los funcionarios de la policía sólo pueden arrestar a los imputados en los casos que este código lo autoriza, con apego estricto a los siguientes principios básicos de actuación:

1. Identificarse, al momento del arresto, como funcionario de policía y verificar la identidad de la persona contra quien se procede. La identificación previa de la persona sujeta al arresto no es exigible en los casos de flagrancia;
2. Abstención del uso de la fuerza, salvo cuando es estrictamente necesario y siempre en la proporción que lo requiere la ejecución del arresto;
3. Abstención del uso de las armas, excepto cuando se produzca una resistencia que coloque en peligro la vida o integridad física de las personas, o con el objeto de evitar la comisión de otras infracciones, dentro de lo necesario y la proporcionalidad a que se refiere el numeral precedente;
4. No aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, tormentos u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;
5. Informar a la persona, al momento de su arresto, de su derecho a guardar silencio y a nombrar su defensor;
6. No permitir la presentación del arrestado a ningún medio de comunicación social o la comunidad, sin su expreso consentimiento, el que se otorga en presencia del defensor, previa consulta, y se hace constar en las diligencias respectivas;
7. Comunicar a los familiares, persona de confianza o al abogado indicado por la persona arrestada, sobre el arresto y el lugar al cual es conducida o permanece;

8. Hacer constar, en un registro inalterable, el lugar, día y hora del arresto, la orden o circunstancia en que ocurre y los funcionarios o agentes responsables de su ejecución.

Art. 277. Informe sobre las diligencias preliminares. Los funcionarios de la policía deben informar al ministerio público sobre las diligencias preliminares de la investigación dentro del plazo de setentidós horas. Si se ha procedido a un arresto, el plazo se reduce a veinticuatro horas.

A los fines de documentar las diligencias, es suficiente con asentar en un acta única, con la mayor exactitud posible, las relevantes para la investigación, en la cual se deja constancia de las instrucciones recibidas del ministerio público y, en su caso, de los jueces.

El informe es firmado por quien dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que intervienen en los actos o que proporcionan alguna información. Si el defensor participa en alguna diligencia, se hace constar y se le solicita que firme; si no accede a firmar, se hace mención de esta circunstancia, lo que no invalida el acta.

Art. 278. Remisión de objetos secuestrados. Los objetos secuestrados son enviados al ministerio público con el informe correspondiente, salvo cuando la investigación sea compleja, existan obstáculos insalvables o los objetos sean necesarios para actos de prueba, casos en los que son enviados inmediatamente después de la realización de los exámenes técnicos o científicos correspondientes.

SECCION IV. INVESTIGACION PRELIMINAR

Art. 279. Inicio. Recibida la denuncia, la querrela, el informe policial o realizadas las primeras investigaciones de oficio, el ministerio público abre de inmediato el registro correspondiente en que hace constar los datos siguientes:

1. Una sucinta descripción del objeto de la investigación;
2. Los datos del imputado, si los hay;
3. La fecha en que se inicia la investigación;
4. La calificación jurídica provisional de los hechos imputados;
5. El nombre del funcionario del ministerio público encargado.

Art. 280. Ejercicio de la acción penal. Si el ministerio público decide ejercer la acción penal, practica por sí mismo u ordena a la policía practicar bajo su dirección las diligencias de investigación que no requieren autorización judicial ni tienen carácter jurisdiccional. Solicita al juez las autorizaciones necesarias, conforme lo establece este código.

Art. 281. Archivo. El ministerio público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando:

1. No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho;
2. Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción;
3. No se ha podido individualizar al imputado;
4. Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos;
5. Concorre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable;
6. Es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal;
7. La acción penal se ha extinguido;
8. Las partes han conciliado;
9. Proceda aplicar un criterio de oportunidad.

En los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 el archivo no puede ser modificado mientras no varien las circunstancias que lo fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. En los casos de los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 el archivo extingue la acción penal.

En todo caso, el archivo pone fin a cualquier medida de coerción contra el imputado.

Art. 282. Intervención del querellante y de la víctima. Antes de disponer el archivo invocando las causas previstas en los numerales 4 y 5 del artículo precedente, el ministerio público debe ponerlo en conocimiento del querellante o, en su caso, de la víctima que ha solicitado ser informada y ofrecido su domicilio, para que éstos manifiesten si tienen objeción al respecto. En este caso, deben indicarlo por escrito dentro de los diez días siguientes.

Si el ministerio público decide archivar, no obstante la objeción de la víctima o del querellante, éstos pueden acudir al juez para que proceda al examen de la medida.

Art. 283. Examen del juez. El archivo dispuesto en virtud de cualquiera

de las causales previstas en el artículo 281 se notifica a la víctima que haya presentado la denuncia y solicitado ser informada o que haya presentado la querrela. Ella puede objetar el archivo ante el juez, dentro de los tres días, solicitando la ampliación de la investigación, indicando los medios de prueba practicable o individualizando al imputado. En caso de conciliación, el imputado y la víctima pueden objetar el archivo, invocando que ha actuado bajo coacción o amenaza.

En todo caso, recibida la objeción, el juez convoca a una audiencia en el plazo de cinco días.

El juez puede confirmar o revocar el archivo. Esta decisión es apelable.

Art. 284. Medida de coerción. El ministerio público puede solicitar al juez la aplicación de una medida de coerción. El requerimiento debe contener los datos personales del imputado, el relato del hecho y su calificación jurídica, los elementos de prueba que lo sustentan, el tipo de medida que se requiere y en su caso la solicitud del arresto.

Recibido el requerimiento, el juez cita a las partes a una audiencia que se realiza en un plazo no mayor de tres días hábiles. Es indispensable la presencia del ministerio público, del imputado y su defensor. Si el ministerio público no concurre; se tiene el requerimiento como no presentado. En la audiencia, el ministerio público expone los motivos de su requerimiento y se invita al imputado a declarar en su defensa.

Si el imputado ha sido arrestado, será puesto a disposición del juez sin demora innecesaria y siempre dentro del plazo máximo de veinticuatro horas de su arresto. De lo contrario, el ministerio público dispone su libertad, sin perjuicio de continuar con la acción penal.

CAPITULO III DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

Art. 285. Diligencias. El ministerio público puede exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, fijando un plazo conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí, o hacer practicar por funcionarios policiales cualquier clase de diligencias. Debe solicitar la intervención judicial cuando lo establece este código.

Art. 286. Proposición de diligencias. Las partes tienen la facultad de

proponer diligencias de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El ministerio público las realiza si las considera pertinentes y útiles; en caso contrario, hace constar las razones de su negativa. En este último caso, las partes pueden acudir ante el juez, para que decida sobre la procedencia de la prueba propuesta. Si el juez estima que la diligencia es procedente, ordena al ministerio público su realización.

Art. 287. Anticipo de prueba. Excepcionalmente, las partes pueden solicitar al juez un anticipo de prueba cuando:

1. Se trate de un peritaje que por sus características no permita que se realice posteriormente un nuevo examen;
2. Es necesaria la declaración de un testigo que, por algún obstáculo difícil de superar, se presume que no podrá hacerse durante el juicio o, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce.

El juez practica el acto, si lo considera admisible, y cita a las partes, quienes tienen derecho a asistir, a hacer uso de la palabra con autorización del juez. En todo caso, las partes presentes pueden solicitar que consten en el acta las observaciones que estiman pertinentes, incluso sobre irregularidades e inconsistencias del acto.

El acto se registra por cualquier medio fehaciente y será conservado por el ministerio público, sin perjuicio de que las partes se puedan hacer expedir copia.

Art. 288. Urgencia. Si alguno de los actos previstos en el artículo anterior es de extrema urgencia, el ministerio público puede requerir verbalmente la intervención del juez y éste practica el acto con prescindencia de las citaciones previstas y, de ser necesario, designa un defensor público para que participe en el acto.

Cuando se ha procedido por urgencia, después de practicado el acto, debe ser puesto en conocimiento de las partes, si las hay.

Art. 289. Preservación de los elementos de prueba. El ministerio público debe asegurar los elementos de prueba esenciales sobre la infracción, aún cuando se haya dictado la suspensión condicional del procedimiento o se haya dispuesto el archivo en los supuestos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 281.

Art. 290. Carácter de las actuaciones. El procedimiento preparatorio

no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes.

Los abogados que invoquen un interés legítimo son informados por el ministerio público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados que existan, con el propósito de que decidan si aceptan participar en el caso.

Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, tienen la obligación de guardar discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerada falta grave.

Cuando el imputado sea un funcionario público a quien se le atribuye la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o se trate de una infracción que afecta el patrimonio público, los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que, a juicio del ministerio público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado.

Art. 291. Reserva. Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación.

Art. 292. Resolución de peticiones. Cuando el juez debe resolver peticiones, excepciones o incidentes en los que se verifique la necesidad de ofrecer prueba o resolver una controversia, convocará a una audiencia dentro de los cinco días de su presentación. En los demás casos resuelve directamente dentro de los tres días de la presentación de la solicitud.

CAPITULO IV CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO

Art. 293. Actos conclusivos. Concluida la investigación, el ministerio público puede requerir por escrito:

1. La apertura a juicio mediante la acusación;
2. La aplicación del procedimiento abreviado mediante la acusación correspondiente;
3. La suspensión condicional del procedimiento.

Junto al requerimiento, el ministerio público remite al juez los elementos de prueba que le sirven de sustento.

Art. 294. Acusación. Cuando el ministerio público estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presenta la acusación requiriendo la apertura de juicio.

La acusación debe contener:

1. Los datos que sirvan para identificar al imputado;
2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, con indicación específica de su participación;
3. La fundamentación de la acusación, con la descripción de los elementos de prueba que la motivan;
4. La calificación jurídica del hecho punible y su fundamentación;
5. El ofrecimiento de la prueba que se pretende presentar en juicio, que incluye la lista de testigos, peritos y todo otro elemento de prueba, con la indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar, bajo pena de inadmisibilidad.

Si considera razonablemente que el imputado podría no presentarse a la audiencia preliminar o al juicio, solicita que se ordene el arresto u otra medida de coerción posterior.

Art. 295. Acusación alternativa o subsidiaria. En la acusación, el ministerio público o el querellante pueden señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias del hecho que permitan calificar el comportamiento del imputado como una infracción distinta, a fin de posibilitar su correcta defensa.

Art. 296. Notificación de la acusación. El ministerio público notifica la acusación al querellante o a la víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del procedimiento, para que manifieste si pretende presentar acusación o adherirse a la ya planteada por el ministerio público, casos en los cuales debe indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes.

La acusación del querellante debe presentarse ante el juez dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Art. 297. Pretensiones del actor civil. Cuando se haya ejercido la acción civil, el ministerio público debe poner la acusación en conocimiento del actor civil, para que dentro del plazo de cinco días concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación que demanda y liquide el monto de los daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento, sin perjuicio de ampliar las partidas por las consecuencias futuras. En esta misma oportunidad,

debe ofrecer la prueba para el juicio, conforme a las exigencias señaladas para la acusación.

En cuanto sean compatibles, aplican las mismas reglas de la querrela en cuanto a la oportunidad de su presentación.

TITULO II. AUDIENCIA PRELIMINAR

Art. 298. Convocatoria. Cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al ministerio ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días. Por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública, que debe realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte.

Art. 299. Defensa. Dentro de los cinco días de notificado, el imputado puede:

1. **Objetar el requerimiento que haya formulado el ministerio público o el querellante, por defectos formales o sustanciales;**
2. **Oponer las excepciones previstas en este código, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;**
3. **Solicitar la suspensión condicional del procedimiento;**
4. **Solicitar que se dicte auto de no haber lugar a la apertura a juicio;**
5. **Solicitar la sustitución o cese de una medida de coerción;**
6. **Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado;**
7. **Ofrecer la prueba para el juicio, conforme a las exigencias señaladas para la acusación;**
8. **Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio.**

Dentro del mismo plazo, el imputado debe ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar.

El secretario dispone todo lo necesario para la organización y el desarrollo de la audiencia y la producción de la prueba.

Art. 300. Desarrollo de la audiencia. El día señalado se realiza la audiencia con la asistencia obligatoria del ministerio público, el imputado, el defensor y el querellante. Las ausencias del ministerio público y del defensor son

subsanadas de inmediato, en el último caso, nombrando un defensor público o permitiendo su reemplazo. El juez invita al imputado para que declare en su defensa, dispone la producción de la prueba y otorga tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. El juez vela especialmente para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio.

Si no es posible realizar la audiencia por ausencia del imputado, el juez fija nuevo día y hora y dispone todo lo necesario para evitar su suspensión. A solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede ordenar el arresto.

En cuanto sean aplicables, rigen las reglas del juicio, adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar.

De esta audiencia se elabora un acta.

Art. 301. Resolución. Inmediatamente después de finalizada la audiencia, el juez resuelve todas las cuestiones planteadas y, en su caso:

1. Admite total o parcialmente la acusación del ministerio público o del querellante, y ordena la apertura a juicio;
2. Rechaza la acusación del ministerio público o del querellante y dicta auto de no haber lugar a la apertura a juicio;
3. Ordena la suspensión condicional del procedimiento;
4. Resuelve conforme un procedimiento abreviado;
5. Ordena la corrección de los vicios formales de la acusación del ministerio público o del querellante;
6. Impone, renueva, sustituye o hace cesar las medidas de coerción;
7. Aprueba los acuerdos a los que lleguen las partes respecto de la acción civil resarcitoria y ordena todo lo necesario para ejecutar lo acordado;

La lectura de la resolución vale como notificación.

Art. 302. Presupuesto para apertura a juicio. El auto de apertura a juicio se puede dictar con base en la acusación del ministerio público o la del querellante. Cuando existe una contradicción manifiesta entre ambas acusaciones, el juez indica la disparidad a fin de que el ministerio público y el querellante las adecúen a un criterio unitario.

Art. 303. Auto de apertura a juicio. El juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena. La resolución por la cual el juez ordena la apertura a juicio contiene:

1. Admisión total de la acusación;
2. La determinación precisa de los hechos por los que se abre el juicio y de las personas imputadas, cuando el juez sólo admite parcialmente la acusación;
3. Modificaciones en la calificación jurídica, cuando se aparte de la acusación;
4. Identificación de las partes admitidas;
5. Imposición, renovación, sustitución o cese de las medidas de coerción, disponiendo en su caso, la libertad del imputado en forma inmediata;
6. Intimación a las partes para que en el plazo común de cinco días comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar para las notificaciones.

Esta resolución no es susceptible de ningún recurso. Efectuadas las notificaciones correspondientes, y dentro de las cuarentiocho horas siguientes, el secretario remite la acusación y el auto de apertura a juicio a la secretaría del tribunal de juicio correspondiente.

Art. 304. Auto de no ha lugar. El juez dicta el auto de no ha lugar cuando:

1. El hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado;
2. La acción penal se ha extinguido;
3. El hecho no constituye un tipo penal;
4. Concorre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable;
5. Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos.

El auto de no ha lugar concluye el procedimiento respecto al imputado en cuyo favor se dicte, hace cesar las medidas de coerción impuestas e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho. Esta resolución es apelable.

TITULO III. EL JUICIO

CAPITULO I PREPARACION DEL DEBATE

Art. 305. Fijación de audiencia y solución de los incidentes. El presidente del tribunal, dentro de las cuarentiocho horas de recibidas las actuaciones,

nes, fija el día y la hora del juicio, el cual se realiza entre los quince y los cuarenticinco días siguientes.

Las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio, y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los cinco días, a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia, según convenga al orden del juicio. Esta resolución no es apelable.

El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes.

En el mismo plazo de cinco días de la convocatoria, las partes comunican al secretario el orden en el que pretenden presentar la prueba. El secretario del tribunal notifica de inmediato a las partes, cita a los testigos y peritos, solicita los objetos, documentos y demás elementos de prueba y dispone cualquier otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio.

Cuando el imputado está en prisión, el auto de fijación de juicio se le notifica personalmente. El encargado de su custodia también es notificado y debe velar por que el imputado comparezca a juicio el día y hora fijados.

CAPTULO II PRINCIPIOS GENERALES DEL JUICIO

Art. 306. Libertad del imputado y restricciones a su movilidad. El imputado comparece libre, pero el tribunal puede excepcionalmente ordenar su custodia para evitar la evasión o la ocurrencia de actos de violencia.

Si el imputado se encuentra en libertad, aunque esté sujeto a una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, el tribunal, a pedido del ministerio público, puede ordenar su arresto para asegurar la realización de la audiencia o de un acto particular de la misma. A petición de parte puede modificar las condiciones bajo las cuales el imputado permanece en libertad o imponer otras medidas de coerción previstas en este código.

Si el imputado se encuentra en prisión y no comparece a juicio por una falta atribuible al encargado de su custodia o traslado, el presidente puede, después de escuchar sus razones, imponerle una multa de hasta quince días de su salario.

Art. 307. Inmediación. El juicio se celebra con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes.

Si el defensor no comparece o se ausenta de los estrados, se considera abandonada la defensa y se procede su reemplazo.

Si la parte civil o el querellante no concurre a la audiencia o se retira de ella, se considera como un desistimiento de la acción, sin perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer en calidad de testigo.

Si el ministerio público no comparece o se retira de la audiencia, el tribunal notifica al titular o superior jerárquico, intimándole a que de inmediato se constituya un representante en su reemplazo en la sala, bajo advertencia de que si no se le reemplaza, se tendrá por retirada la acusación.

Art. 308. Publicidad. El juicio es público, salvo que de oficio o a petición de parte, el tribunal decida, mediante resolución motivada, que se realice total o parcialmente a puertas cerradas, siempre que:

1. Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes;
2. Peligre un secreto oficial autorizado por la ley, o un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida resulte punible.

Desaparecida la causa de restricción, el tribunal permite el reingreso del público. En estos casos, el tribunal puede imponer la obligación de reserva a las partes intervinientes sobre los hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de juicio.

Art. 309. Participación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden instalar en la sala de audiencias los equipos técnicos a los fines de informar al público sobre las incidencias del juicio. El tribunal señala en cada caso las condiciones en que se ejerce el derecho a informar. El tribunal puede, sin embargo, prohibir, mediante auto debidamente fundamentado, la grabación, fotografía, filmación, edición o reproducción, cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses señalados en el artículo precedente o cuando se limite el derecho del imputado o de la víctima a un juicio imparcial y justo.

Art. 310. Restricciones de acceso. Está prohibido el ingreso a la sala de audiencias de los menores de doce años, salvo que estén acompañados de un mayor de edad responsable del menor. Tampoco pueden ingresar militares o policías uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia. Del mismo modo les está vedado el ingreso a personas que porten distintivos gremiales o partidarios.

El tribunal puede imponer un límite al número de personas admitidas en la sala de audiencias en atención a las condiciones de espacio y al mantenimiento del orden.

Art. 311. Oralidad. El juicio es oral. La práctica de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes participen en él se realiza de modo oral. Durante su desarrollo, las resoluciones son dictadas, fundamentadas y explicadas verbalmente por el tribunal y valen como notificación a las partes presentes o representadas desde el pronunciamiento, lo que se hace constar en el acta de juicio.

Quienes no pueden hablar o no pueden hacerlo de manera comprensible en español, formulan sus preguntas, observaciones y respuestas por escrito o por medio de un intérprete, las cuales son leídas y traducidas de modo que resulten entendibles para todos los presentes.

Si la víctima o el imputado es sordo o no comprende el idioma español, el tribunal dispondrá que sea asistido por un intérprete con el objeto de transmitirle el contenido de las actuaciones de la audiencia.

Art. 312. Excepciones a la oralidad. Pueden ser incorporados al juicio por medio de la lectura:

1. Los informes, las pruebas documentales y las actas que este código expresamente prevé;
2. Las actas de los anticipos de prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten al tribunal la comparecencia personal del testigo, cuando sea posible;
3. Los informes de peritos, sin perjuicio de que los peritos deban concurrir para explicar las operaciones técnicas realizadas y las conclusiones a las que han llegado;
4. Las declaraciones de co-imputados que se encuentren en rebeldía, registradas conforme a este código.

Cualquier otro elemento de prueba que pretenda ser incorporado por medio de lectura al juicio, no tiene valor alguno.

Art. 313. Dirección del debate. El presidente dirige la audiencia, ordena la exhibición de la prueba, las lecturas necesarias, hace las advertencias legales, modera el debate, rechaza todo lo que tienda a prolongarlo sin que haya mayor certidumbre en los resultados e impide, en consecuencia, las intervenciones impertinentes o que no conduzcan a la determinación de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación ni la amplitud de la defensa.

El juez puede dividir informalmente la producción de la prueba en el juicio y el debate, conforme a las reglas sobre la división del juicio, permitiendo una discusión diferenciada sobre ambas cuestiones, pero dictando una decisión única, conforme lo previsto para la sentencia.

Art. 314. Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deben guardar el debido respeto. Guardarán silencio hasta tanto sean autorizadas a exponer o deban responder a las preguntas que les son formuladas. A excepción del personal de custodia y disciplina, nadie puede portar armas u otros instrumentos aptos para molestar, perturbar u ofender a los demás.

Todas las personas presentes en la sala de audiencias y las áreas de acceso inmediato deben abstenerse de adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, ni producir disturbios o, de cualquier otro modo, manifestar opiniones.

En el cumplimiento de su poder disciplinario y de policía de la audiencia, el Presidente puede disponer el desalojo de la sala o el alejamiento de las personas que alteren o perturben el normal desenvolvimiento de la audiencia.

Si se comete un delito durante el desarrollo de una audiencia, se levanta un acta y se remite al ministerio público correspondiente.

Art. 315. Continuidad y suspensión. El debate se realiza de manera continua en un solo día. En los casos en que ello no es posible, el debate continúa durante los días consecutivos que haya menester hasta su conclusión. Puede suspenderse en una única oportunidad por un plazo máximo de diez días, contados de manera continua, sólo en los casos siguientes:

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto o diligencia fuera de la sala de audiencias, siempre que no sea posible resolver el asunto o agotar la gestión en el intervalo entre dos sesiones;
2. Cuando no comparecen testigos, peritos o intérpretes cuya intervención el tribunal admita como indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción y exhibición de otras pruebas, hasta que la persona cuya presencia se requiere se presente o sea conducida por la fuerza pública;
3. Cuando uno de los jueces, el imputado, su defensor o el representante del ministerio público, se encuentren de tal modo indispuestos que no puedan continuar su intervención en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados en lo inmediato, o cuando el tribunal se haya constituido desde el inicio con un número de miembros superior al mínimo requerido para su integración. La misma regla rige

para los casos de muerte o falta definitiva de un juez, ministerio público o defensor;

4. Cuando el ministerio público solicite un plazo para ampliar la acusación o el defensor lo solicite por igual motivo, siempre que, por las características del caso, no sea posible continuar en lo inmediato;
5. Cuando alguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones sustanciales en el objeto de la causa y hace indispensable una investigación suplementaria.

Art. 316. Decisión sobre la suspensión. El tribunal decide sobre la suspensión, anuncia el día y la hora de la continuación del debate, lo que vale citación para las partes presentes o representadas.

Antes de continuar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resume brevemente los actos agotados con anterioridad.

Los jueces pueden intervenir en otras audiencias durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida lo contrario, por resolución fundada, en razón de la complejidad del caso.

Art. 317. Interrupción. Si los debates no se reanudan a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considera interrumpido y como no iniciado, por lo que deben realizarse todos los actos desde el principio.

CAPITULO III DE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO

SECCION I. DE LA VISTA DE LA CAUSA

Art. 318. Apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituye en la sala de audiencias. Acto seguido, el secretario procede a verificar la presencia de las partes, los testigos, peritos e intérpretes, y el presidente declara abierto el juicio, advirtiendo al imputado y al público sobre la importancia y significado de lo que va a ocurrir e indicando al imputado que preste atención a lo que va a escuchar.

El tribunal ordena al ministerio público, al querellante y a la parte civil, si la hay, que lean la acusación y la demanda, en la parte relativa al hecho imputado y a su calificación jurídica. Acto seguido, pueden exponer oral y sucintamen-

te sus fundamentos. Luego se concede la palabra a la defensa a fin de que, si lo desea, se exprese de manera sucinta sobre la acusación y la demanda.

Art. 319. Declaración del imputado. Una vez que se declare la apertura de juicio, se da preferencia al imputado para que declare si lo estima conveniente para su defensa, y el presidente le explica con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, con la advertencia de que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio o reserva le perjudique y que el juicio puede continuar aunque él no declare.

El imputado puede exponer cuanto estime conveniente. Luego es interrogado por el ministerio público, el querellante, la parte civil, el defensor y los miembros del tribunal en ese orden.

Durante la audiencia, las partes y el tribunal pueden formular preguntas destinadas a esclarecer sus manifestaciones.

Art. 320. Facultades del imputado. El imputado puede, en el curso de la audiencia, hacer las declaraciones que considere oportunas en relación a su defensa. De igual modo, el imputado puede hablar con su defensor en todo momento. Para facilitar esta comunicación se les ubica permanentemente uno al lado del otro.

Art. 321. Variación de la calificación. Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una nueva calificación jurídica del hecho objeto del juicio, que no ha sido considerada por ninguna de las partes, debe advertir al imputado para que se refiera sobre el particular y prepare su defensa.

Art. 322. Ampliación de la acusación. En el curso del juicio el ministerio público o el querellante puede ampliar la acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia surgido durante el debate, que modifica la calificación legal, constituye una agravante o integra un delito continuo.

En relación con los hechos o circunstancias nuevos atribuidos en la ampliación de la acusación, se invita al imputado a que declare en su defensa y se informa a las partes que pueden ofrecer nuevas pruebas y, de ser necesario, solicitar la suspensión del juicio.

Los hechos o circunstancias nuevos a los cuales se refiere la ampliación, integran la acusación.

Si como consecuencia de la variación de la calificación jurídica, corresponde su conocimiento a un tribunal con competencia para infracciones más gra-

ves, el juicio es interrumpido y comienza desde su inicio ante la jurisdicción competente, salvo que las partes acepten la competencia del tribunal.

La corrección de errores materiales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, puede realizarse en el curso de la misma audiencia, sin que se considere una ampliación de la acusación.

Art. 323. Recepción y exhibición de pruebas. Recibida la declaración del imputado, si la hay, el tribunal procede a recibir las pruebas presentadas por el ministerio público, por el querellante, por la parte civil, por el tercero civilmente responsable y por la defensa, en ese orden, salvo que las partes y el tribunal acuerden alterarlo.

La prueba es recibida en el orden escogido por cada una de las partes, conforme lo hayan comunicado al tribunal y a las demás partes en la preparación del juicio.

Art. 324. Perito. El tribunal puede, a solicitud de parte, siempre que lo estime oportuno y en cuanto sea materialmente posible, ordenar que las operaciones periciales sean realizadas o recreadas en la audiencia.

Antes de iniciar su declaración, el perito es informado sobre sus obligaciones, de la responsabilidad derivada de su incumplimiento y según su creencia prestar juramento o promesa de decir toda la verdad y nada más que la verdad, conforme la ha apreciado a través de sus sentidos y la mantiene en su memoria.

El perito tiene la facultad de consultar documentos, notas y publicaciones durante la presentación de su informe, sin que pueda reemplazarse la declaración por su lectura.

Esta disposición es igualmente aplicable en lo que corresponda a los intérpretes.

Art. 325. Testigo. Antes de declarar, el testigo no debe comunicarse con otros testigos, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en los debates. Después de prestar su declaración, el tribunal puede disponer si continúa en la sala de audiencias o si debe ser aislado.

El incumplimiento de la incomunicación no impide la declaración del testigo, pero el tribunal puede apreciar esta circunstancia al momento de valorar la prueba.

El testigo es informado de sus obligaciones, de la responsabilidad derivada de su incumplimiento y según su creencia presta juramento o promesa de de-

cir toda la verdad y nada más que la verdad, conforme la ha apreciado a través de sus sentidos y la mantiene en su memoria.

El testigo no puede leer ningún proyecto, borrador o apunte.

Art. 326. Interrogatorio. La parte que lo propuso cuestiona directamente a los testigos o peritos sobre sus datos generales, así como sus vínculos con las partes. Excepcionalmente, la identidad o algunos datos de un testigo pueden ser reservados, en interés de proteger su seguridad o la de sus familiares.

Acto seguido se procede al interrogatorio directo por la parte que lo propuso, por las otras partes en el orden establecido, y por el tribunal.

El presidente del tribunal modera el interrogatorio, para evitar que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. En todo caso, vela porque el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes pueden presentar oposición a las decisiones del presidente que limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen.

Art. 327. Declaraciones de menores. Siempre que el interrogatorio pueda perjudicar la serenidad del menor de edad, a petición de parte o de oficio, el tribunal puede disponer una o más de las siguientes medidas:

1. Escuchar su declaración sobre la base de las preguntas presentadas por las partes;
2. La celebración a puertas cerradas de la audiencia;
3. Que el menor declare fuera de la sala de audiencia y que se dispongan los medios técnicos que permitan a las partes y al público presenciar el interrogatorio desde la sala.

Esta decisión puede ser revocada durante el transcurso de la declaración.

El presidente puede auxiliarse de un pariente del menor, de un experto en psicología o de otra ciencia de la conducta.

Art. 328. Incomparecencia. Cuando el perito o el testigo, oportunamente citado no comparece, el presidente, a solicitud de parte, puede ordenar su conducencia por medio de un agente de la fuerza pública, al tiempo de solicitar al proponente que colabore con la diligencia.

La audiencia puede suspenderse sólo cuando su presencia es imprescindible y no se pueda continuar con la recepción de otra prueba.

Si el perito o testigo no puede ser localizado para su conducción por la fuerza pública, el juicio continúa con prescindencia de esa prueba.

Art. 329. Otros medios de prueba. Los documentos y elementos de prueba son leídos o exhibidos en la audiencia, según corresponda, con indicación de su origen.

Las grabaciones y los elementos de prueba audiovisuales son reproducidos.

Las partes y el tribunal pueden acordar, excepcionalmente y por unanimidad, la lectura, exhibición o reproducción parcial de esos medios de prueba, cuando esa lectura o reproducción baste a los fines del debate en el juicio.

Art. 330. Nuevas pruebas. El tribunal puede ordenar, excepcionalmente y a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen circunstancias nuevas que requieren esclarecimiento.

Art. 331. Discusión final y cierre del debate. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concede la palabra, sucesivamente, al fiscal, al querrelante, a la parte civil, al tercero civilmente responsable y al defensor, para que expongan sus conclusiones. Luego otorga al ministerio público y al defensor la posibilidad de replicar, para hacer referencia sólo a las conclusiones formuladas por la parte contraria.

Si la víctima está presente y desea exponer, se le concede la palabra, aunque no se haya constituido en parte ni haya presentado querrela.

Finalmente se le concede la palabra al imputado.

Acto seguido el presidente declara cerrado el debate.

SECCION II. DE LA DELIBERACION Y LA SENTENCIA

Art. 332. Deliberación. Cerrado el debate, los jueces se retiran de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta, en la sala destinada a tal efecto.

La deliberación no puede suspenderse, salvo la enfermedad grave de alguno de los jueces, a menos que el tribunal se haya constituido desde el inicio con un número de miembros superior al mínimo requerido para su integración. La deliberación no puede suspenderse más de tres días, luego de los cuales se procede a reemplazar al tribunal y a realizar el juicio nuevamente.

Art. 333. Normas para la deliberación y la votación. Los jueces que conforman el tribunal aprecian, de un modo integral, cada uno de los elementos de prueba producidos en el juicio, conforme las reglas de la lógica, los co-

nocimientos científicos y las máximas de experiencia, de modo que las conclusiones a que lleguen sean el fruto racional de las pruebas en las que se apoyan y sus fundamentos sean de fácil comprensión. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos. Los jueces pueden fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta cuando existe acuerdo pleno. Los votos disidentes o salvados deben fundamentarse y hacerse constar en la decisión.

Art. 334. Requisitos de la sentencia. La sentencia debe contener:

1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta, el nombre de los jueces y de las partes y los datos personales del imputado;
2. La enunciación del hecho objeto del juicio y su calificación jurídica;
3. El voto de cada uno de los jueces, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los fundan, sin perjuicio de que puedan adherirse a las consideraciones y conclusiones formuladas por quien vota en primer término;
4. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima acreditado judicialmente y su calificación jurídica;
5. La parte dispositiva con mención de las normas aplicables;
6. La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hace constar en el escrito y la sentencia vale sin esa firma.

Art. 335. Redacción y pronunciamiento. La sentencia se pronuncia en audiencia pública "En nombre de la República". Es redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación. Acto seguido, el tribunal se constituye nuevamente en la sala de audiencias. El documento es leído por el secretario en presencia del imputado y las demás partes presentes.

Cuando, por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción de la sentencia, se lee tan sólo la parte dispositiva y uno de los jueces relata de manera resumida al público y a las partes los fundamentos de la decisión. Asimismo, anuncia el día y la hora para la lectura integral, la que se lleva a cabo en el plazo máximo de cinco días hábiles subsiguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia se considera notificada con la lectura integral de la misma. Las partes reciben una copia de la sentencia completa.

Art. 336. Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descri-

tos en la acusación y, en su caso, en su ampliación, salvo cuando favorezcan al imputado.

En la sentencia, el tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica diferente de la contenida en la acusación, o aplicar penas distintas de las solicitadas, pero nunca superiores.

Art. 337. Absolución. Se dicta sentencia absolutoria cuando:

1. No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio;
2. La prueba aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal del imputado;
3. No pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible o el imputado no participó en él;
4. Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal;
5. El ministerio público y el querellante hayan solicitado la absolución.

La sentencia absolutoria ordena la libertad del imputado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos secuestrados que no estén sujetos a decomiso o destrucción, las inscripciones necesarias y fija las costas.

La libertad del imputado se hace efectiva directamente desde la sala de audiencias y se otorga aún cuando la sentencia absolutoria no sea irrevocable o se haya presentado recurso.

Art. 338. Condenatoria. Se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado.

La sentencia fija con precisión las penas que correspondan y, en su caso, determina el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deba cumplir el condenado.

Se unifican las condenas o las penas cuando corresponda.

La sentencia decide también sobre las costas con cargo a la parte vencida y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales civiles. Decide además sobre el decomiso y la destrucción, previstos en la ley.

Art. 339. Criterios para la determinación de la pena. Al momento de fijar la pena, el tribunal toma en consideración los siguientes elementos:

1. El grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho;

2. Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal;
3. Las pautas culturales del grupo al que pertenece el imputado;
4. El contexto social y cultural donde se cometió la infracción;
5. El efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social;
6. El estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena;
7. La gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general.

Art. 340. Perdón judicial. En caso de circunstancias extraordinarias de atenuación, el tribunal puede eximir de pena o reducirla incluso por debajo del mínimo legal, siempre que la pena imponible no supere los diez años de prisión, atendiendo a las siguientes razones:

1. La participación mínima del imputado durante la comisión de la infracción;
2. La provocación del incidente por parte de la víctima o de otras personas;
3. La ocurrencia de la infracción en circunstancias poco usuales;
4. La participación del imputado en la comisión de la infracción bajo coacción, sin llegar a constituir una excusa legal absolutoria;
5. El grado de insignificancia social del daño provocado;
6. El error del imputado en relación al objeto de la infracción o debido a su creencia de que su actuación era legal o permitida;
7. La actuación del imputado motivada en el deseo de proveer las necesidades básicas de su familia o de sí mismo;
8. El sufrimiento de un grave daño físico o psíquico del imputado en ocasión de la comisión de la infracción;
9. El grado de aceptación social del hecho cometido.

Art. 341. Suspensión condicional de la pena. El tribunal puede suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, cuando concurren los siguientes elementos:

1. Que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años;
2. Que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad.

En estos casos se aplican las reglas de la suspensión condicional del procedimiento. La violación de las reglas puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la condena pronunciada.

Art. 342. Condiciones especiales de cumplimiento de la pena. Al momento de fijar la pena, el tribunal debe tomar en consideración las condiciones particulares del imputado que hagan recomendable un régimen especial del cumplimiento de la pena en los casos siguientes:

1. Cuando sobrepasa los setenta años de edad;
2. Cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción;
3. Cuando la imputada se encuentre en estado de embarazo o lactancia;
4. Cuando exista adicción a las drogas o el alcohol.

En estos casos el tribunal puede decidir que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o totalmente en el domicilio del imputado, en un centro de salud mental, geriátrico, clínico o de desintoxicación.

En el caso previsto en el numeral 4, el tribunal puede condicionar el descuento parcial o total de la pena al cumplimiento satisfactorio del programa de desintoxicación por parte del imputado.

Art. 343. Cumplimiento de la pena en el extranjero. En el caso de extranjeros provenientes de países con los cuales exista tratados de cooperación judicial o penitenciaria, el tribunal puede ordenar que la pena sea cumplida total o parcialmente en el país de origen o residencia del imputado.

Art. 344. Corresponsabilidad social. Si el tribunal determina que ha influido en la comisión del hecho la negligencia o el fracaso de programas de asistencia, educación, prevención o resocialización, en especial dirigidos a jóvenes o menores, hará consignar esta circunstancia en la sentencia, con la expresa indicación de que se notifique a las autoridades correspondientes o puede ordenar la publicación de la parte pertinente de la sentencia.

Art. 345. Condena civil. Siempre que se haya demostrado la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción civil accesorio a la penal, la sentencia fija además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que deben ser satisfechas las respectivas obligaciones.

Cuando los elementos probatorios no permiten establecer con certeza los montos de algunas de las partidas reclamadas por la parte civil y no se está en los casos en los cuales se puede valorar prudencialmente, el tribunal puede acogerlos en abstracto para que se liquiden conforme a la presentación de estado que se realiza ante el mismo tribunal, según corresponda.

SECCION III. DEL REGISTRO O ACTA DE AUDIENCIA

Art. 346. Formas del acta de audiencia. El secretario extiende acta de la audiencia, en la cual hace constar:

1. El lugar y fecha de la audiencia, con indicación de la hora de apertura y de cierre, incluyendo las suspensiones y reanudaciones;
2. El nombre de los jueces, las partes y sus representantes;
3. Los datos personales del imputado;
4. Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación de los nombres y demás generales de los peritos, testigos e intérpretes, salvo que el tribunal haya autorizado la reserva de identidad de alguno de ellos; la referencia de las actas y documentos o elementos de prueba incorporados por lectura y de los otros elementos de prueba reproducidos, con mención de las conclusiones de las partes;
5. Las solicitudes formuladas, las decisiones adoptadas en el curso del juicio y las oposiciones de las partes;
6. El cumplimiento de las formalidades básicas y la constancia de la publicidad o si ella fue restringida total o parcialmente;
7. Las otras menciones prescritas por la ley que el tribunal adopte, de oficio o a solicitud de las partes, cuando sea de interés dejar constancia inmediata de algún acontecimiento o del contenido de algún elemento esencial de la prueba;
8. La constancia de la lectura de la sentencia;
9. La firma del secretario.

En los casos de prueba compleja, el tribunal puede ordenar el registro literal de la audiencia, mediante cualquier método, pero estos registros no pueden ser usados como prueba en desmedro de los principios de inmediación y oralidad.

Art. 347. Valor de los registros. El acta y la grabación tienen por objeto demostrar, en principio, el modo en que se desarrolla el juicio, la observancia de las formalidades de ley, las partes intervinientes y los actos agotados en su curso.

La falta o insuficiencia del registro no produce por sí misma un motivo de impugnación de la sentencia. En ese caso, se puede recurrir a otros medios de prueba para acreditar un vicio que invalida la decisión.

En el recurso de impugnación que corresponda se hace constar la omisión o falsedad que sirve de fundamento al mismo.

**SECCION IV.
DIVISION DEL JUICIO**

Art. 348. División del juicio. En los casos en que la pena imponible pueda superar los diez años de prisión, el tribunal, a petición de la defensa, puede dividir el juicio en dos partes. En la primera se trata todo lo relativo a la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado, y en la segunda, lo relativo a la individualización de la sanción aplicable.

Es inadmisibile la revelación de prueba sobre los antecedentes y la personalidad del imputado en la primera parte del juicio.

En los demás casos, a petición de parte, el tribunal también puede dividir informalmente la producción de la prueba en el juicio y el debate, conforme a las reglas que anteceden, permitiendo una discusión diferenciada sobre ambas cuestiones, pero dictando una decisión única, conforme lo previsto para la sentencia.

Art. 349. Juicio sobre la pena. En los casos que procede la división del juicio, al dictar la sentencia que establece la culpabilidad del imputado, el presidente fija el día y la hora del debate sobre la pena, que no puede celebrarse ni antes de diez ni después de veinte días, y dispone la realización del informe previsto en el artículo 351.

Las partes ofrecen prueba en el plazo de cinco días a partir de la lectura de la sentencia.

Art. 350. Desarrollo del debate. El debate sobre la pena se realiza conforme a las reglas del juicio. El presidente concede la palabra a las partes para que aleguen sobre la pena aplicable. El imputado puede presentar pruebas de circunstancias atenuantes, aunque no estén previstas en la ley.

Art. 351. Informes obligatorios. El tribunal, antes del fallo sobre la pena, debe tener ante sí un informe que le es rendido sobre la base de una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historia social del imputado convicto y del efecto económico, emocional y físico que ha provocado en la víctima y su familia la comisión de la infracción, que le permita emitir la decisión.

Art. 352. Reglas del informe. La investigación para los informes sobre la pena se rige por las siguientes reglas:

1. No se puede obligar al imputado a suministrar información;

2. Los jueces no pueden considerar el informe sino hasta el momento de la vista sobre la pena;
3. Antes de considerar el informe, los jueces deben leerlo al imputado a fines de verificar la fidelidad de su contenido, respecto de la información suministrada por éste;
4. El informe se anexa al acta de la vista.

El informe debe concluirse por lo menos dos días antes de la celebración del debate sobre la pena. En caso de que el informe no sea suministrado para la época del debate, el tribunal puede suspender por una única vez la vista sobre la pena por un plazo no mayor de cinco días. Si el informe no es presentado, el juez o tribunal falla prescindiendo de su examen.

Las partes tienen acceso a los informes, a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba.

Art. 353. Deliberación y decisión. Al concluir el debate y examen de la prueba para la determinación de la pena, los jueces pasan de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta, sin que pueda suspenderse la deliberación hasta que logren, conforme las reglas de valoración de la prueba, individualizar la pena, conforme a los criterios de determinación establecidos en este código.

El fallo se adopta por mayoría. De no producirse ésta en relación a la cuantía de la pena, se aplica el término medio. Acto seguido, los jueces regresan a la sala de audiencias y quien presida, da lectura al fallo, en el cual se explican los elementos considerados para alcanzar la solución contenida en el mismo, en términos comprensibles para el común de las personas y se completa la sentencia, conforme a las reglas previstas. El pronunciamiento del fallo no puede ser postergado.

La sentencia se pronuncia conforme a lo establecido en el artículo 335.

LIBRO II PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TITULO I. PROCEDIMIENTO POR CONTRAVENCIONES

Art. 354. Requerimiento. El juzgamiento de las contravenciones se inicia con la presentación de la acusación de la víctima o del ministerio público

o la solicitud del funcionario a quien la ley le atribuye la facultad para comprobarlas y perseguirlas. La acusación o requerimiento de enjuiciamiento debe contener:

1. La identificación del imputado y su domicilio;
2. La descripción sucinta del hecho atribuido consignando el tiempo, lugar de comisión u omisión;
3. La cita de las normas legales infringidas;
4. La indicación de los elementos de prueba, acompañando los documentos y los objetos entregados o secuestrados;
5. La identificación y firma del solicitante.

Basta como requerimiento, un formulario en el que se consignen los datos antes mencionados. La acusación de la víctima puede presentarse oralmente y sin indicar las normas legales infringidas, las cuales son precisadas por el juez al inicio del juicio.

Art. 355. Citación a juicio. Sin perjuicio de que las partes puedan comparecer voluntariamente, la víctima, el ministerio público o el funcionario competente deben citar al imputado con indicación del juez o tribunal, la fecha y la hora de la comparecencia.

Art. 356. Juicio. Recibida la acusación o requerimiento, el juez, si no ha intervenido una citación previa, convoca a las partes a juicio inmediatamente y siempre dentro de los tres días siguientes. El imputado, al inicio del juicio, manifiesta si admite su culpabilidad. De lo contrario se continúa con la audiencia, en cuyo caso el imputado puede ofrecer prueba o solicitar las diligencias que considere pertinentes para su defensa.

El juicio se realiza en una sola audiencia, aplicando las reglas del procedimiento común, adaptadas a la brevedad y sencillez. La conciliación procede en todo momento.

La sentencia se hace constar en el acta de la audiencia.

Art. 357. Defensa. El imputado puede designar un defensor, pero no son aplicables en esta materia las normas sobre la defensa pública.

Art. 358. Medidas de coerción. No se aplican medidas de coerción, salvo el arresto, el cual no puede exceder en ningún caso las doce horas.

TITULO II. PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES DE ACCION PRIVADA

Art. 359. Acusación. En las infracciones de acción penal privada, la víctima presenta su acusación, por sí o por apoderado especial, conforme lo previsto en este código.

Art. 360. Auxilio judicial previo. Cuando la víctima no ha podido identificar o individualizar al imputado, o determinar su domicilio, o cuando para describir de modo claro, preciso y circunstanciado el hecho punible se hace necesario realizar diligencias que la víctima no puede agotar por sí misma, requiere en la acusación el auxilio judicial, con indicación de las medidas que estime pertinentes.

El juez ordena a la autoridad competente que preste el auxilio, si corresponde. Luego, la víctima completa su acusación dentro de los cinco días de obtenida la información faltante.

Art. 361. Conciliación. Admitida la acusación, el juez convoca a una audiencia de conciliación dentro de los diez días.

La víctima y el imputado pueden acordar la designación de un amigable componedor o mediador para que dirija la audiencia.

Si no se alcanza la conciliación, el juez convoca a juicio conforme las reglas del procedimiento común, sin perjuicio de que las partes puedan conciliar en cualquier momento previo a que se dicte la sentencia.

Art. 362. Abandono de acusación. Además de los casos previstos en este código, se considera abandonada la acusación y extinguida la acción penal cuando:

1. La víctima o su mandatario no comparece a la audiencia de conciliación, sin causa justificada;
2. Cuando fallecida o incapacitada la víctima, el procedimiento no es proseguido por sus continuadores jurídicos o representantes legales, dentro de los treinta días subsiguientes a la muerte o incapacidad.

TITULO III. PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO

CAPTULO I ACUERDO PLENO

Art. 363. Admisibilidad. En cualquier momento previo a que se ordene la apertura de juicio, el ministerio público puede proponer la aplicación del juicio penal abreviado cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. Se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima igual o inferior a cinco años de pena privativa de libertad, o una sanción no privativa de libertad;
2. El imputado admite el hecho que se le atribuye y consiente la aplicación de este procedimiento, acuerda sobre el monto y tipo de pena y sobre los intereses civiles;
3. El defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento de modo voluntario e inteligente sobre todos los puntos del acuerdo.

La existencia de co-imputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

Art. 364. Procedimiento. Cumplidos los requisitos previstos en el artículo anterior, el ministerio público presenta la acusación con indicación de la pena solicitada.

Si admite la solicitud, el juez convoca a las partes a una audiencia, en la que les requiere que funden sus pretensiones. Escucha al querellante, al ministerio público y al imputado y dicta la resolución que corresponde.

El juez puede absolver o condenar, según proceda, y resuelve sobre los intereses civiles.

Si condena, la pena impuesta no puede superar la requerida en la acusación ni agravar el régimen de cumplimiento solicitado.

La sentencia contiene los requisitos previstos en este código, aunque de un modo sucinto y es apelable.

Art. 365. Inadmisibilidad. Si el juez no admite la aplicación del juicio penal abreviado, ordena al ministerio público que continúe el procedimiento. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al ministerio público durante el juicio, ni la admisión de los hechos por parte del imputado puede ser considerada como reconocimiento de culpabilidad.

CAPITULO II ACUERDO PARCIAL

Art. 366. Admisibilidad. En cualquier caso las partes pueden acordar exclusivamente sobre los hechos y solicitar un juicio sobre la pena.

Esta solicitud se hace directamente al juez o tribunal que debe conocer del juicio, y contiene el ofrecimiento de prueba para la determinación de la pena.

Art. 367. Procedimiento. El juez o tribunal convoca a las partes a una audiencia para verificar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación y proveer o rechazar el ofrecimiento de prueba para el juicio sobre la pena. Se sustancia de conformidad a las reglas previstas para la división del juicio.

Art. 368. Decisión. Concluida la audiencia, el juez o tribunal declara la absolución o culpabilidad del imputado, admite la prueba ofrecida, y fija el día y la hora para la continuación del debate sobre la pena.

TITULO IV. PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS COMPLEJOS

Art. 369. Procedencia. Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, a solicitud del ministerio público titular, antes de la presentación de cualquier requerimiento conclusivo, el juez puede autorizar, por resolución motivada, la aplicación de las normas especiales previstas en este título. La decisión rendida es apelable.

Art. 370. Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, produce los siguientes efectos:

1. El plazo máximo de duración del proceso es de cuatro años;
2. El plazo ordinario de la prisión preventiva se extiende hasta un máximo de dieciocho meses y, en caso de haber recaído sentencia condenatoria, hasta seis meses más;
3. El plazo acordado para concluir el procedimiento preparatorio es de ocho meses, si se ha dictado la prisión preventiva o el arresto domiciliario, y de doce meses si se ha dictado cualquier otra de las medidas de coerción previstas en el artículo 226. La prórroga puede ser de cuatro meses más;

4. Cuando la duración del debate sea menor de treinta días, el plazo máximo de la deliberación se extiende a cinco días y el de la redacción de la motivación de la sentencia a diez. Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos son de diez y veinte días respectivamente.
5. Los plazos para la presentación de los recursos se duplican.
6. Permite al ministerio público solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita. En este caso, la aplicación del criterio de oportunidad debe ser autorizada por sentencia del juez o tribunal competente.

En todos los casos rigen las normas de retardo de justicia.

Art. 371. Producción de prueba masiva. Cuando se trate de un caso con pluralidad de víctimas o sea indispensable el interrogatorio de numerosos testigos, el ministerio público puede solicitar al juez que le autorice a realizar los interrogatorios.

El ministerio público registra por cualquier medio los interrogatorios y presenta un informe que sintetiza objetivamente las declaraciones. Este informe puede ser introducido al debate por su lectura. Sin perjuicio de lo anterior el imputado puede requerir la presentación de cualquiera de los entrevistados.

Cuando el juez o tribunal advierte que un gran número de querellantes concurren por separado en idénticos intereses, puede ordenar la unificación de la querrela. Unificada la querrela, interviene un representante común de todos los querellantes.

Art. 372. Investigadores bajo reserva. El ministerio público puede solicitar al juez que se autorice la reserva de identidad de uno o varios de sus investigadores cuando ello sea manifiestamente útil para el desarrollo de la investigación.

El juez fija el plazo de la reserva de identidad. Este plazo sólo puede prorrogarse si se renuevan los fundamentos de la solicitud.

En ningún caso el plazo de reserva de identidad puede superar los seis meses.

Concluido el plazo, el ministerio público presenta al juez un informe del resultado de estas investigaciones, revelando la identidad de los investigadores, quienes pueden ser citados como testigos al juicio.

El ministerio público solicitante es responsable directo de la actuación de tales investigadores.

Art. 373. Acusador adjunto. En los casos complejos, el Procurador General de la República puede contratar los servicios de uno o dos abogados particulares que cumplan con las condiciones de ley para ejercer las funciones de ministerio público, para que actúen como acusadores adjuntos con iguales facultades y obligaciones del funcionario al cual acompañan.

TITULO V. PROCEDIMIENTO PARA INIMPUTABLES

Art. 374. Procedencia. Cuando en razón de particulares circunstancias personales del imputado el ministerio público o el querellante estiman que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad, solicitan este procedimiento, en las formas y condiciones previstas para la acusación, con indicación de los antecedentes y circunstancias que motivan la solicitud. El imputado puede solicitar la aplicación de este procedimiento.

Art. 375. Reglas especiales. El procedimiento se rige por las reglas comunes, salvo las excepciones establecidas a continuación:

1. Cuando el imputado es incapaz, sus facultades son ejercidas por su representante legal, o en su defecto por la persona que designe el juez o tribunal, con quien se desarrollan todas las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal;
2. En el caso previsto en el numeral anterior, el representante legal del imputado o el designado en su defecto, puede manifestar cuanto estime conveniente para la defensa de su representado;
3. Este procedimiento no puede ser tramitado conjuntamente con uno común;
4. El juicio se realiza a puertas cerradas, sin la presencia del imputado, cuando es imposible a causa de su estado de salud o resulta inconveniente por razones de orden, caso en el cual es representado a todos los efectos por su representante legal;

5. La sentencia tiene por objeto disponer la absolución o la aplicación de una medida de seguridad;
6. No son aplicables las reglas referidas al juicio penal abreviado, ni las de suspensión condicional del procedimiento.

Art. 376. Rechazo. El juez o tribunal puede rechazar la aplicación del procedimiento especial por entender que no se trata de un imputable y corresponde la aplicación del procedimiento común.

TITULO VI. COMPETENCIA ESPECIAL

Art. 377. Privilegio de jurisdicción. En los casos cuyo conocimiento en primera o única instancia compete excepcionalmente a las Cortes de Apelación o a la Suprema Corte de Justicia en razón de la función que desempeña el imputado, se aplica el procedimiento común, salvo las excepciones previstas en este título.

Art. 378. Investigación. La investigación de los hechos punibles atribuidos a imputados con privilegio de jurisdicción es coordinada por el ministerio público competente ante la corte que ha de conocer del caso en primera o única instancia, sin perjuicio de la intervención de otros funcionarios del ministerio público.

Art. 379. Juez de la instrucción. Las funciones de juez de la instrucción son cumplidas por un juez de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, según compete, designado especialmente por el presidente de la corte correspondiente. En caso de apertura a juicio, el juez designado no puede integrar el tribunal.

Art. 380. Recursos. Las apelaciones procedentes sobre decisiones del procedimiento preparatorio se sustancian por la Corte de Apelación o por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, según el caso.

El conocimiento de la apelación de las sentencias de la Corte de Apelación compete a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

El conocimiento del recurso de casación corresponde en todos los casos al pleno de la Suprema Corte de Justicia.

TITULO VII. EL HABEAS CORPUS

Art. 381. Procedencia. Toda persona privada o cohibida en su libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viere inminentemente amenazada de serlo, tiene derecho, a petición suya o de cualquier persona en su nombre, a un mandamiento de hábeas corpus con el fin de que el juez o tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la medida de privación de libertad o de tal amenaza.

No procede el hábeas corpus cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de las medidas de coerción.

Art. 382. Solicitud. La solicitud de mandamiento de hábeas corpus no está sujeta a formalidad alguna y puede ser presentada por escrito firmado o por declaración en secretaría, por la persona de cuya libertad se trate o por su representante, en lo posible con indicación de:

1. El nombre de la persona en cuyo favor se solicita;
2. El lugar en donde se encuentre;
3. El nombre o designación del funcionario o la persona que haya adoptado la medida de privar, cohibir o amenazar en su libertad física a otra o el encargado del recinto en el cual se encuentre;
4. Una breve exposición de las razones por las que se invoca, que la medida que le priva, cohibe o amenaza en su libertad es ilegal;
5. La mención de que no existen recursos ordinarios ni es posible la revisión de la medida conforme a las reglas de este código.

Esta solicitud puede ser presentada cualquier día.

Art. 383. Mandamiento. Presentada la solicitud de hábeas corpus, si procede, el juez o tribunal ordena la presentación inmediata del impetrante. Una vez oído el impetrante, resuelve inmediatamente sobre la acción o fija una audiencia sin demora innecesaria, siempre dentro de las cuarentiocho horas siguientes para lo cual dispondrá que el funcionario demandado comparezca a los fines de que exponga los motivos legales que justifiquen su actuación.

Art. 384. Ejecutoriedad. El mandamiento de hábeas corpus debe ser cumplido y ejecutado, sin que haya lugar a su desconocimiento por defectos formales.

Cualquier persona a quien se haya entregado el mandamiento se considera como su destinatario, aún cuando se haya dirigido con un nombre o generales equivocados o a otra persona, siempre que bajo su guarda o disposición se en-

cuentre la persona en cuyo favor se expide o le haya sido encargada la ejecución de un arresto que se pretenda ilegal.

Art. 385. Desacato. Si el funcionario a quien se le dirige un mandamiento de hábeas corpus no presenta a la persona en cuyo favor se expide, sin alegar una causa de fuerza mayor, es conducido en virtud de una orden general de captura expedida por el juez o tribunal.

Art. 386. Audiencia y decisión. En la audiencia de hábeas corpus, la cual no puede suspenderse por motivo alguno, el juez o tribunal escucha a los testigos e interesados, examina los documentos, aprecia los hechos alegados y dispone en el acto que la persona privada o cohibida en su libertad o amenazada de serlo, sea puesta en libertad o el cese de la persecución, si no han sido cumplidas las formalidades que este código establece. En los demás casos, rechaza la solicitud.

Art. 387. Ejecutoriedad. Decretada la libertad o el cese de la medida que la amenaza, ningún funcionario puede negarse a cumplir lo dispuesto por el juez o tribunal, bajo pretexto alguno.

El funcionario que se niegue a cumplir, retarde o ejecute negligentemente la libertad decretada en virtud de un mandamiento de hábeas corpus, se hace reo de encierro ilegal y procede su destitución y persecución penal por este hecho, sin perjuicio de la acción civil por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Art. 388. Ocultamiento o secuestro. Toda persona que tenga bajo su custodia a otra en cuyo favor se ha emitido un mandamiento de hábeas corpus, que con intención de eludir el cumplimiento del mismo, o para anular sus efectos, traslade a la persona privada de su libertad a la custodia o poder de otra, u oculte o cambie el lugar de arresto o custodia; y el que a sabiendas contribuye a la realización de estos actos, incurre en encierro ilegal, procede su destitución si se trata de funcionario público, y en todo caso su persecución por estos hechos, sin perjuicio de la acción civil por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Art. 389. Amenaza de traslado al extranjero. Siempre que un juez o tribunal autorizado para librar mandamiento de hábeas corpus tenga conocimiento de que una persona está ilegalmente privada de su libertad y existan mo-

tivos suficientes para suponer que pueda ser trasladada fuera de la República, expide las órdenes y resoluciones para impedirlo, dirigiéndolas a las personas que estime oportuno, y que se conduzca inmediatamente a la presencia del juez o tribunal, para que se proceda de conformidad con este código y las demás leyes que corresponda.

En este caso, si la persona que tiene a otra privada de su libertad o bajo su custodia, es encontrada, se le notifica la orden, la cual surte a su respecto los mismos efectos que el mandamiento de hábeas corpus y está obligado a satisfacerlo. Este artículo no se aplica cuando hay un procedimiento de extradición en curso.

Art. 390. Solidaridad. En todos los casos en que en este título se pone a cargo de funcionarios públicos el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, el Estado es solidariamente responsable para el pago de esas indemnizaciones.

Art. 391. Exención. La solicitud de hábeas corpus está exenta del pago de cualesquiera impuestos, tasas, valores, derechos, cargas o tributos.

Art. 392. Supletoriedad del procedimiento ordinario. En cuanto sean compatibles y a falta de una regla específica, se aplican a los procedimientos especiales previstos en este libro las normas del procedimiento ordinario.

LIBRO III DE LOS RECURSOS

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 393. Derecho de recurrir. Las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. El derecho de recurrir corresponde a quienes le es expresamente acordado por la ley.

Las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables.

Art. 394. Recurso del imputado. El defensor puede recurrir por el imputado.

El imputado tiene el derecho de recurrir aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso.

Art. 395. Recurso del ministerio público. El ministerio público sólo puede presentar recurso contra aquellas decisiones que sean contrarias a su requerimiento o conclusiones.

Sin embargo, cuando proceda en interés de la justicia, el ministerio público puede recurrir en favor del imputado.

Art. 396. Recurso de la víctima y la parte civil. La víctima, aunque no se haya constituido en parte, puede recurrir las decisiones que pongan fin al proceso.

El querellante y la parte civil pueden recurrir las decisiones que le causen agravio, independientemente del ministerio público. En el caso de las decisiones que se producen en la fase de juicio sólo las pueden recurrir si participaron en él.

Art. 397. Recurso del tercero civilmente responsable. El tercero civilmente responsable puede recurrir las decisiones que declaren su responsabilidad.

Art. 398. Desistimiento. Las partes o sus representantes pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero tienen a su cargo las costas.

El defensor no puede desistir del recurso sin autorización expresa y escrita del imputado.

Art. 399. Condición de presentación. Los recursos se presentan en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica y motivada de los puntos impugnados de la decisión.

Art. 400. Competencia. El recurso atribuye al tribunal que decide el conocimiento del proceso, exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados. Sin embargo, tiene competencia para revisar, en ocasión de cualquier recurso, las cuestiones de índole constitucional, aún cuando no hayan sido impugnadas por quien presentó el recurso.

Art. 401. Suspensión. La presentación del recurso suspende la ejecución

de la decisión durante el plazo para recurrir y mientras la jurisdicción apoderada conoce del asunto, salvo disposición legal expresa en contrario.

Art. 402. Extensión. Cuando existen co-imputados, el recurso presentado por uno de ellos favorece a los demás, a menos que se base en motivos exclusivamente personales.

En caso de acumulación de causas por hechos punibles diversos, el recurso deducido por un imputado favorece a todos, siempre que se base en la inobservancia de normas procesales que afecten también a los otros y no en motivos exclusivamente personales.

Art. 403. Prohibición. Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión recurrida no pueden conocer del recurso, salvo el caso de la oposición, ni intervenir en el conocimiento del nuevo juicio, cuando éste procede.

Art. 404. Perjuicio. Cuando la decisión sólo es impugnada por el imputado o su defensor, no puede ser modificada en su perjuicio. Si se ordena la celebración de un nuevo juicio, no puede imponérsele una pena más grave.

Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permiten modificar o revocar la decisión en favor del imputado.

Art. 405. Rectificación. Los errores de derecho en la fundamentación de la decisión impugnada que no influyan en la parte dispositiva, no la anulan, pero son corregidos, del mismo modo que los errores materiales en la denominación o el cómputo de las penas.

Art. 406. Normas supletorias. Cuando en ocasión del conocimiento de un recurso, se ordena la realización de una audiencia, se aplican las normas relativas al juicio.

TITULO II. DE LA OPOSICION

Art. 407. Procedencia. El recurso de oposición procede solamente contra las decisiones que resuelven un trámite o incidente del procedimiento, a fin de que el juez o tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión

y dicte la decisión que corresponda, modificando, revocando o ratificando la impugnada.

Art. 408. Oposición en audiencia. En el transcurso de las audiencias, la oposición es el único recurso admisible, el cual se presenta verbalmente, y es resuelto de inmediato sin que se suspenda la audiencia.

Art. 409. Oposición fuera de audiencia. Fuera de la audiencia, la oposición procede solamente contra las decisiones que no son susceptibles del recurso de apelación. Se presenta por escrito motivado, dentro de los tres días que siguen a la notificación de la decisión. El tribunal resuelve dentro del plazo de tres días mediante decisión que es ejecutoria en el acto.

TITULO III. DE LA APELACION

Art. 410. Decisiones recurribles. Son recurribles ante la Corte de Apelación sólo las decisiones del juez de paz o del juez de la instrucción señaladas expresamente por este código.

Art. 411. Presentación. La apelación se formaliza presentando un escrito motivado en la secretaría del juez que dictó la decisión, en el término de cinco días a partir de su notificación.

Para acreditar el fundamento del recurso, el apelante puede presentar prueba, indicando con precisión lo que se pretende probar.

La presentación del recurso no paraliza la investigación ni los procedimientos en curso.

Art. 412. Comunicación a las partes y remisión. Presentado el recurso, el secretario lo notifica a las demás partes para que lo contesten por escrito depositado en la secretaría del tribunal dentro de un plazo de tres días y, en su caso, promuevan prueba.

El secretario, sin más trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo anterior, remite las actuaciones a la Corte de Apelación, para que ésta decida.

Con los escritos del recurso se forma un registro particular, el cual sólo contiene copia de las actuaciones pertinentes.

Excepcionalmente, la Corte de Apelación puede solicitar otras copias u otras piezas o elementos comprendidos en el registro original, cuidando de no demorar por esta causa el procedimiento.

Art. 413. Procedimiento. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelación, dentro de los diez días siguientes, decide sobre la admisibilidad del recurso y resuelve sobre la procedencia de la cuestión planteada en una sola decisión.

Si alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte de Apelación la estima necesaria y útil, fija una audiencia oral dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, resuelve y pronuncia la decisión al concluir ésta.

El que haya promovido prueba tiene la carga de su presentación en la audiencia. El secretario lo auxilia expidiendo las citaciones u órdenes necesarias, que serán diligenciadas por quien haya propuesto la medida.

Art. 414. Procedimiento especial. Cuando se recurra una decisión que declara la procedencia de la prisión preventiva o del arresto domiciliario, o rechace su revisión o sustitución por otra medida, el juez envía de inmediato las actuaciones y la corte fija una audiencia para conocer del recurso. Esta audiencia se celebra dentro de las cuarentiocho horas contadas a partir de la presentación del recurso, si el juez o tribunal tiene su sede en el distrito judicial en que tiene su asiento la Corte de Apelación, o en el término de setenta y dos horas, en los demás casos. Al final de la audiencia resuelve sobre el recurso.

Art. 415. Decisión. La Corte de Apelación resuelve, mediante decisión motivada, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes. Al decidir, la Corte de Apelación puede:

1. Desestimar el recurso, en cuyo caso la decisión es confirmada; o
2. Declarar con lugar el recurso, en cuyo caso revoca o modifica parcial o totalmente la decisión y dicta una propia sobre el asunto.

TITULO IV. APELACION DE LA SENTENCIA

Art. 416. Decisiones recurribles. El recurso de apelación es admisible contra la sentencia de absolución o condena.

Art. 417. Motivos. El recurso sólo puede fundarse en:

1. La violación de normas relativas a la oralidad, intermediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio;
2. La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral;
3. El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión;
4. La violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.

Art. 418. Presentación. La apelación se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días a partir de su notificación. En el escrito de apelación se expresa concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida. Fuera de esta oportunidad, no puede aducirse otro motivo.

Para acreditar un defecto del procedimiento el recurso versará sobre la omisión, inexactitud o falsedad del acta del debate o de la sentencia, para lo cual el apelante presenta prueba en el escrito, indicando con precisión lo que pretende probar.

Art. 419. Comunicación a las partes y remisión. Presentado el recurso, el secretario lo notifica a las demás partes para que lo contesten por escrito depositado en la secretaría del tribunal dentro de un plazo de cinco días y, en su caso, presenten prueba.

El secretario, sin más trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo anterior, remite las actuaciones a la Corte de Apelación, para que ésta decida.

Art. 420. Procedimiento. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelación, dentro de los diez días siguientes, si estima admisible el recurso, fija una audiencia que debe realizarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez.

La parte que haya ofrecido prueba en ocasión del recurso, tiene la carga de su presentación en la audiencia.

Si la producción de la prueba amerita una actuación conminatoria, el secretario de la Corte de Apelación, a solicitud del recurrente, expide las citaciones u órdenes que sean necesarias.

Art. 421. Audiencia. La audiencia se celebra con las partes que comparecen y sus abogados, quienes debaten oralmente sobre el fundamento del recurso.

En la audiencia, los jueces pueden interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso.

La Corte de Apelación resuelve, motivadamente, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes.

Decide al concluir la audiencia o, en caso de imposibilidad por la complejidad del asunto, dentro de los diez días siguientes.

Art. 422. Decisión. Al decidir, la Corte de Apelación puede:

1. Rechazar el recurso, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada; o
2. Declarar con lugar el recurso, en cuyo caso:
 - 2.1. Dicta directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, y cuando resulte la absolución o la extinción de la pena, ordena la libertad si el imputado está preso; o
 - 2.2. Ordena la celebración total o parcial de un nuevo juicio ante un tribunal distinto del que dictó la decisión, del mismo grado y departamento judicial, cuando sea necesario realizar una nueva valoración de la prueba.

Art. 423. Doble exposición. Si se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra de un imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno.

Art. 424. Libertad del imputado. Cuando por efecto de la decisión del recurso debe cesar la privación de libertad del imputado, la Corte de Apelación ordena su libertad, la cual se ejecuta en la misma sala de audiencias, si está presente.

TITULO V. DE LA CASACION

Art. 425. Decisiones recurribles. La casación es admisible contra las sentencias de la Corte de Apelación, las decisiones que ponen fin al procedimiento, o deniegan la extinción o suspensión de la pena.

Art. 426. Motivos. El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos:

1. Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años;
2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia;
3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada;
4. Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión.

Art. 427. Procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento y la decisión sobre este recurso, se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos.

TITULO VI. DE LA REVISION

Art. 428. Casos. Puede pedirse la revisión contra la sentencia definitiva firme de cualquier jurisdicción, siempre que favorezca al condenado, en los casos siguientes:

1. Cuando después de una sentencia condenatoria por el homicidio de una persona, su existencia posterior a la época de su presunta muerte resulta demostrada por datos que constituyan indicios suficientes;
2. Cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola;
3. Cuando la prueba documental o testimonial en que se basó la sentencia es declarada falsa en fallo posterior firme;
4. Cuando después de una condenación sobreviene o se revela algún hecho, o se presenta algún documento del cual no se conoció en los debates, siempre que por su naturaleza demuestren la inexistencia del hecho;
5. Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces, cuya existencia sea declarada por sentencia firme;

6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o corresponda aplicar una ley penal más favorable;
7. Cuando se produzca un cambio jurisprudencial en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que favorezca al condenado.

Art. 429. Titularidad. El derecho a pedir la revisión pertenece:

1. Al Procurador General de la República;
2. Al condenado, su representante legal o defensor;
3. Después de la muerte del condenado, a su cónyuge, conviviente, a sus hijos, a sus padres o hermanos, a sus legatarios universales o a título universal, y a los que el condenado les haya confiado esa misión expresa;
4. A las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria o postpenitenciaria;
5. Al juez de la ejecución de la pena, cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, o en caso de cambio jurisprudencial.

Art. 430. Presentación. El recurso de revisión se presenta por escrito motivado, con indicación de los textos legales aplicables. Junto con el escrito, el recurrente ofrece la prueba pertinente y, en lo posible, agrega la prueba documental o designa el lugar donde ésta puede ser requerida.

Art. 431. Competencia. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es el órgano competente para conocer de los recursos de revisión.

Art. 432. Procedimiento. En los casos en que admite el recurso, la Suprema Corte de Justicia, si lo estima necesario para decidir sobre el recurso, procede directamente o por delegación en uno de sus miembros a la práctica de toda medida de investigación que estime pertinente y celebra audiencia.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, en caso de que estime reunidos suficientes elementos para emitir fallo, decide sobre el escrito y las pruebas que le acompañan.

Art. 433. Suspensión. Durante la tramitación del recurso, la Suprema Corte de Justicia puede suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad provisional del condenado o la aplicación de una medida de coerción.

Art. 434. Decisión. Al resolver la revisión, La Suprema Corte de Justicia, puede rechazar el recurso, en cuyo caso la sentencia atacada queda confirmada; o anular la sentencia. En este último caso, la Suprema Corte de Justicia:

1. Dicta directamente la sentencia del caso, cuando resulte la absolución o la extinción de la pena, en cuyo caso ordena la libertad del condenado, si está preso; u ordena la rebaja procedente, cuando la ley haya disminuido la pena establecida;
2. Ordena la celebración de un nuevo juicio, cuando es necesaria una nueva valoración de la prueba.

En el nuevo juicio no se puede absolver ni modificar la sentencia como consecuencia de una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso anterior, con prescindencia de los motivos que tomaron admisible la revisión. La sentencia que se dicte en el nuevo juicio no puede contener una pena más grave que la impuesta en la primera sentencia.

Cuando la sentencia es absolutoria, el recurrente puede exigir su publicación en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación nacional, así como la restitución, por quien las percibió, de las sumas pagadas por concepto de multas, costas y daños y perjuicios.

Art. 435. Rechazo y nueva presentación. Tras la negativa de la revisión o la sentencia confirmatoria de la recurrida, el recurso puede ser interpuesto nuevamente si se funda en motivos distintos.

Las costas de una revisión rechazada están a cargo del recurrente.

LIBRO IV EJECUCION

TITULO I. EJECUCION PENAL

CAPTULO I NORMAS GENERALES

Art. 436. Derechos. El condenado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y este código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley.

Art. 437. Control. El juez de ejecución controla el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se suscitan durante la ejecución. Las solicitudes planteadas se resuelven conforme el procedimiento de los incidentes de este título.

El juez de la ejecución dispone las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y puede hacer comparecer ante sí a los condenados o a los encargados de los establecimientos, con fines de vigilancia y control.

Dicta, aun de oficio, las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe en el funcionamiento del sistema, y ordena a la autoridad competente para que en el mismo sentido expida las resoluciones necesarias.

También controla el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, según los informes recibidos y, en su caso, los transmite al juez competente para su revocación o para la declaración de la extinción de la acción penal.

Art. 438. Ejecutoriedad. Sólo la sentencia condenatoria irrevocable puede ser ejecutada.

Desde el momento en que ella es irrevocable, se ordenan las comunicaciones e inscripciones correspondientes y el secretario del juez o tribunal que la dictó remite la sentencia al juez de la ejecución para que proceda según este título.

Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remite la orden de ejecución del fallo al establecimiento en donde debe cumplirse la condena.

Si se halla en libertad, se dispone lo necesario para su comparecencia o captura.

El juez ordena la realización de todas las medidas necesarias para cumplir los efectos accesorios de la sentencia.

Art. 439. Prescripción de las penas. Las penas señaladas para hechos punibles prescriben:

1. A los diez años para las penas privativas de libertad superiores a cinco años;
2. A los cinco años, para las penas privativas de libertad iguales o menores de cinco años;
3. Al año, para las contravenciones y penas no privativas de libertad.

La prescripción de la pena se computa a partir del pronunciamiento de la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena.

CAPITULO II PROCEDIMIENTO

Art. 440. Cómputo definitivo. El juez de ejecución revisa el cómputo de la pena dispuesto en la sentencia, tomando en cuenta la privación de libertad sufrida por el imputado desde el día de su arresto para determinar con precisión la fecha en que finaliza la condena, y en su caso, la fecha a partir de la cual el imputado puede solicitar su libertad condicional o su rehabilitación.

El cómputo es siempre reformable, aún de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario.

Art. 441. Unificación de penas o condenas. Corresponde al juez de ejecución, de oficio o a solicitud de parte, la unificación de las penas o condenas en los casos previstos en el Código Penal, conforme el trámite de los incidentes.

Cuando la unificación pueda modificar sustancialmente la cuantía, monto o régimen de cumplimiento de la pena, el juez de ejecución, a solicitud de parte, realiza un nuevo juicio sobre la pena.

Art. 442. Incidentes. El ministerio público o el condenado pueden plantear incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena. Las solicitudes de los condenados no están sujetas a ninguna formalidad, pueden ser presentadas directamente por el condenado o por cualquier persona en su favor, o a través de la autoridad administrativa. En este último caso, el funcionario que recibe la solicitud debe transmitirla inmediatamente al juez de ejecución penal.

Notificados los interesados, el juez de la ejecución resuelve los incidentes, salvo que haya prueba que producir, en cuyo caso convoca a una audiencia para tales fines.

El juez decide por resolución motivada y contra ésta procede el recurso de apelación, cuya interposición no suspende la ejecución de la pena, salvo que así lo disponga la Corte de Apelación.

Art. 443. Condiciones especiales de ejecución. En los casos en que la sentencia incluye un régimen especial de cumplimiento de la pena, el juez de

ejecución vela por que se cumpla satisfactoriamente. El régimen previsto en la sentencia se puede modificar si sobreviniere uno de los casos indicados en el artículo 342.

Art. 444. Libertad condicional. El director del establecimiento penitenciario debe remitir al juez los informes necesarios para resolver sobre la libertad condicional, un mes antes del cumplimiento del plazo fijado al practicar el cómputo. La libertad condicional puede ser promovida de oficio o a solicitud del condenado o su defensor. El juez puede rechazar la solicitud, cuando sea manifiestamente improcedente o cuando estime que no transcurrió el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron el rechazo anterior.

Si la solicitud es denegada, el condenado no puede renovarla antes de transcurridos tres meses desde el rechazo, en cuyo caso un nuevo informe debe ser requerido al director del establecimiento penitenciario.

Cuando la libertad sea otorgada, en la resolución que lo disponga se fijan las condiciones e instrucciones, según lo establecido por la ley.

El juez vigila el cumplimiento de las condiciones impuestas, las cuales son reformables de oficio o a petición del condenado.

Art. 445. Revocación de la libertad condicional. Se puede revocar la libertad condicional por incumplimiento injustificado de las condiciones o cuando ella ya no sea procedente por unificación de sentencias o penas.

El incidente de revocación se promueve a solicitud del ministerio público.

Si el condenado liberado no puede ser encontrado, el juez ordena su captura. Cuando el incidente se lleva a cabo estando presente el condenado, el juez puede disponer que se lo mantenga bajo arresto hasta que se resuelva sobre el incidente.

El juez decide por resolución motivada y, en su caso, practica de nuevo el cómputo.

Las decisiones relativas a la libertad condicional son apelables.

Art. 446. Multa. Si el imputado no paga la multa dentro del plazo que fija la sentencia, es citado para que indique si pretende sustituir la multa por trabajo comunitario, solicitar plazo para pagarla o entregar bienes suficientes que alcancen a cubrirla. El juez puede autorizar el pago en cuotas.

Si es necesario, el juez ordena el embargo y la venta pública de los bienes embargados, conforme a las reglas procesales civiles, o ejecuta las fianzas.

Si es necesario transformar la multa en prisión, el juez cita al ministerio público, al imputado y a su defensor, oye a quienes concurren y decide por resolución motivada. Transformada la multa en prisión, ordena el arresto del imputado. Esta resolución es apelable.

Art. 447. Medidas de seguridad. Las reglas anteriores rigen para las medidas de seguridad en lo que sean aplicables.

No obstante, se observan las siguientes disposiciones:

1. En caso de incapacidad interviene el representante legal, quien tiene la obligación de vigilar la ejecución de la medida;
2. El juez determina el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida que en todos los casos será distinto a aquellos en que se cumplen las penas de prisión y puede modificar su decisión, incluso a petición del representante legal o de la dirección del establecimiento, pudiendo asesorarse a tales fines con peritos; y
3. El juez examina periódicamente la situación de quien sufre una medida, fijando un plazo no mayor de seis meses, entre cada examen; y decide sobre la cesación o continuación de aquella. Esta resolución es apelable

TITULO II. EJECUCION CIVIL.

Art. 448. Procedimiento. La ejecución de la sentencia en cuanto a los intereses civiles y la ejecución de los acuerdos de las partes sobre la reparación del daño que provoca la extinción de la acción penal se tramitan ante la jurisdicción civil.

Art. 449. Disposiciones finales:

- i. Vigencia.** Este código entrará en vigencia plena veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a todos los casos que se inicien a partir del vencimiento de este plazo;
- ii. Derogación y abrogación.** Queda abrogado el Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, promulgado por decreto del 27 de junio de 1884, con todas sus modificaciones y disposiciones complementarias;
- iii.** Queda derogada toda otra disposición de ley especial que sea contraria a este código.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dos; años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración.

Máximo Castro Silverio,
Vicepresidente en funciones
Hermes Juan José Ortiz Acevedo,
Secretario Ad-Hoc.
Rafael Angel Franjul Troncoso
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil dos (2002); años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración.

Andrés Bautista García,
Presidente
Julio Ant. González Burell,
Secretario Ad-Hoc.
Pedro Luna Santos
Secretario Ad-Hoc.
HIPOLITO MEJIA
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

Promulgo la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dos (2002), años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración.

Hipólito Mejía

HIPOLITO MEJIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NUMERO: 420-02

CONSIDERANDO: Que es de alto interés nacional la adopción y puesta en vigor de un nuevo sistema procesal penal, que a la par de brindar una solución efectiva a los conflictos con relevancia penal, garantice los principios fundamentales y derechos constitucionales propios del debido proceso;

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional ultima los trámites para la aprobación definitiva de un nuevo Código Procesal Penal, cuya puesta en vigor exige el concurso inmediato y sostenido de todos los sectores de la vida nacional;

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo mantiene su compromiso de participar y apoyar activamente, con los recursos humanos y materiales que fueren menester, las aspiraciones compartidas de construir un sistema de justicia que brinde respuestas de manera efectiva, humana y digna, al fenómeno criminal, como una forma de contribuir al desarrollo institucional, a la paz social y a una cultura de respeto a la ley;

CONSIDERANDO: Que la reforma procesal penal no se agota en la modificación del Código de Procedimiento Criminal de 1884, sino que su aplicación plena conlleva cambios estructurales, funcionales, institucionales y culturales que trascienden el ámbito del sistema de justicia penal;

CONSIDERANDO: Que la puesta en vigor de las disposiciones establecidas en el nuevo Código Procesal Penal requieren de la adecuación de todas las normas que directa o indirectamente estén relacionadas con este nuevo cuerpo normativo;

CONSIDERANDO: Que el concurso efectivo de todos los poderes públicos y sectores de la comunidad nacional, resulta vital para la preparación y puesta en vigor del nuevo sistema de justicia penal; En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTICULO 1.- Se crea la Comisión Nacional de Ejecución (CONAEJ) de la Reforma Procesal Penal, como organismo encargado de dirigir, dar seguimiento y orientar el proceso de puesta en marcha de la reforma procesal penal.

La Comisión Nacional de Ejecución (CONAEJ), estará integrada por:

1. La Vicepresidenta de la República, Dra. Milagros Ortiz Bosch, quien la preside;
2. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia;
3. El Presidente del Senado de la República;
4. El (la) Presidente de la Cámara de Diputados;
5. El Procurador General de la República;
6. El Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República;
7. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados;
8. El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia;
9. El Jefe de la Policía Nacional;
10. El Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura;
11. El Director de la Escuela Nacional de la Judicatura;
12. El Secretario Técnico de la Presidencia de la República;
13. El Director General de Prisiones;
14. Monseñor Agripino Núñez Collado;
15. El doctor Artagnan Pérez Méndez, y
16. El Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

ARTICULO 2. La Comisión deberá reunirse por convocatoria hecha por su Presidente, dentro de los próximos treinta (30) días, a partir de la fecha de emisión del presente decreto. En esta primera sesión se elegirá el Secretario y se procederá a la elaboración y aprobación de su reglamento interno.

ARTICULO 3. La Comisión Nacional de Ejecución tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

1. Aprobar el Plan Nacional de Implementación del Código Procesal